

EL ISTMO CENTROAMERICANO

ÍNDICE

Francesca Gargallo Celentani Luna llena de Honduras	9
Carmen Elena Villacorta Presentación	11
Aleksander Aguilar Entrevista con el activista hondureño Luis Méndez	19
Marvin Barazhona Del pacto bipartidista al pacto de impunidad: ingobernabilidad, corrupción y crisis general en Honduras	33
Matías Battaglia El rol de la Unión Europea en la crisis hondureña	43
Álvaro Cáliz Honduras: entre el recurso del método y el dramático despertar de un pueblo	49
Esteban De Gori Tele-candidato y malestar social	67
Bárbara Ester y Guillermo Javier González JOH, JOH, JOH, cómo Hernández se robó la reelección	75

Nick Middeldorp Violencia y represión contra defensores de tierra y territorio en Honduras, desde el golpe de Estado hasta la actualidad	83
Camila Ponce Lara ¿Qué podemos aprender de Honduras? El caso del movimiento antiextractivista desde sus actores	91
Silvina M. Romano Estados Unidos y las elecciones en Honduras: espiral de dependencia y subordinación	99
Eugenio Sosa Honduras: del golpe de Estado de 2009 al golpe electoral de 2017	105
Mauricio Valladares Gómez Los medios de comunicación en el traslape de la crisis poselectoral hondureña	111



LUNA LLENA DE HONDURAS

Francesca Gargallo Celentani

La luna roja de diciembre por la ventana
(llena en la noche larga)
sonríe para sus adentros.
Las corridas furtivas del toque de queda
la llenan de orgullo.

Nadie lo sabe, pero en Honduras
se prepara el mejor café de Centroamérica
y las mujeres salen a la calle
para vender rábanos y lanzar consignas
defienden hijas y mueren por montones.
Son lencas y la luna les sonríe porque ama el agua
son chortís, garífunas, mestizas
todas tienen niñas ancestrales en el río Gualcarque.
Son las que resisten a las masacres
y están locas, locas de pinturas y versos.

¿Puede una copla lo que la prensa calla?
En el universo de neón de las noches urbanas del norte
las pantallas titilan en la nada
de pronto es caliente el trópico a oscuras

las ametralladoras erizan la piel de miedo.
Los cuerpos de agua de la luna roja
se van secretos porque el ejército dispara
frente a los ojos de una muchachita en el torso de un hermano
son cuerpos de mujeres y cargan antorchas
por las calles de Tegucigalpa.

Inmensas, unen el fuego del norte y el agua del sur
las que piden favores a la luna
y gritan se enojan se ríen a carcajadas
desparpajientas.

Nadie lo sabe, pero la tierra de Honduras
es la más firme del istmo que corre de Belice a Panamá
roca que congrega el magma de sus hermanas.
La prensa calla que Honduras no es un portaviones
no es una estrategia geopolítica
no es sólo maquila. Honduras es una pacifista
que se viste de guerra como su Morazán
y cultiva zanahorias, se enfrenta a la palma de aceite
a la riqueza que empobrece.
La luna roja de diciembre descansa en la roca firme de Honduras.

2 de diciembre de 2017

PRESENTACIÓN

Carmen Elena Villacorta

Golpe de Estado, imposición de gobiernos de facto, grosera transgresión del orden institucional, irrespeto a la Constitución y a los parámetros básicos de la democracia, fraude electoral, anuencia de las elites en la entrega de los recursos naturales del país al capital transnacional, medidas de ajuste estructural, injerencia estadounidense, escandalosos índices de corrupción, presencia del crimen organizado en las altas esferas del Estado, criminalización y represión de la protesta social, persecución del pensamiento crítico, asesinato sistemático de líderes de movimientos sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, alarmantes niveles de pobreza y violencia y dramáticas tasas de migración, son algunos de los hechos que constituyen el explosivo cóctel de elementos operantes en la sangrante Honduras del siglo XXI.

La actual crisis política es continuación y consecuencia del 28 de junio de 2009, día en el que las Fuerzas Armadas depusieron al presidente electo Manuel Zelaya obligándolo a abandonar el país. Los militares hondureños no actuaron solos, por supuesto, sino en connivencia con el Partido Conservador, un sector del Partido Liberal, el empresariado, jerarcas de las Iglesias católica y evangélica, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, los grandes medios de comunicación y sectores poderosos de la sociedad civil del país. Todos

estos actores conspiraron, apoyaron, justificaron y agitaron a favor del golpe de Estado contra Zelaya.

El respaldo otorgado por el gobierno estadounidense y por la OEA a las elecciones que rápidamente se organizaron para legitimar en el poder a las fuerzas golpistas dio el toque final a lo que constituyó la inauguración de una práctica que se volvería recurrente en nuestro continente: la de los llamados “golpes blandos” o “neogolpismos”. Paraguay y Brasil han sido otros dos escenarios en los que los poderes fácticos consiguieron imponer su voluntad, manipulando la institucionalidad y tergiversando a su antojo las normas mínimas de convivencia democrática.

La interrupción violenta del gobierno de Zelaya mostró la imposibilidad de llevar a cabo elementales reformas de carácter popular dentro de los márgenes de la democracia procedimental y erosionó la legitimidad del sistema político hondureño. Pero, por otra parte, motivó el surgimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), expresión organizada de la movilización social antigolpista, y del Partido Libertad y Refundación (Libre), su brazo político. La crisis dio de sí el quiebre del bipartidismo tradicional y el debilitamiento del Partido Liberal de Honduras, al tiempo que lanzó a las calles a una heterogénea oposición formada por comunidades negras, indígenas, campesinas, feministas, LGTB, organizaciones antiextractivistas, ambientalistas, artistas, estudiantes y jóvenes de clases medias urbanas.

Desde entonces, el pueblo organizado de Honduras ha sido ejemplo de temple y valentía, y ha mantenido en alto, pese a la brutal represión, las banderas por el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, el retorno de la democracia, el cese de la corrupción y de la persecución a la oposición, la soberanía del territorio y, en definitiva, nada menos que la refundación de la nación. La contracara del sombrío panorama que hace difícil la vida y el ejercicio de las libertades en la sociedad hondureña es la fuerza de estos movimientos sociales diversos, capaces de llevar su hartazgo más allá del miedo en la lucha por un país que ofrezca dignidad y posibilidades.

Berta Cáceres, lideresa ambientalista del pueblo lenca, asesinada para acallar su voz rebelde y contestataria de mujer indígena, se ha convertido en símbolo de la combatividad del pueblo hondureño, un pueblo asediado por las más oscuras fuerzas, decidido a ofrecerles resistencia creativa y heroicamente. Berta es el rostro del carácter pacifista, movimientista, antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal y antirracista que ha adquirido la protesta social en Honduras.

Como en diferentes lugares de Nuestra América y del mundo, en Argentina permanecemos en alerta y vigilantes ante la grave situación de Honduras. De esa preocupación surgió, en 2014, el libro

electrónico *Honduras 2013. Golpe de Estado, elecciones y tensiones del orden político*¹.

En esa ocasión, un conjunto de intelectuales, periodistas y artistas, en algunos casos testigos presenciales del acontecer hondureño, ofrecieron diversas reconstrucciones y miradas de la crisis política abierta a partir del golpe de Estado. Los análisis allí vertidos abarcaron hasta la celebración de los comicios presidenciales en 2013, en los que se declaró ganador el candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández (JOH), en elecciones de muy dudosa transparencia. La principal rival del oficialismo fue entonces Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya.

El libro que ahora presentamos da seguimiento a ese primer esfuerzo por dar a conocer, dilucidar y reflexionar en torno de una crisis que pone de manifiesto la fragilidad de la democracia en América Latina, en general, y en Centroamérica, en particular. En el caleidoscopio de la realidad hondureña aparecen, diáfanos, actores y eventos que resumen la realidad latinoamericana contemporánea, con sus luces y sus sombras.

Nuevamente, a este segundo volumen dedicado a Honduras diversas voces concurren, algunas de ellas “reincidentes”, otras no, algunas hondureñas, otras no. A continuación, se ofrecerá una breve síntesis de los contenidos de estas contribuciones. A quienes participamos en esta iniciativa nos convoca la preocupación por la suerte de Honduras, conscientes de que la situación de ese país centroamericano pone al descubierto las amenazas que se ciernen sobre el resto de nuestro continente. Sirva esta publicación como reconocimiento y respaldo al heroico pueblo hondureño y a todas aquellas personas y colectivos que en Honduras y en Latinoamérica continúan atreviéndose a luchar contra la infamia, a favor de la verdad y la justicia.

Las preguntas de la entrevista que inaugura el libro fueron hechas por alguien que, evidentemente, camina las calles de Centroamérica, conversando con su gente y siguiendo las huellas de la movilización popular. Se trata del salvadoreño y brasileño Aleksander Aguilar, investigador y fundador de la red centroamericanista O Istmo. En esta entrevista, Aguilar se da cita con el activista, artista y educador popular hondureño Luis Méndez. Generoso, claro y honesto, este líder social expone la evolución del FNRP, desde su surgimiento en 2009,

1 Editado por el sociólogo argentino Esteban De Gori y publicado por Sains Soleil (Argentina), con el apoyo del Instituto de Investigaciones Gino Germani y del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), ambos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Disponible en <<http://www.sanssoleil.es/argentina/producto/honduras-2013-golpe-de-estado-elecciones-y-tensiones-del-orden-politico/>>.

hasta la coyuntura actual, en la cual, a su juicio, tal organización no ha jugado un papel decisivo. Méndez vincula al FNRP con organizaciones que ya operaban en el espacio sociopolítico antes del golpe de Estado. Lo novedoso a partir del punto de inflexión que significó el golpe fue, a criterio del autor, la división de las organizaciones populares hondureñas en dos líneas estratégicas: una que daba por clausurada la posibilidad de salvar la institucionalidad estatal y proponía la refundación de la nación por medio de una Asamblea Constituyente a la que debía arribarse a través de la lucha social (los “refundas”), y otra que postulaba la necesidad de crear un instrumento partidario que accediera al poder del Estado por la vía electoral para, a partir de ahí, impulsar la renovación de la Constitución. Entre los “refundas” se encontraría la COPINH, organización liderada por Berta Cáceres. Méndez no duda en considerar el asesinato de Berta como un crimen de Estado. También es contundente en su valoración del FNRP, considerando que quedó subsumido bajo la lógica electoral del Partido Libre.

El historiador hondureño Marvin Barahona pone el dedo sobre una de las llagas más enconadas de la crisis en su país: la corrupción. La tesis del autor es que la erosión de la institucionalidad del Estado y los galopantes niveles de corrupción han ido incrementando y retroalimentándose mutuamente, por lo menos desde 2003. El artículo marca tres acontecimientos que considera reveladores de ese círculo perverso: la renuncia del portavoz de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la presentación del informe de gestión del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) correspondiente a 2017 y el informe de la Misión Exploratoria de la ONU sobre el diálogo nacional tras la imposición del gobierno de Hernández, en febrero de 2017. La lectura de este artículo permite establecer un paralelo entre el régimen político mexicano —caracterizado como un “Estado fallido”— y el actual régimen hondureño, tomado por una clase política que ha hecho de las instituciones sus aliadas para el enriquecimiento ilícito y la expoliación descarada de los recursos de la nación.

El análisis del argentino Matías Battaglia encuadra el reciente fraude electoral en Honduras en el mapa de la política internacional, concretamente en el marco de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Afirma el autor que, si bien los países europeos terminaron por adherirse a la decisión de Washington de validar un proceso electoral cuestionado por los propios observadores provenientes de Europa y por la OEA, durante el lapso de un mes —comprendido entre el 26 de noviembre de 2017 (día en que se celebraron los comicios) y el 22 de diciembre del mismo año— ambas potencias discreparon en sus posiciones respecto de la transparencia conferida a las elecciones

presidenciales en Honduras. La razón de ser de tal discrepancia habría sido el interés de la Unión Europea por defender la democracia frente a sus rivales no democráticos, particularmente Rusia. De acuerdo con Battaglia, tal interés encontró un interlocutor favorable en Obama, mientras que la llegada de Trump a la Casa Blanca imprimió un giro nacionalista que termina por enfrentar a las dos potencias, porque el nacionalismo atenta contra los fundamentos de la propia Unión Europea.

Álvaro Cáliz, escritor e investigador hondureño, aporta una reconstrucción de la crisis, trazando una línea de continuidad entre 2009 y 2018. El autor llama la atención respecto del doble rasero con el que los poderes fácticos y la comunidad internacional miden la conducta de los grupos políticos de Honduras. Así, mientras que, en 2009, a Manuel Zelaya la iniciativa de llamar a referéndum para consultar al electorado sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente le costó la presidencia, en 2017, a JOH le fue permitido pasar por encima de la Constitución del país en su afán por reelegirse. Agudo, incisivo y directo, el texto de Cáliz se apoya en un valioso conjunto de fuentes y documentos oficiales para narrar pormenores del más grosero fraude electoral de la América Latina contemporánea. El artículo expone en detalle los intereses en juego y los cálculos políticos de los diversos actores involucrados en la crisis. Además, ofrece un esquema prospectivo compuesto por ocho escenarios posibles, lo cual instala la incertidumbre en el horizonte hondureño, tradicionalmente signado por la estabilidad bipartidista propia del pacto entre elites.

La reflexión del sociólogo argentino Esteban De Gori gira en torno de la creciente pérdida de legitimidad del sistema político y del desgaste de los históricos Partido Nacional y Partido Liberal. Es en un contexto de profundo descrédito de los partidos políticos y sus líderes en donde emerge la figura del “tele-candidato” Salvador Nasralla. Hombre mediático y reconocido, Nasralla se abrió paso en la escena política con un discurso “honestista”. La lucha contra la corrupción se convirtió en un caballo de batalla que le permitió, por una parte, ubicarse en un lugar transversal a la izquierda y a la derecha y, por otra, tomar distancia de liberales y nacionales. La inconstitucional maniobra reeleccionista de JOH dio lugar a la Alianza de Oposición entre los dos partidos frutos de la crisis: el Partido Anticorrupción (PAC), liderado por Nasralla, y el Partido Libre, liderado por Zelaya. La Alianza determinó que fuera Nasralla su candidato y la tendencia estadística lo dio por ganador el día de las elecciones, cuando JOH ordenó la interrupción de la transmisión del conteo. De Gori sostiene que, aun habiendo conseguido el control de las principales instituciones del Estado, el Partido Nacional está lejos de poder clausurar la crisis.

Bárbara Ester y Guillermo González, argentinos e investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), presentan una semblanza biográfica de Juan Orlando Hernández (JOH), desde su egreso de la escuela militar de San Pedro Sula, hasta el momento en el que un desacreditado Tribunal Supremo Electoral lo declaró ganador por segunda vez consecutiva en elecciones presidenciales. Licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y notario por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), JOH estudió una maestría en Administración Pública en la Universidad de Albany, en Nueva York, después de lo cual se convirtió en docente de derecho constitucional en su *alma mater*. Irónicamente, como lo subrayan los autores, fue el constitucionalista Hernández quien vulneró de diversas formas la Constitución para conseguir su reelección. Destaca en el relato de Ester y González el prematuro ingreso de JOH a la Cámara Legislativa, lugar en el que accedió formalmente a la política, estrechó vínculos con líderes del Partido Nacional e inició un meteórico ascenso que lo catapultó desde la presidencia del Congreso hasta la presidencia de la República, en 2013. La trayectoria de JOH, marcada por la corrupción y por el “populismo punitivo” practicado durante su primera administración, da cuenta de la anuencia del empresariado hondureño y del gobierno estadounidense hacia una figura funcional a sus intereses.

Con base en su trabajo de campo sobre el conflicto por tierras en Honduras, el investigador holandés Nick Middeldorp vincula autoritarismo con extractivismo. El autor explica cómo el golpe de Estado en 2009 supuso la ruptura entre el régimen político y los movimientos campesinos, indígenas y ambientalistas que, a partir de entonces, empezaron a sufrir la más violenta represión. Fue entonces cuando se produjo el emblemático asesinato de Berta Cáceres, que alarmó a la comunidad internacional y generó presiones contra los grandes inversionistas de los proyectos hidroeléctricos, entre ellos el Banco Mundial. El arribo del Partido Nacional al Ejecutivo imprimió un giro radical hacia lo que Middeldorp denomina “gobernanza ambiental autoritaria”, destinada a garantizar la economía extractiva. Resultado de la implementación de tal política han sido las concesiones a empresas internacionales para proyectos mineros e hidroeléctricos y la criminalización de los defensores de la tierra y el territorio. A juicio del autor, terminar con la violencia y la impunidad en Honduras exige una transformación jurídica a diversos niveles, además de que es perentoria la rendición de cuentas para las grandes corporaciones transnacionales.

Camila Ponce, socióloga chilena, remite a una de las organizaciones más relevantes de la Honduras actual: el Consejo Cívico de

Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Liderado por Berta Cáceres hasta el momento de su asesinato, en la conducción de este movimiento participa hoy Bertha Zúñiga Cáceres, hija de Berta. Conocedora de la literatura sociológica acerca de los movimientos sociales, Ponce ubica la COPINH en el mapa de las movilizaciones en el mundo de hoy. Su entrevista con la joven lideresa Bertha Zúñiga le permite caracterizar a la organización como un movimiento de nuevo tipo, que se aleja no solo de viejos modelos de movimientos sociales, sino también de los nuevos movimientos sociales. De acuerdo con la autora, el bajo perfil de los liderazgos, la articulación con otras organizaciones y otros objetivos de lucha y la reivindicación de la espiritualidad ancestral dotan a la COPINH y al liderazgo de la joven Bertha de una originalidad que merece atención y análisis por parte de las ciencias sociales.

La asimetría y dependencia de Honduras respecto de Estados Unidos constituyen un lastre histórico arrastrado desde el origen mismo de la nación centroamericana, tal como lo señalan diversos observadores. Virtud de la contribución de Silvina Romano, investigadora social argentina, es poner al descubierto los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales esa relación asimétrica y dependiente se actualiza hoy. En ese sentido, la autora da cuenta de una serie de tratados y acuerdos bilaterales destinados a entrenar y fortalecer a las Fuerzas Armadas hondureñas, con financiamiento y soporte técnico del gobierno estadounidense. Entre estas iniciativas destaca la decisión de replicar en Centroamérica el Plan Colombia, haciendo caso omiso de los múltiples cuestionamientos que ha recibido tal Plan. De acuerdo con Romano, en el caso concreto de Honduras, sectores del propio congreso estadounidense han cuestionado los fondos destinados a los militares hondureños, dadas las graves denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos “antinarcóticos”.

Eugenio Sosa, sociólogo hondureño, lanza al ruedo de la reflexión un concepto potente: el de “golpe electoral”. Lo ocurrido entre el 26 y el 27 de noviembre de 2017 en las elecciones presidenciales de Honduras fue, a juicio del autor, más que un fraude, un golpe electoral. En primer lugar, porque hay evidencias de la intervención directa del Poder Ejecutivo en el proceso de escrutinio de los votos. En segundo lugar, porque al momento de darse la interrupción arbitraria del conteo, el 57% de las urnas digitalizadas mostraban ya una ventaja del 5% del candidato de oposición, Salvador Nasralla, sobre el oficialista Hernández. Así las cosas, se impidió a un candidato electo asumir el poder. En tercer lugar, el golpe electoral contó con la anuencia de las Fuerzas Armadas, las cuales lo toleraron y, después, reprimieron brutalmente las movilizaciones sociales que intentaron revertirlo.

Finalmente, en cuarto lugar, Sosa menciona la aquiescencia otorgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos a las maniobras fraudulentas del oficialismo para permanecer en el poder.

El especialista en derechos humanos hondureño Mauricio Valladares se enfoca en un actor nodal: los medios de comunicación. Su contribución gira en torno de las preguntas: ¿qué produjo la pasividad y el simplismo con el que la mayoría de los medios ha asumido la crisis poselectoral en Honduras? y ¿por qué el cambio de criterio y la suavidad en las críticas periodísticas con respecto a 2009? Al final de su reflexión, enumera una serie de prácticas que conducirían a encontrar respuesta a sus interrogantes: “Sumas desconocidas de pagos por pautas publicitarias del Estado a los diferentes medios de comunicación y noticieros, la contratación de periodistas en diversas secretarías de Estado en plazas intermedias y de dirección, así como su inclusión en planillas a cargos de elección popular y de toma de decisiones por parte del oficialismo, son prácticas que se han implementado progresivamente”.

Nos resta agradecer a las autoras y autores que hicieron posible esta publicación. Los once textos que la constituyen recogen miradas desde dentro y fuera del país que dan cuenta de tres aspectos básicos: el sistema partidario y el régimen político, los movimientos sociales y la cuestión geopolítica. “Luna llena de Honduras”, poema de la escritora, filósofa, feminista y latinoamericanista Francesca Gargallo, escrito en el momento más agudo de la represión contra las protestas antifraude, es expresión de la sensibilidad que atraviesa esta contribución. Para Francesca nuestra mayor gratitud y fraternidad. Luis Mesa y Nick Middeldorp ofrecieron, generosamente, las imágenes con las que acompañamos cada artículo. Un agregado invaluable. Gracias a ellos por compartir en esta obra su trabajo fotográfico. En la entrevista a Luis Méndez que acá publicamos, el activista hondureño afirma sin ambages que “sin el internacionalismo, sin la solidaridad de los pueblos del mundo, Honduras sería más que una catástrofe, un pandemio político y social”. Sea esta publicación una contribución en ese sentido. Para Honduras, nuestra solidaridad y nuestra esperanza.

ENTREVISTA CON EL ACTIVISTA HONDUREÑO LUIS MÉNDEZ*

Aleksander Aguilar**

**“ES POSIBLE AVANZAR EN LA DEFENSA
DE LO PÚBLICO SIN PACTOS OSCUROS
NI COMPONENDAS CON EL RÉGIMEN”**

Conocí a Luis Méndez en noviembre de 2015. A través de Álvaro Cáliz, quien también escribe en este libro, lo contacté para que nos reuniéramos en Tegucigalpa para un café y una entrevista. Yo andaba en los procesos finales de investigación para mi tesis de doctorado y nuestra larga plática en aquel cálido día capitalino contribuyó enormemente para que pudiera sistematizar mis reflexiones sobre los procesos y contextos sociopolíticos centroamericanos recientes. Mucho ha

* Educador popular, artista audiovisual y poeta hondureño, impulsó la escuela de formación política y los primeros colectivos de resistencia popular del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y coordinó la escuela de formación política del Espacio Refundacional. Participó como productor en el proyecto de memoria histórica audiovisual “Mil Millas de Lucha” sobre la vida del padre Fausto Milla y fue presidente del Instituto Ecuménico de Servicio a la Comunidad.

** De nacionalidades brasileña y salvadoreña. Doctor en Ciencias Políticas, periodista y lingüista. Actualmente es investigador del Programa Posdoctoral “Pueblos en Movimiento”, de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Realiza investigaciones transdisciplinarias en las áreas de Relaciones Internacionales, Antropología Política y Estudios Culturales. Es miembro del Grupo de Trabajo “El istmo centroamericano repensando los centros: subjetividades, narrativas y geopolíticas” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), y fundador y coordinador de la red-plataforma centroamericanista “O Istmo” (en <www.oistmo.com>). Correo electrónico: antular@hotmail.com

pasado en Centroamérica desde entonces, en particular en Honduras, en estos escasos tres años. La búsqueda de horizontes comunes a través de amplios y concretos diálogos intelectuales y prácticas de luchas es una necesidad constante. Pero no solo eso.

Carmen Elena Villacorta, una de las organizadoras de esta publicación, en la reseña de nuestro primer libro sobre el país a raíz del golpe de Estado de 2009 definió Honduras como el espejo de Centroamérica¹. Pasados casi diez años del episodio que desató ese proceso golpista, es decir, desde la destitución y expulsión del país del presidente electo Manuel Zelaya, es posible pensar que Honduras es espejo no solo de Centroamérica, sino de toda Latinoamérica. La reacomodación de actores políticos reaccionarios en distintos contextos nacionales de todo el continente, lo que en concreto configuró amplias y peligrosas pérdidas en políticas sociales y en derechos humanos, ha estado ocurriendo en diferentes formatos: *impeachment*, fraudes electorales, golpes.

Honduras ha sido un laboratorio para estas reconfiguraciones, como históricamente lo han sido diferentes lugares en todo Centroamérica. Si en parte eso es culpa de las derechas, también lo es de las izquierdas, que en posiciones gubernamentales han apostado todo al neodesarrollismo, reduciendo el progresismo como horizonte de emancipaciones sociales. El progresismo se basa fundamentalmente en prácticas extractivistas de empresas, estatales o privadas, para financiar políticas públicas, y extractivismo es muerte y despojo de territorios. En esta fórmula, los retrocesos que vemos hoy difícilmente podrían ser diferentes.

En esta nueva entrevista con Luis Méndez, realizada por correo electrónico en marzo de 2018 para este nuevo libro sobre la coyuntura política en Honduras a partir del posfraude electoral de 2017, busqué conocer el contexto, los errores y las potencias de las recientes luchas hondureñas a través de quien estuvo y está en los frentes, las barricadas, los levantamientos. Educador popular, artista audiovisual y poeta, Luis fue uno de los iniciadores de la escuela de formación política y de los primeros colectivos de resistencia del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Coordinó la escuela de formación política del Espacio Refundacional, participó como productor en el proyecto de memoria histórica audiovisual “Mil Millas de Lucha” sobre la vida del padre Fausto Milla y fue presidente del Instituto Ecuaménico de Servicio a la Comunidad.

1 Ver Villacorta, 2014.



El FNRP es una organización sociopolítica de Honduras surgida en respuesta al golpe de Estado de 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya fue retenido por militares y expatriado a Costa Rica, lo que desató un proceso de organización entre los simpatizantes del presidente y sectores populares, sindicales y progresistas, que repudiaron el golpe y tomaron las calles de Tegucigalpa para protestar. De este proceso de lucha surgió el Partido Libertad y Refundación (Libre) en 2012. Después de muchas maniobras, el gobierno golpista terminó por oficializarse en el Congreso Nacional, permitir la elección de Porfirio Lobo (candidato de la derecha) y continuar con los procedimientos institucionales que culminaron con la reelección fraudulenta de Juan Orlando Hernández (JOH). Con esa trayectoria y en ese contexto ¿cuál es la situación actual del FNRP? ¿Cuál es su valoración de esa experiencia? ¿En qué medida las presentes luchas hondureñas se vinculan con lo que ha hecho y con lo que es el FNRP?

Un apunte previo e importante para contextualizar la situación del FNRP parte de algunos elementos claves: a la conformación del FNRP le antecedió la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular² y el Bloque Popular³, que en su momento aglutinaron amplios sectores del movimiento social y popular en una etapa que va desde la entrada del neoliberalismo en la región (década del noventa) y la lucha popular contra los tratados de libre comercio en Centroamérica, hasta la ruptura de la institucionalidad con el golpe de 2009. En aquel año se conformó el Frente Nacional contra el Golpe de Estado y seguidamente se fundó el FNRP, una acumulación de fuerza de poder popular que culminó con la conformación de un instrumento político-electoral definido como Partido Libertad y Refundación (Libre).

Creo que de la pregunta que me planteas surge otra quizá un poco incomoda, pero que es necesario responder: ¿existe hoy día realmente el FNRP? Hago este planteamiento a partir de un argumento primario que parte de la etapa fundacional del FNRP⁴, pensado como un gran cuerpo que logró incorporar distintos actores políticos, sociales y populares, con un posicionamiento político e ideológico contundente anticapitalista, antioligárquico, antiimperialista, antipatriarcal y antirracista. En otro sentido, un Frente Nacional de Resistencia Popular con ejes claves para el avance estratégico: la formación política, la organización y la movilización popular, con una clara idea de su proyecto de construcción de poder popular, de la refundación del Estado

2 Sobre la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular ver *La Vía Campesina*, 2007.

3 Sobre el Bloque Popular ver *Minga Informativa de Movimientos Sociales*, 2010.

4 Ver la definición del FNRP en *Redacción Popular*, s/f.

y de un nuevo pacto social que pasaba por una Asamblea Nacional Constituyente originaria y refundacional. De este FNRP original, al FNRP de hoy, creo que la coyuntura ha ido marcando y desplazando no solo el sentido orgánico de sus estructuras locales, nacionales y de coordinación, sino del proyecto estratégico frentista. Bajo esa idea de hacer del FNRP un gran cuerpo y del Partido Libre un brazo político electoral, la realidad mostró con el tiempo que “el brazo político subsumió el cuerpo”.

Las fuerzas populares en etapas posteriores, y ante las derrotas vía fraude electoral, se han enfrentado a un fraccionamiento de fuerzas, de ideas y de referentes, y al repliegue frente a un panorama sombrío de ausencia de conducción política y estratégica, de incertidumbre sobre el proyecto articulador de la fuerza popular. Por lo tanto, puedo concluir que el FNRP, si bien es cierto que existe como estructura nominal y que constituye un proyecto histórico y referencial de suma relevancia después del golpe de 2009, es también un proyecto transitorio hacia otras formas de organización de las fuerzas populares que rechazan formatos unidireccionales y verticales de conducción, propios de los movimientos sociales tradicionales e incluso de los nuevos. No fue extraño que, ante el fraude electoral de 2017, en la etapa de los levantamientos territoriales a nivel nacional, el FNRP no jugara un papel como espacio articulador del proceso. Ante la ausencia de un frente de lucha surgió una convergencia contra el continuismo y el fraude electoral; un espacio amplio que logró articular organizaciones y movimientos tanto del sector social popular, como de la Alianza de Oposición.

Los tres primeros meses de luchas populares y callejeras contra el fraude electoral de JOH a finales de 2017 y comienzos de 2018 han sido bastante intensos, pero también han enfrentado mucha represión, violencia y persecución. Hoy la población de Honduras tiene temor a poner denuncias porque la captura del sistema de justicia por poderosas fuerzas alineadas con JOH ha generado un ambiente de criminalización de la protesta social. Los líderes y lideresas de la oposición y de la resistencia han sido acusados de “terrorismo” y perseguidos en sus propios hogares. En esta coyuntura política, levantamientos territoriales de las masas populares concientizadas, insurrección y desobediencia civil ¿siguen siendo los caminos de lucha más indicados? ¿Cree usted que la única salida posible de la crisis hondureña todavía es la “rebelión popular”, como ha señalado en su texto “Honduras post electoral en crisis; consolidación o fin de la naciente dictadura”, publicado el 17 de enero de 2018?

La rebelión popular y los levantamientos territoriales representan una vía legítima de los pueblos para contener y, en el mejor de los casos,

derribar el proyecto de muerte del actual régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández. Levantamientos territoriales que van más allá de la defensa del voto, de los procesos electorales; levantamientos territoriales que pasan por la defensa de la vida, de los bienes comunes de la naturaleza, de lo público. En ese sentido, sostengo la tesis de la insurrección popular como una vía legítima, de hecho y de derecho, tal como está establecido en el artículo 3 de la Constitución de la República:

ARTICULO 3. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional⁵.

Para la dictadura de JOH, estas formas de rebelión popular y de autodeterminación de los pueblos representan una amenaza al *statu quo* y a su ya debilitada credibilidad nacional e internacional, por tanto, al régimen le es más fácil someter al pueblo a una dictadura de Estado, de terror y muerte, que abandonar su proyecto continuista. La rebelión popular y los levantamientos territoriales que hemos visto después de las elecciones de 2017 han sucedido de forma organizada y no organizada, en situaciones espontáneas o condicionadas por la coyuntura. En estos procesos autoconvocados la población busca mecanismos de organización y defensa, rechazando incluso la conducción de líderes agotados o desacreditados, tanto de partidos políticos como de organizaciones del mismo movimiento popular.

El actual ambiente sociopolítico en Honduras sigue marcado por el conflicto y la violencia, lo que es una característica en el país desde hace bastante tiempo y se ha convertido en tónica cotidiana desde que se ampliaron y se intensificaron las movilizaciones populares ante los oscuros resultados de las elecciones presidenciales de noviembre de 2017. La novedad de los procesos de lucha hondureños, sin embargo, es la aparente falta de estrategia de la actual oposición —encabezada por el candidato “derrotado” Salvador Nasralla, por el presidente hondureño depuesto en 2009, Mel Zelaya, y por el Partido Libre— para lograr respuestas contundentes y constructivas a sus reclamos. En su opinión, ¿esa lectura es correcta? ¿La oposición partidaria no ha sido capaz de conducir la potencia y la disposición a luchas callejeras y protestas populares de la sociedad hondureña?

5 Ver Constitución Política, 1982.

Honduras tiene una historia de golpes, de enclaves y de cálculos políticos. Y esa colonialidad de las formas de hacer política electorera carga con una impronta marcada por la historia del caudillismo, que en esta coyuntura, como en otros momentos de nuestra historia política, hace más mal que bien a los procesos emancipatorios. El triunfo de la huelga de 1954⁶ radicó en que fue conducida por los trabajadores, por los comités de huelga, por comités locales. En contra de lo que ocurrió en 2009 y 2017, el movimiento social y popular organizado y las poblaciones no organizadas han estado en una especie de vagón de cola de un proyecto por la disputa del poder. Por tanto, las fuerzas populares, al carecer de autonomía y de autodeterminación frente a la crisis y frente a la disputa por el poder, crean excesiva dependencia de esos liderazgos políticamente inestables o excesivamente calculadores. En ese sentido, sí, existe una ausencia de conducción estratégica, de un plan mínimo de lucha que permita a las fuerzas populares avanzar en su verdadero proyecto de poder popular.

Hemos leído relatos sobre cómo la inversión extranjera en proyectos extractivistas en el país (represas y mineras) se ha paralizado o ha disminuido debido a las denuncias por violaciones de los derechos humanos y por impunidad tras la ejecución de la activista Berta Cáceres en 2016, hecho que tuvo gran repercusión internacional. Sin embargo, bajo su influencia y la de otros líderes y lideresas, los indígenas del país, en la defensa de sus territorios contra políticas extractivistas, han sido tildados de “opositores al desarrollo”. ¿Tal prejuicio se ha extendido a otros sectores de luchas, a colectivos y a individuos que denuncian las concesiones ilegales y demandan la investigación de las muertes de defensores de territorios? ¿Cuál es el impacto del asesinato político de Berta Cáceres en la organización de las luchas sociopolíticas en Honduras?

Berta mostró un horizonte no solo a la resistencia hondureña, sino a las resistencias del mundo. Berta es todas las luchas porque le apostó a todos los procesos orientados a la emancipación de los pueblos. Berta, el COPINH⁷ y la resistencia de Río Blanco contuvieron y sacaron al monstruo de Sinohydro y a Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA), empresa de capital hondureño que, con un préstamo de 24,4 millones de dólares otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), subcontrató a la empresa china

6 Ver *Honduras Laboral*, 2011.

7 COPINH: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.

Sinohydro, perteneciente al grupo Power Construction Corporation of China. Se trató de una victoria del pueblo lenca en defensa de los bienes comunes de la naturaleza. Berta en defensa del bosque, Berta en su lucha contra las tropas estadounidenses en Honduras, Berta antipatriarcal, antirracista, antiimperialista, anticapitalista.

Esa es una de las dimensiones de Berta, de su legado que renace en cada lucha. Frente a eso, el discurso de los grupos empresariales, políticos y transnacionales, y de los medios de comunicación castrados por el capital, va en la línea de tildar a quienes defienden los territorios como “opositores al desarrollo”, bajo la lógica de sus propios conceptos de “desarrollo”, de un desarrollo centrado en la muerte, en la aniquilación y en la acumulación de capital. Por esa razón, la empresa privada, en contubernio con el Estado de Honduras, asesinó a Berta. En esto somos contundentes al plantear que el asesinato de Berta fue un crimen de Estado.

Ella fue pionera del proyecto refundacional, iniciadora de los levantamientos territoriales. Después de Río Blanco, escalonadamente se han llevado a cabo otros levantamientos en varios lugares: en el norte, sur, oriente y occidente, y en todas las luchas el espíritu de Berta, su mirada cosmogónica de la vida, está presente. Berta siempre habló de la fuerza ancestral, fuerza y legado que hoy posibilitan la construcción de unidad, consensos y luchas.

El caso de la Misión contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH) parece emblemático en el debate sobre el peso de los factores internacionales y geopolíticos en la crisis hondureña. La iniciativa, que se inspiró en la CICIG guatemalteca, fue recibida por las fuerzas de oposición y resistencia con desconfianza, con críticas que señalaban que su objetivo era mitigar el descontento social, desmovilizar a la ciudadanía y darse tiempo para conseguir la reelección. Sin embargo, la MACCIH ha desentrañado algunos casos de corrupción, ha ubicado culpables y ha exigido responsabilidades civiles y penales, todo lo cual se convirtió en una amenaza para JOH y sus aliados del poder legislativo y judicial (dejó al descubierto que los diputados se apropiaban de fondos públicos destinados a las ONG para implementar acciones con comunidades, que en realidad eran falsas y no se ejecutaban; hasta el momento están implicadas por lo menos treinta ONG y sesenta diputados). ¿Qué análisis hace usted del contexto en que está inserto el país y de la influencia de estos factores sobre la evolución de la actual crisis?

La OEA históricamente ha desempeñado un papel de comodín para los intereses hegemónicos del imperialismo y de la derecha en el continente, y, en el caso del posgolpe de 2009, jugó un papel similar con

el Acuerdo de San José, el Pacto de Guaymuras y posteriormente con el Acuerdo de Cartagena⁸.

La MACCIH surgió como una misión contra la corrupción y la impunidad con un papel de “acompañamiento”, dijo el régimen, como argumento para restarle beligerancia. Hasta ahí el guion del régimen estaba bien planificado, incluso para el mismo Luis Almagro (actual secretario general de la OEA), quien calculó que dicha misión en Honduras estaba totalmente subordinada a sus decisiones. Sin embargo, la realidad sobrepasó cualquier cálculo político y la MACCIH, que en un primer momento no fue bien recibida por la población hondureña ni por el movimiento de indignación debido a los antecedentes de la OEA (por la cercanía de esta a grupos de una supuesta e impostada sociedad civil), esa MACCIH no bien querida en sus inicios, comenzó a dar avisos de autonomía e independencia y, con las primeras denuncias y planteamientos contundentes de querer ir a la raíz de los problemas, de nombrar las redes del crimen organizado al interior del mismo gobierno, la población comenzó a darle un voto de confianza, sobre todo cuando señaló la red de diputados⁹ como punta de lanza o el hilo para llegar a la gigantesca red de corrupción al interior del Congreso Nacional.

Este remezón provocó que el gobierno, que había solicitado la MACCIH, se volviera detractor de esta bajo el argumento de defensa de la “soberanía”, a tal grado que la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Misión. Seguidamente, con la venia de Luis Almagro y su doble discurso, se orilló a una parte de los integrantes del equipo técnico, que renunciaron a la Misión, incluido su vocero Juan Jiménez Mayor. Tanto movió el piso la MACCIH a las redes de corrupción que, ante el encarcelamiento de la ex primera dama, Rosa de Lobo, y la privación de sus bienes (incluso de la casa que en su momento perteneció al expresidente Porfirio Lobo), y ante la denuncia de corrupción a la red de diputados, el Congreso intentó derogar la Ley de Privación de Bienes a fin de blindar sus estructuras de corrupción. Esta acción fue vetada por el régimen más por la presión de la comunidad internacional y de los mismos Estados Unidos, que por un interés de la dictadura. En este escenario de crisis también jugó un papel la hipocresía de la comunidad internacional, por un lado avalando un fraude electoral y, por otro lado, intentando contener la corrupción, sino en toda, en gran parte de la estructura estatal. Una comunidad internacional que evadió ir a la raíz del problema.

8 Ver el Acuerdo de Cartagena en *Equipo Nizkor*, 2011.

9 Ver *Radio Progreso*, 2017.

Hemos visto, e incluso hemos participado en algunos, actos de apoyo y solidaridad internacional con el pueblo de Honduras en resistencia al golpe de 2009 y contra el fraude de 2017 en la región centroamericana, que también han ocurrido en otras geografías. ¿Esto ha tenido algún significado o impacto en Honduras? ¿Cuál ha sido la importancia de ese internacionalismo en los momentos más fuertes de las protestas callejeras?

Sin el internacionalismo, sin la solidaridad de los pueblos del mundo, Honduras sería más que una catástrofe, un pandemio político y social. En el caso del fraude electoral de 2017, el papel que jugaron tanto los movimientos sociales, los partidos políticos progresistas y los medios alternativos de comunicación, como otros actores del internacionalismo latinoamericano y de otros continentes, fue extraordinario. Levantaron sus voces por el mundo denunciando no solo un fraude avalado por la OEA y la Unión Europea, sino también las amenazas, persecuciones y asesinatos en contra de la resistencia anti-JOH, y la permanente violación de los derechos humanos.

En 2015, tras hacerse público el desfalco del Sistema de Salud (por más de 335 millones de dólares), se generó un movimiento de indignación de gran magnitud. Su principal expresión fue la Marcha de las Antorchas, que durante algunos meses —cuando JOH ya era presidente del país y resonaban los gritos de “Fuera JOH!”— logró reunir miles de personas en intensas manifestaciones callejeras para denunciar el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y, deliberadamente buscando alejarse de los partidos institucionales y tradicionales, se convirtió en un símbolo de un posible “despertar” de la ciudadanía frente a las ausencias y malas gestiones del Estado hondureño. Tras la “incorporación” de partidos políticos al movimiento, las antorchas se dividieron en dos grupos: la Plataforma Indignada y Honduras Indignado Somos Todos. ¿Cuál es la relación de esas movilizaciones con las luchas en contra del fraude de 2017? Los actores políticos involucrados en aquel momento y hoy ¿eran y son distintos? ¿Qué retroalimentaciones han ocurrido entre esos intensos momentos de protesta y de acción directa en un periodo de apenas dos años?

El latrocinio al IHSS¹⁰ constituyó un detonante para “otro despertar” de la ciudadanía, una especie de “sacudida” a la conciencia individual y colectiva de la población en defensa de lo público y en contra de la corrupción. La Marcha de las Antorchas significó eso, pero también

10 Ver *Radio Progreso*, 2015.

representó una ruptura en las dinámicas de conducción de los movimientos sociales tradicionales (movimiento sindical, campesino y magisterial) y el nacimiento de los nuevos. Incluso se podría pensar que esos procesos de indignación pasaron a ser una vertiente muy propia de los novísimos movimientos sociales, que poseían ciertas fortalezas, pero también debilidades de carácter estratégico.

Los partidos políticos, directa o indirectamente, siempre estuvieron presentes en el movimiento de indignación; la juventud que lideró el proceso desde sus inicios estaba integrada por militantes de los partidos de oposición (Libre, PAC,¹¹ Liberal, PINU¹²). De alguna manera, la mayor crisis que generó este movimiento fue el desplazamiento de los “viejos” líderes del mismo FNRP, que no pudieron ponerse al frente de la conducción, ser la vanguardia del movimiento, lo que trajo consigo una crisis por la disputa del poder.

Plataforma Indignada, Honduras Indignado Somos Todos y Oposición Indignada fueron colectivos cuyos militantes asumieron un papel importante en cuanto a la planificación de las convocatorias, la movilidad de información y los posicionamientos en redes sociales. Lamentablemente, con la llegada de la MACCIH, más la coyuntura electoral, se frenó la presión de la calle y ciertos líderes de esos movimientos pasaron a formar parte de las planillas político-electorales de sus partidos. La zona norte entró en otra dinámica, de más autonomía, con mayores niveles de organización y sostenibilidad de la lucha a través de las Mesas de Indignación, las cuales hoy siguen llevando a cabo acciones de movilización popular. El movimiento de los indignados levantó la bandera con el lema “¡Fuera JOH!” que, más que una consigna, se volvió un punto de consenso y unidad para el avance de las fuerzas populares.

En relación con la pregunta anterior y ampliándola, una característica de las luchas hondureñas en aquel periodo de 2015 que llamó la atención de los científicos sociales fue la presencia de muchos y muchas jóvenes, especialmente estudiantes universitarios —que no quieren estar asociados a una militancia partidaria específica— y la convocatoria de movilización a través de redes sociales y herramientas digitales. ¿Esto ha seguido siendo una marca de las luchas a partir de 2017? ¿La juventud y la tecnología digital han consolidado su presencia en las actuales luchas políticas hondureñas?

Si existe una fuerza-motor de la movilización popular en esta etapa, corresponde mencionar y reconocer el papel del movimiento

11 PAC: Partido Anticorrupción.

12 PINU: Partido Innovación y Unidad.

estudiantil universitario, que no solo ha defendido de manera permanente la autonomía universitaria, también ha acuerpado las luchas de otros sectores en defensa de lo público y ha acompañado a organizaciones y movimientos populares. En medio de las contradicciones internas que haya tenido el movimiento estudiantil, son los jóvenes quienes han dado muestra de que es posible avanzar orgánicamente sin los formatos “caudillistas” típicos de organizaciones y movimientos políticamente disfuncionales, nichos de seguridad y de prebendas para ciertas dirigencias.

En un país donde sectores de la “dirigencia” del movimiento sindical han pactado con el régimen al grado de hacer reconocimientos públicos a funcionarios de la dictadura¹³, ¿qué queda sino la indignación, el malestar en el imaginario colectivo, la desazón ante líderes “traidores” al movimiento?

En tal sentido, la juventud universitaria, pero también la juventud de otros movimientos y organizaciones sociales y políticas, denota una profunda repulsión a estos liderazgos que han controlado no solo el movimiento sindical, sino otros espacios sociales y populares. Tampoco significa que el movimiento estudiantil no esté expuesto a contar con infiltrados pero, ante el dilema de ausencia de referentes, este movimiento irrumpe con formas más democráticas y horizontales en la toma de decisiones, con la plena convicción de que es posible avanzar en la defensa de lo público sin pactos oscuros ni componendas con el régimen; en suma, la juventud representa un rostro ético de la lucha, y eso ya es un avance.

Por fin, ¿qué es lo que exactamente significa la propuesta de una “Asamblea Nacional Constituyente originaria y refundacional”? ¿Quiénes son sus impulsores, cómo se ha originado y cuál es el actual estado de su discusión y viabilidad en Honduras?

Volvemos al punto de partida. En la etapa fundacional del FNRP se produjo un fraccionamiento, de modo que se crearon dos corrientes de pensamiento. Una de ellas, más sistémica, planteó avanzar hacia la toma del poder bajo la dinámica de una institucionalidad atrapada por el golpismo (Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema, Ministerio Público y toda la institucionalidad subordinada al Ejecutivo), y desde allí dar la batalla con un instrumento político electoral que surgió justamente a partir de la firma del Acuerdo de Cartagena. La otra corriente, “Refundacional” (cuyos integrantes en su mayoría venían de

13 Sobre el reconocimiento de sindicalistas a un ministro de la dictadura, ver Presidencia, s/f.

la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular), planteó justamente lo contrario como salida a la crisis, a la ruptura de la institucionalidad posgolpe de 2009: una constituyente originaria y refundacional, en contraposición a una constituyente derivada que planteó el FNRP durante procesos asamblearios en el año 2011. Este fue un punto de inflexión, de contradicción profunda que significó la ruptura del movimiento Refundacional con la estructura de coordinación del FNRP.

El Espacio Refundacional planteó un proceso de autoconvocatoria constituyente y la movilización permanente como vías para sacar a la dictadura del poder, ¿qué pasó entonces? Un sector del movimiento popular afín al Bloque Popular se alineó a la conducción del expresidente Manuel Zelaya como coordinador general del FNRP, y otro sector, cuyos integrantes en su mayoría venían de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, se unió al Espacio Refundacional. De alguna manera, en ese momento se formaron dos frentes, uno más sistémico, que apostaría por la vía electoral, y otro más antisistémico que no veía condiciones en aquel entonces para llevar a cabo una batalla electoral bajo las reglas del golpismo.

Berta Cáceres del COPINH, Miriam Miranda de la OFRANEH, Magdalena Morales de la CNTC, el padre Fausto Milla del INEHS-CO¹⁴, el padre Ismael Moreno del ERIC¹⁵, Tomas Andino del PST¹⁶, entre otros actores del movimiento popular, fueron claves para impulsar el ideario del proyecto refundacional marcado por las luchas territoriales en defensa de los bienes comunes de la naturaleza, por los procesos de autoconvocatoria populares, por la construcción de poder desde abajo y por otras formas de pensar la política y el poder.

Para concluir, creo que de esa etapa posgolpe, y pese a las contradicciones entre una línea electorera y otra refundacional, el proyecto político electoral asumió a mitad de camino una identidad en relación con la refundación y definió como instrumento político electoral el Partido Libre, lo que a mi parecer constituyó un aporte refundacional al ideario político del partido.

En aquel momento ni las líneas de conducción ni la militancia del partido comprendían a profundidad la categoría de “refundación”, como ejercicio dialéctico para comenzar, y luego como práctica militante; menos aún el concepto de autoconvocatoria o el de levantamientos territoriales como hechos concretos de lucha, pues eran planteamientos políticos contruidos desde el Espacio Refundacional,

14 INEHS-CO: Instituto Ecuménico de Servicios a la Comunidad.

15 ERIC: Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús.

16 PST: Partido Socialista de los Trabajadores.

donde los llamados “refundas” formaron su propia estructura orgánica y su identidad propia, por lo que se habló entonces de una línea “refundacional” y de una línea “electoral”, que surgieron tras el golpe de 2009. En 2018 la contradicción continúa.

BIBLIOGRAFÍA

- Constitución Política 1982 (Honduras). En <<http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Constitucion2017.pdf>>.
- Equipo Nizkor* 2011 (Honduras) “Texto del Acuerdo de Cartagena que permitirá el retorno de Zelaya a su país” 22 de mayo, en <<http://www.derechos.org/nizkor/honduras/doc/zelaya408.html>>.
- Honduras Laboral* 2011 (Honduras) “La huelga de 1954, paso a paso” 30 de abril, en <<https://honduraslaboral.org/article/la-huelga-de-1954-paso-a-paso/>>.
- La Vía Campesina. Movimiento Campesino Internacional* 2007 “Honduras: demandas de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) al Gobierno” 9 de septiembre, en <<https://viacampesina.org/es/honduras-demandas-de-la-coordinadora-nacional-de-resistencia-popular-cnrp-al-gobierno/>>.
- Minga Informativa de Movimientos Sociales* 2010 “10 años de lucha contra la profundización del modelo neoliberal” 19 de julio, en <<https://movimientos.org/node/17754?key=17754>>.
- Presidencia de la República s/f (Honduras) “En reunión de despedida: dirigencia obrera del país entrega pergamino de reconocimiento a Secretario Coordinador de Gobierno”, en <<http://www.presidencia.gob.hn/index.php/transparencia/3951-en-reunion-de-despedida-dirigencia-obrera-del-pais-entrega-pergamino-de-reconocimiento-a-secretario-coordinador-de-gobierno>>.
- Radio Progreso* 2015 (Honduras) “Caso IHSS: el poder detrás del mayor acto de corrupción en Honduras” 15 de mayo, en <<http://radioprogreso.hn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2073-caso-ihss-el-poder-detr%C3%A1s-del-mayor-acto-de-corrupci%C3%B3n-en-honduras>>.
- Radio Progreso* 2017 (Honduras) “Caso ‘Red de Diputados’, enfrenta a la MACCIH con la Corte Suprema de Justicia” 14 de diciembre, en <<http://radioprogreso.hn.net/elecciones/2017/12/14/caso-red-de-diputados-enfrenta-a-la-maccih-con-la-corte-suprema-de-justicia/>>.
- Redacción Popular* s/f “Definición del Frente Nacional de Resistencia Popular”, en <<http://www.redaccionpopular.com/content/definici%C3%B3n-del-frente-nacional-de-resistencia-popular-fnrp>>.

Villacorta, Carmen Elena 2014 “Honduras: espejo de Centroamérica” en *El Faro* (Honduras) 22 de julio, en <<https://elfaro.net/es/201407/academico/15734/Honduras-espejo-de-Centroam%C3%A9rica.htm>>.

DEL PACTO BIPARTIDISTA AL PACTO DE IMPUNIDAD: INGOBERNABILIDAD, CORRUPCIÓN Y CRISIS GENERAL EN HONDURAS

Marvin Barazhona*

INTRODUCCIÓN

En la crisis política actual de Honduras está en juego la gobernabilidad en los parámetros de una democracia de pretendida ascendencia liberal, establecidos desde la transición política de 1982, que dio paso a sucesivos gobiernos civiles. La reelección presidencial de finales de 2017 y el fraude electoral por el que esta se impuso trasgredieron todos los límites fijados por la Constitución de 1982. Estos hechos le abrieron un ancho paréntesis de incertidumbre a la ingobernabilidad, que ahora afecta a la sociedad y debilita a un gobierno que no oculta su predilección por el mandato dictatorial.

Entre el pasado de una Constitución liberal y la incertidumbre actual ante una voluntad política autocrática, surge la pregunta sobre el modelo de orden político y social que se pretende establecer en Honduras tras la reelección forzada y fraudulenta de Juan Orlando Hernández. Las características que determinan su segundo mandato son principalmente dos. La primera es haber desatado, desde

* Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de los libros *Evolución histórica de la identidad nacional* (Tegucigalpa: Guaymuras, 1991) y *Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica* (Tegucigalpa; Guaymuras, 2004), entre otras obras de contenido histórico y social.

la formalización de su “reelección”, una nueva ola de derechización neoconservadora que afecta los principales núcleos de la convivencia ciudadana, especialmente las instituciones educativas, las Iglesias, los medios de comunicación y, finalmente, los hogares. La segunda característica es su decisión de responder con el uso de la fuerza a la protesta social que emergió como reacción a la imposición de su régimen, lo que deja implícita la idea de que su propósito es erradicar toda acción política y social que disienta de su mandato.

La voluntad de privilegiar la solución militar, antes que intentar una solución política que satisfaga las demandas de la oposición y la ciudadanía, hace que intervengan una serie de factores internos y externos que, paradójicamente, vuelven más compleja la posibilidad de encontrar una salida real a la crisis política. En este artículo se intentan identificar los factores determinantes en tal disyuntiva, articulando la diversidad de hechos y actores dentro del modelo político actual.

CORRUPCIÓN Y CRISIS INSTITUCIONAL

La renuncia del portavoz de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el jurista peruano Juan Jiménez Mayor, la presentación del informe de gestión del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) correspondiente a 2017 y el informe de la Misión Exploratoria de las Naciones Unidas sobre el diálogo nacional tras la imposición del gobierno de Hernández fueron acontecimientos que marcaron sensiblemente la coyuntura poselectoral.

Estos hechos revelan interioridades de la realidad política hondureña que dejan al descubierto tanto la corrupción prevaleciente, como una crisis institucional que, ya en 2008, enviaba señales de las profundas fallas que afectaban al sistema político y la institucionalidad del Estado. De hecho, desde los primeros años del siglo actual, la corrupción y la crisis institucional han seguido un curso ascendente en el que aparecen estrechamente relacionadas y, en la práctica cotidiana, se complementan y retroalimentan. Este ascenso ha venido acompañado por el crecimiento de otras transgresiones endémicas como la impunidad, la ausencia del imperio de la ley, la fragilidad de la democracia y una generalizada crisis económica y social. Estos fenómenos sirven, además, para revelar la presencia de actores no formales, pero actuantes y con poder de decisión sobre lo económico, político y social, como el crimen organizado y el narcotráfico.

Antes de que estos fenómenos y estas crisis alcanzaran la amplitud que hoy se les reconoce, las élites económicas, incrustadas en el bipartidismo tradicional y en los sectores estratégicos de la economía, ya habían creado un contexto favorable al resquebrajamiento de la institucionalidad del Estado. La erosión desde adentro, como

fue patente en el caso del Ministerio Público desde 2003, así como la “cooptación” de otras instituciones públicas para ponerlas al servicio de intereses exclusivistas, fueron procesos con antecedentes incluso más lejanos. A la acción política de las elites para ejercer un control absoluto sobre la institucionalidad estatal siguió un proceso al que se sumaron los actores económicos no formales, favorecidos por la convergencia de intereses con las elites formales.

Así se fueron tejiendo redes con actores reconocidos y no reconocidos, formales e informales, que hicieron de la colusión un instrumento útil para consolidar y fomentar negocios lícitos e ilícitos. La conjunción de estos factores y la voluntad de colaboración que se forjó entre los actores mencionados han sido determinantes para mantener una institucionalidad débil y al servicio de la corrupción y la imposición política. El reconocimiento público del deterioro institucional, de su debilitamiento progresivo y de su colusión con intereses completamente ajenos al interés público llevó finalmente al Estado a una crisis por desahucio de su institucionalidad.

Paralelamente, lo que va del siglo XXI ha sido un periodo de eferescencia para los grandes negocios en torno del Estado, entre estos las contrataciones y el otorgamiento de concesiones de explotación de los recursos naturales y de la infraestructura. La democracia y la institucionalidad del Estado se convirtieron así en una fachada para muchos negocios dolosos que se producían tras bambalinas, animados por la connivencia y la corrupción. A pesar de que en Honduras se han creado instituciones estatales para vigilar y controlar la corrupción, entre ellas la Fiscalía Especial contra la Corrupción, el Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública y otras más, en los hechos estas no han actuado como tales por carecer de la independencia indispensable para cumplir y hacer cumplir el mandato que les otorga la ley. Esto contribuye a explicar por qué, en casi dos décadas del presente siglo, aún no existen investigaciones pertinentes en uno de los países más señalados por la persistencia de la corrupción pública. En este contexto se inscriben la MACCIH y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), dos entidades reconocidas por el Estado, pero que no son instituciones estatales con facultades y atribuciones que hagan pensar en auténticas políticas públicas para combatir a fondo la corrupción. En ambos casos se trata de entidades complementarias a otra institucionalidad, previamente cooptada por los intereses políticos y económicos que amparan la corrupción y la impunidad del delito.

La renuncia de Jiménez Mayor como jefe y portavoz de la MACCIH, creada por la Organización de Estados Americanos (OEA) tras un acuerdo con el gobierno hondureño, representa por tal razón un

hecho significativo y de consecuencias todavía imprevisibles. Según Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, los señalamientos hechos por Jiménez Mayor respecto de la falta de compromiso con la labor de la Misión de la OEA y de las autoridades hondureñas, en especial del Congreso Nacional, significan “el inicio de una ofensiva política contra los pilares fundamentales de la lucha contra la corrupción” (*La Prensa*, 2018a). La “carta abierta” de Jiménez Mayor dirigida el 15 de febrero de 2018 al secretario general de la OEA, Luis Almagro, contiene importantes señalamientos que explican la convergencia de intereses que lo obligaron a renunciar a su cargo.

Aunque los medios de comunicación hicieron énfasis en los señalamientos de Jiménez Mayor dirigidos a Almagro, no cabe duda de que también hizo señalamientos explícitos e implícitos al gobierno hondureño. El primero se refiere al compromiso asumido por la MACCIH para investigar el caso denominado “Red de diputados”, en alusión a por lo menos cien diputados, exdiputados y funcionarios, incluyendo al actual jefe de Estado y al actual presidente del Congreso Nacional, por el uso “sospechoso de corrupción” de fondos destinados a programas sociales.

El 26 de enero, la MACCIH denunció que una modificación sustancial a la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República no había sido discutida en el Congreso Nacional, “sino que fue introducida de forma subrepticia y violando los procedimientos parlamentarios [...]”. La MACCIH llamó a esta reforma “Pacto de Impunidad” porque en los hechos liberaba de responsabilidad penal a los diputados y apenas los convertía en objeto de una investigación administrativa por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Así, en lugar de dar el trámite correspondiente a la denuncia presentada por la MACCIH y el Ministerio Público respecto a cinco diputados involucrados en actos dolosos, la jueza —una exdiputada suplente— desestimó el caso y se remitió a los acusados al ramo administrativo.

Jiménez Mayor destacó, además, que diversos señalamientos en su contra y de la MACCIH se produjeron “[...] coincidentemente con la instauración de líneas de investigación complejas contra sectores poderosos del país”. En efecto, en octubre de 2017 la Misión inició la investigación de diez casos emblemáticos de corrupción “de gran impacto”, entre otros el de la exprimera dama, Rosa de Lobo, que fue detenida por las autoridades policiales la mañana del 28 de febrero. Otra de las quejas de Juan Jiménez se basaba en que el Congreso no quiso aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, después de más de un año de su presentación al Legislativo. También denunció que el Poder Legislativo aprobó reformas al Código Penal “con una rebaja a las penas de delitos de corrupción, contra la opinión técnica de la Misión”.

Y en un tono que dejó al descubierto el sentimiento de desprotección que parece prevalecer entre los funcionarios de la MACCIH, al referirse al apoyo negado por el secretario general de la OEA, Jiménez manifestó en su carta de renuncia: “No debemos estar solos aquí y él lo sabe” (*El País*, 2018).

Por su parte, Almagro parece haber concertado una agenda distinta con el gobierno hondureño. Esto se deduce de la carta que envió al jefe de Estado de Honduras el 14 de febrero, en la cual aseveró: “Estimamos que, asimismo, será necesario fortalecer el funcionamiento de la MACCIH dado que a pesar de haber tenido recursos y plena libertad de acción por parte de la Secretaría General no ha sido capaz de arrojar los resultados en cuanto a investigaciones y procesamientos por casos de corrupción que hubiéramos deseado y que le debemos al pueblo de Honduras”. Y agregó que: “Los trabajos en materia de reforma electoral deben también incluir aspectos vinculados a la influencia en el sistema político y los procesos electorales por parte del crimen organizado y las maras” (*La Prensa*, 2018b). Esta corta misiva, en la que valora negativamente el trabajo realizado por la MACCIH y además le asigna nuevas áreas de actividad, desbordó los límites de la diplomacia de Jiménez Mayor y de parte de su equipo, lo que los obligó en los hechos a dimitir.

La renuncia de Jiménez Mayor y de otros funcionarios claves de la MACCIH demuestra que, además de que esta no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo su labor en Honduras, tampoco fue dotada desde el inicio con atribuciones que dieran a sus acciones la legitimidad jurídica indispensable. Así, sufrió un efectivo boicot a su labor, lo que demuestra el enorme poderío de la corrupción institucionalizada en el país. En este contexto se debe recordar que el proyecto inicial de las movilizaciones de indignados y las multitudinarias “marchas de las antorchas” en 2015 y 2016 exigían una entidad jurídica “con dientes”, similar a la CICIG en Guatemala, con el respaldo de la ONU y no de la OEA. La MACCIH —como hoy resulta evidente— es el resultado de las maniobras políticas del entonces presidente Hernández, que condujeron a una solución paliativa, como fue la creación de esta entidad. Así se logró aplacar los ánimos y bajar la presión de la ciudadanía indignada que se manifestó masivamente contra la corrupción. En suma, lo ocurrido en la MACCIH demuestra que una lucha efectiva contra la corrupción no depende solo de la buena conducta de algunos funcionarios, sino principalmente de la creación de un Poder Judicial independiente y de un acuerdo político nacional que implique un compromiso efectivo de las instituciones y de la ciudadanía para combatir la corrupción y fortalecer la institucionalidad creada para tal efecto.

EL INFORME DEL CNA

En su informe de gestión de 2017, el CNA afirma que entre 2014 y 2017 aportó 67 líneas de investigación en casos de corrupción y señaló los impactos de estas sobre la población. No obstante, solo diez fueron judicializadas (CNA, 2018: 2-4). La comparación anual de los casos presentados entre 2014 y 2017 demuestra que durante el primer gobierno de Hernández se presentaron denuncias justificadas y fundamentadas cuyos perjuicios para el Estado suman más de 2.945 millones de lempiras¹. Pese a ello, la judicialización de casos fue muy débil en el periodo, hasta llegar a 2017, año en que ningún caso fue judicializado (CNA, 2018: 38). Estos datos coinciden con lo denunciado por la MACCIH en cuanto a la negativa gubernamental de apoyar las iniciativas consideradas como un compromiso firme en la lucha contra la corrupción.

De los ocho casos presentados en 2017 por el CNA, seis de ellos afectaron directamente el área social —dos en la Secretaría de Salud, dos en el Programa de Asignación Familiar (PRAF), uno en el Despacho de la Primera Dama y uno en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)—, con un perjuicio para el Estado de más de 195 millones de lempiras. El *modus operandi* principal fue la sobrevaloración de los productos y los servicios vendidos por empresas que, por lo general, eran las mismas y actuaban en connivencia con funcionarios públicos. En el periodo 2014-2017 fueron investigadas diecinueve instituciones estatales (CNA, 2018: 39-40). El informe destaca que en 2017 el número de funcionarios denunciados se incrementó en un 500% (CNA, 2018: 41).

Aunque las investigaciones del CNA cubren un amplio espectro, que va desde el Instituto de la Propiedad, pasando por un partido político, hasta el Consejo Nacional contra el Narcotráfico, la mayoría de las instituciones afectadas en 2017 fueron las relacionadas con los programas asistenciales de más larga data.

GOBERNABILIDAD Y CRISIS GENERAL

Desde las elecciones de noviembre de 2017, algunos sectores políticos y sociales buscaron la intervención de organismos internacionales, como la ONU, para mediar en la crisis poselectoral. El 23 de enero lo hizo también el actual jefe de Estado, que ahora impulsa un “diálogo nacional” con el objetivo de encontrar una plataforma con apariencia de legalidad y consenso político para legitimar su gobierno. La ONU, a través de su Departamento de Asuntos Políticos, envió una misión

1 El cambio de referencia actual (mayo de 2018) entre el lempira y el dólar es \$1 USD = 23,75 lempiras.

exploratoria a Honduras cuyo informe preliminar fue divulgado el 20 de febrero.

En este informe, la Misión evalúa algunos factores de la crisis poselectoral y elabora recomendaciones como medidas previas a cualquier acción de diálogo que pueda producirse en el futuro inmediato. Además, destaca que entre el 29 de noviembre y el 22 de diciembre de 2017, en el contexto de las protestas contra la reelección y el fraude electoral, murieron veintidós personas. Por tal razón, señaló que: “Existe un amplio consenso de que los altos niveles de violencia poselectoral, los serios desafíos que enfrenta la situación de los derechos humanos y la tendencia a militarizar la seguridad pública son factores de gran preocupación que contribuyen significativamente a los niveles existentes de desconfianza hacia el Gobierno y entre diferentes sectores” (Naciones Unidas, 2018: 1-2). Y agregó que: “En las perspectivas que recolectó la misión, existe un ambiente generalizado de desconfianza, la cual se centra en los políticos, la clase política, los partidos políticos y las instituciones del Estado, especialmente los órganos vinculados a elecciones (Tribunal Supremo Electoral y Registro Nacional de las Personas) y el Poder Judicial” (Naciones Unidas, 2018: 2).

Entre las recomendaciones de la Misión sobresalen: la necesidad de reformar el marco legal para regular, según los estándares internacionales, el uso de la fuerza letal por parte del personal de seguridad durante las manifestaciones; que el sistema de justicia demuestre avances en la investigación de los casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos; y la reforma del sistema electoral, considerada como de “máxima prioridad”. En sus reflexiones metodológicas estableció que: “[...] las condiciones para un diálogo más amplio dependerán del desarrollo de un consenso mínimo sobre su alcance, agenda, participantes, convocantes, metodología y aspectos procesales relevantes”. Paradójicamente, esto último es lo que determina la imposibilidad de todo diálogo en Honduras, por cuanto la falta de consensos mínimos ha impedido todo avance en esta materia, lo que a su vez ha estado determinado por la intransigencia y el permanente rechazo del gobernante actual, por siempre reacio al diálogo y al establecimiento de consensos con fuerzas políticas sobre las que no puede ejercer control.

El llamamiento al diálogo “nacional” resultó impensable incluso en presencia de la misma misión exploratoria de la ONU, que en su informe reconoce que sus interlocutores fueron los que pudo entrevistar en la capital hondureña, por lo que, en consecuencia, dejó fuera a importantes sectores radicados en la Costa Norte y en otras regiones que jugaron un papel protagónico durante la crisis y que responden a intereses ciudadanos que se ubican en el extremo opuesto de los que representan y defienden la clase política y el gobernante actuales.

Pero esta no es la única paradoja en la coyuntura poselectoral. Más ilustrativo ha sido el cínico comportamiento del actual jefe de Estado que, tras solicitar apoyo a la ONU para establecer un “diálogo nacional”, inició una nueva campaña de descrédito contra la oposición política con el respaldo de su partido, algunas Iglesias y medios de comunicación.

En la segunda semana de febrero, la campaña se transformó en una cruzada mediática desde la cual se acusaba a la Alianza de Oposición contra la Dictadura de mantener nexos con las maras y el crimen organizado, e incluso se llegó a decir que estas fuerzas informales habían impedido que por lo menos cien mil miembros del partido oficial llegaran a las urnas. Y, de manera más cínica, se atrevieron a afirmar que por esta vía la oposición les había “robado las elecciones”.

Una estrategia mediática similar fue implementada durante el primer gobierno de Hernández con motivo de su empeño en “constitucionalizar” la Policía Militar de Orden Público, instancia que acusó de terroristas y criminales a varios diputados que manifestaron su desacuerdo con tal propuesta en el Congreso Nacional. Estas acciones ponen en entredicho la voluntad política real del gobernante para llevar a cabo un diálogo auténtico con la diversidad de fuerzas políticas, sociales y económicas que constituyen la sociedad hondureña.

Pero si esta fue su estrategia mediática, más ponzoñosa fue su estrategia política, implementada incluso fuera de Honduras. Solo así se puede entender que el secretario general de la OEA, en plena cruzada oficial contra la oposición política —cuando más se le acusaba de tener vínculos con las maras y el crimen organizado—, le sugiriera al actual jefe de Estado que: “Los trabajos en materia de reforma electoral deben también incluir aspectos vinculados a la influencia en el sistema político y los procesos electorales por parte del crimen organizado y las maras” (*La Prensa*, 2018b). La intención es obvia: desmovilizar la oposición política y simultáneamente desequilibrar la MACCIH.

Las recomendaciones del informe de la misión exploratoria de la ONU resumen los factores determinantes en la crisis política y la ingobernabilidad reinantes en Honduras, a la vez que ponen en primer plano temas como la violencia y la militarización de la seguridad pública, la reforma electoral y la exigencia de resultados concretos a los órganos de justicia en materia de corrupción y violación a los derechos humanos, y hacen un llamado a establecer los consensos mínimos que conduzcan a un diálogo efectivo y más amplio, que el supuesto en términos de legitimar el gobierno actual.

Lo relativo a la violencia y la militarización es particularmente relevante. Así lo ratifica el informe presentado por la Coalición contra la Impunidad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

(CEJIL) en el 167° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas organizaciones destacan en su balance que 192 manifestaciones fueron reprimidas y se produjeron al menos 1.257 detenciones. Por lo menos una persona fue considerada como detenida desaparecida, 38 fueron asesinadas y otras 76 víctimas de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo, unas 393 personas resultaron heridas y lesionadas durante las manifestaciones públicas, varias de ellas con consecuencias irreversibles en su salud. A estas cifras, de por sí alarmantes, se suman otras igualmente preocupantes: 105 personas fueron desplazadas por causa de persecución política, 15 periodistas fueron agredidos, y se registraban 89 personas criminalizadas, 24 de las cuales guardaban prisión preventiva. Además, 73 defensores de derechos humanos fueron víctimas de amenazas y otras acciones intimidantes. No obstante, estos casos se mantienen en total impunidad².

La incapacidad del régimen político hondureño para llegar a conclusiones similares a las de la misión exploratoria de la ONU —que además saltan a la vista desde el golpe de Estado de 2009— demuestra su anacronismo histórico, su divorcio con la democracia y los intereses generales de la sociedad y, sobre todo, su intolerancia al consenso y su reticencia a todo cambio que amenace su poder o establezca unas reglas del juego que le obliguen a hacer concesiones en sintonía con el Estado de derecho y el pluralismo democrático que el gobierno actual afirma suscribir y respetar.

Desde esta perspectiva, el pacto bipartidista de gobernabilidad se ha roto y su lugar es ocupado ahora por el pacto de impunidad —como lo llamó el entonces portavoz de la MACCIH—, lo cual evidencia que el lugar que antes estaba reservado para la política fue usurpado por la corrupción. Es así como, en el caso hondureño, la ingobernabilidad, la corrupción y la crisis general están íntimamente relacionadas y, en consecuencia, toda solución a la crisis política de hoy pasa por romper el nudo central que por ahora las mantiene unidas y atadas.

BIBLIOGRAFÍA

CNA (Consejo Nacional Anticorrupción) 2018 “Informe de casos presentados ante los órganos persecutores del delito” (Tegucigalpa: CNA-Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos), febrero.

² Denuncia presentada ante el 167° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Coalición contra la Impunidad y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Bogotá, 26 de febrero de 2018.

El País 2018 (Honduras) “Renuncia a la Maccih Juan Jiménez Mayor” 15 de febrero, en <<http://www.elpais.hn/2018/02/15/renuncia-la-maccih-juan-jimenez-mayor/>>.

La Prensa 2018a (Honduras) “Renuncia de Jiménez Mayor, golpe a la lucha anticorrupción: CNA” 16 de febrero, en <http://www.laprensa.hn/honduras/1152903-410/cna-maccih-jimenez_mayor-gabriela_castellanos>.

La Prensa 2018b (Honduras) “La carta de Almagro que molestó a Juan Jiménez Mayor” 16 de febrero, en <http://www.laprensa.hn/honduras/1152800-410/carta_almagro-renuncia-juan_jimenez_mayor-maccih-hondurnas>.

Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Políticos 2018 “Informe de la misión exploratoria del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas (DPA) a Honduras” (Nueva York), 20 de febrero.

EL ROL DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA CRISIS HONDUREÑA

Matías Battaglia*

Las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2017, en las que se enfrentaron Juan Orlando Hernández (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Alianza de Oposición), dejaron una serie de efectos negativos que terminaron por afectar la imagen internacional del país y pusieron en juego la estabilidad política a largo plazo. Sin embargo, un aspecto importante de la crisis es que también generó tensiones internacionales entre dos socios: la Unión Europea y Estados Unidos. Aunque a la larga Europa terminaría aceptando la posición de Washington, sumándose al reconocimiento estadounidense del candidato del Partido Nacional como ganador, hubo un lapso, entre el 26 de noviembre y el 20 de diciembre, en el cual tuvieron fuertes enfrentamientos.

LA MIRADA EUROPEA, FAVORECIENDO LA TRANSPARENCIA

Desde el fin de la Guerra Fría el continente europeo ha tratado de diferenciarse de Estados Unidos, particularmente en lo relacionado

* Argentino. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales (FLACSO-UDESA). Docente en la Universidad Católica Argentina (UCA). Desde 2009 se ha desempeñado laboralmente en el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.

con la protección de los derechos civiles y la democracia. En especial desde la Guerra de Irak, Europa intentó mostrarse como una potencia que utilizaba métodos no militares para mejorar su posicionamiento global y lograr sus objetivos estratégicos. Por supuesto, esta posición también buscaba marcar una diferencia entre la Unión Europea y los poderes emergentes no democráticos, como Rusia o China.

Sin embargo, esta política, que tuvo un cierto acompañamiento durante la era Obama (2009-2017) en tanto Washington y Bruselas compartían la idea de que el orden liberal democrático era el único que podría dar “paz y prosperidad”, empezó a colapsar con el ascenso de Donald Trump a la presidencia (en principio, anuló la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre Europa y Estados Unidos). Fundamentalmente, Europa perdió un aliado, al menos en materia ideológica, al regresar Trump a una visión nacionalista de la política (Shapiro y Hackenbroich, 2017). Y este punto fue el que terminó enfrentando a ambos poderes en el caso hondureño.

Pasemos a ver por qué razón Europa reforzó su interés en la transparencia de las elecciones, particularmente en el último lustro. Por un lado, la evidencia de la participación rusa en las elecciones de Estados Unidos terminó por corroborar que la faceta cibernética de la política internacional no solo iba a quedarse en el robo de secretos militares, sino que había pasado a extenderse al campo electoral (Dorell, 2017), lo que generó nuevos temores. Por otro lado, en los últimos años se evidenciaron intervenciones foráneas en los plebiscitos de Escocia y Cataluña y en las elecciones presidenciales francesas.

La combinación de las campañas mediáticas de desinformación con el surgimiento o fortalecimiento de partidos populistas en Europa, cuyos votantes están principalmente “enojados” y necesitados de un líder que cambie el *statu quo*, despertó preocupación en las autoridades del bloque continental. Una ciudadanía irritada con la situación actual es presa fácil para la publicidad engañosa o la manipulación. En consecuencia, el auge de partidos nacionalistas es una amenaza directa a la Unión Europea. Si Francia o Alemania ingresan en ese ciclo político, es poco probable que la Unión pueda perdurar.

En definitiva, observando la situación europea, podemos ver que Rusia aplica los preceptos de la “non-linear warfare” (Kofman y Sus-hentsov, 2016), de manera que, en vez de buscar una colisión directa con sus enemigos, opta por fomentar crisis entre ellos y que se debiliten por su propia inercia.

EL ROL DE ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA LATINA EN LA ERA TRUMP
América Latina no ha sido prioridad en la política exterior de Trump. De hecho, México fue el país más mencionado durante la campaña por

cuestiones negativas como la inmigración ilegal y la reforma propuesta del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés) ya que México sería el gran beneficiado del esquema actual. Luego, en términos generales, la preocupación de Estados Unidos viró hacia cuestiones de seguridad, como el combate a las maras, al narcotráfico y al crimen organizado en general. Sin embargo, podría determinarse que la frontera del interés de Trump es América Central y pierde interés en Sudamérica, quizás porque la asimetría de poder le permite imponerse fácilmente en los países pequeños.

Washington pasó a adoptar una postura acusatoria hacia los países que padecen el flagelo del narcotráfico, y en este sentido ha señalado que ellos deben pagar por los costos en los que Estados Unidos incurre por combatir ese mal en su territorio, en lugar de asistirlos en el cambio de su matriz económica y social para que los cárteles pierdan poder. Esto generó reacciones en aliados regionales históricos como Colombia (*Reuters*, 2017).

Por otro lado, la relación con Cuba fue considerada como muestra del compromiso del presidente Trump con la democracia. Argumentando que no se habían observado los “resultados en materia de libertad” que se habían esperado, Trump dio marcha atrás respecto de los avances alcanzados durante la era Obama y limitó el grado de relacionamiento bilateral.

Pero en el caso hondureño esta política se mostró contradictoria, ya que Estados Unidos terminó apoyando un proceso electoral fuertemente cuestionado por la Unión Europea y la misma Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros organismos que se manifestaron al respecto.

LAS VULNERABILIDADES HONDUREÑAS

Honduras es un país cuyas problemáticas no son ajenas a las de la región centroamericana, aunque en dicho conjunto presenta algunos de los peores indicadores sociales (lo cual deviene en que gran parte de la población viva en Estados Unidos) y de seguridad. Ello hace al país altamente dependiente de Estados Unidos (*La Tribuna*, 2017).

Con respecto a los indicadores sociales, Honduras se encuentra en la categoría de ingreso medio-bajo, con un PIB per cápita de \$2.465 USD, con el 60,9% de los hogares del país en situación de pobreza y con un índice de Gini de 53,7, lo que evidencia una alta desigualdad.

La evolución de la economía hondureña no ha sido mala: desde 2010 se mantuvo en valores de crecimiento interanual positivos, luego de una caída del 2,9% en 2009. Sin embargo, el país mantiene una dependencia excesiva de las remesas para su crecimiento (en 2016, representaron el 18,5% del PIB), de las maquilas (textiles) y de

la evolución internacional del precio del café, uno de los principales productos de exportación detrás de los textiles (The Observatory of Economic Complexity, 2018).

Por otro lado, la inseguridad en el país es alta, a tal punto que San Pedro Sula, con una tasa de 112,09 homicidios por cien mil habitantes, y Distrito Central, con 85,09 homicidios por cien mil habitantes, son las ciudades tercera y cuarta más violentas del mundo (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 2017).

Esta situación se comprende en el contexto del crimen organizado regional, ya que en Honduras se verifica una importante presencia de los cárteles mexicanos, de las maras M13 y M18 y de algunos grupos delictivos locales, además de ser una ruta de paso para los traficantes colombianos (Insight Crime, 2017).

La vulnerabilidad de Honduras a cualquier cambio en la relación con Washington ha llevado a que el país se adhiera a propuestas controvertidas del gobierno estadounidense, como fue el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Para comprender eso hay que dimensionar el rol del financiamiento de Estados Unidos en la relación bilateral —en 2016 Honduras fue el cuarto receptor de fondos de la Agenda de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) en América Latina—, a lo cual se suma el fuerte apoyo financiero y de capacitación a las Fuerzas de Seguridad hondureñas (Partlow, 2017; Malkin, 2017).

LAS ESTRATEGIAS CONTRAPUESTAS DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

La crisis institucional en Honduras ha generado un nuevo foco de tensión entre los dos socios estratégicos, lo que no es una novedad. Desde la Guerra de Irak, pasando por el fracaso del Acuerdo de Libre Comercio Europa-Estados Unidos, entre otros factores, ambos lados han mostrado incongruencias en la manera de enfrentar los desafíos internacionales. Además, en este momento en el que el orden liberal está siendo cuestionado por el país que lo promovió y sostuvo durante el siglo XX, ciertamente es posible un regreso a una visión nacionalista por parte de Estados Unidos, y regionalista por parte de Europa.

Ahora bien, ¿por qué Europa terminó enfrentándose con Estados Unidos por Honduras?

Más que tener alguna política específica hacia Honduras, en realidad Europa estaba llevando a la práctica un curso de acción de promoción de transparencia en elecciones, no solo en virtud de su tradición en relación con el poder civil, sino también como protectora del orden democrático, especialmente en el contexto de una justificada preocupación respecto del accionar ruso en procesos electorales.

Por eso, indirectamente, el temor europeo al Kremlin terminó generando que la Unión Europea no escatimara esfuerzos a la hora de garantizar transparencia en cualquier parte del globo, aún en lugares lejanos a la influencia rusa como Centroamérica¹. Sin embargo, cuando Estados Unidos determinó que primaría una alianza política con el Partido Nacional sobre la transparencia democrática, Europa no pudo sostener la posición y, por ese motivo, en un acto de realismo², varios gobiernos del viejo continente comenzaron a reconocer al nuevo gobierno luego del 20 de diciembre.

Finalmente, resulta interesante destacar que Estados Unidos está adoptando una política exterior similar a la del Kremlin, que consiste en intervenir sobre aquellos países de su ámbito regional sobre los que tiene una fuerte asimetría de poder a su favor. En el caso ruso, se actúa fuertemente en países donde hay poblaciones rusas, infraestructura energética rusa e industrias militares de la era soviética. En el caso de Estados Unidos, este país aprovecha la asistencia para combatir el crimen transnacional, la dependencia de las remesas y la dependencia del mercado estadounidense en relación con las maquilas centroamericanas para ejercer su política exterior.

BIBLIOGRAFÍA

- Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 2017 “Metodología del ranking (2016) de las 50 ciudades más violentas del mundo” (Ciudad de México: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal), en <<https://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prensa/239-las-50-ciudades-mas-violentas-del-mundo-2016-metodologia><https://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prensa/239-las-50-ciudades-mas-violentas-del-mundo-2016-metodologia>> acceso 8 de febrero de 2018.
- Dorell, O. 2017 “Alleged Russian Political Meddling Documented in 27 Countries since 2004” en *USA Today* (Virginia) 7 de septiembre, en <<https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/09/07/alleged-russian-political-meddling-documented-27-countries-since-2004/619056001/><https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/09/07/alleged-russian-political-meddling-documented-27-countries-since-2004/619056001/>> acceso 28 de enero de 2018.

1 Se habla en términos relativos; es poca la influencia rusa en Centroamérica en comparación a la europea.

2 Realismo según las teorías de relaciones internacionales.

- InSight Crime* 2017 “Honduras Profile”, 10 de noviembre, en <[https://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news/honduras/](https://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news/honduras/https://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news/honduras/)> acceso 8 de febrero de 2018.
- Kofman, M. y Sushentsov, A. 2016 “What Makes Great Power War Possible?” en *Valdai Discussion Club* (Moscú) 29 de abril, en <<http://valdaiclub.com/a/reports/report-what-makes-great-power-war-possible/>> acceso 7 de enero de 2018.
- La Tribuna* 2017 (Honduras) “\$12 millones diarios en remesas recibe Honduras”, 11 de septiembre, en <<http://www.latribuna.hn/2017/09/11/12-millones-diarrios-remesas-recibe-honduras/>> acceso 15 de febrero de 2018.
- Malkin, E. 2017 “U.S. at a Crossroad as It Confronts Turmoil in Honduras” en *New York Times*, 13 de diciembre, en <<https://www.nytimes.com/2017/12/13/world/americas/honduras-election-juan-orlando-hernandez.htmlhttps://www.nytimes.com/2017/12/13/world/americas/honduras-election-juan-orlando-hernandez.html>> acceso 4 de febrero de 2018.
- Partlow, J. 2017 “Guatemala and Honduras sided with Trump on Jerusalem. Here’s why” en *Washington Post*, 28 de diciembre., en <https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/guatemala-and-honduras-sided-with-trump-on-jerusalem-heres-why/2017/12/28/7c4dfeee-eb1e-11e7-956e-baea358f9725_story.html?noredirect=on&utm_term=.baff4b066760https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/guatemala-and-honduras-sided-with-trump-on-jerusalem-heres-why/2017/12/28/7c4dfeee-eb1e-11e7-956e-baea358f9725_story.html?noredirect=on&utm_term=.baff4b066760> acceso 10 de febrero de 2018.
- Reuters* 2017 “Colombia Defends Anti-Drug Efforts after Trump Critique”, 14 de septiembre, en <<https://www.reuters.com/article/us-usa-colombia-drugs/colombia-defends-anti-drug-efforts-after-trump-critique-idUSKCN1BP1VV>> acceso 10 de febrero de 2018.
- Shapiro, J. y Hackenbroich, J. 2017 *Opportunities amid Disorder: Europe and the World in 2018* (Londres: European Council on Foreign Relations), en <http://www.ecfr.eu/page/-/Opportunities_Amid_Disorder.pdfhttp://www.ecfr.eu/page/-/Opportunities_Amid_Disorder.pdf> acceso 7 de enero de 2018.
- The Observatory of Economic Complexity 2018 (Massachusetts) “Honduras”, en <<https://atlas.media.mit.edu/en/>> acceso 10 de febrero de 2018.

HONDURAS: ENTRE EL RECURSO DEL MÉTODO Y EL DRAMÁTICO DESPERTAR DE UN PUEBLO

Álvaro Cáliz*

Con el paso de las semanas, el fraude electoral hondureño se ha diluido en un cierto olvido premeditado de los medios de comunicación nacionales y continentales. Nada que ver con las permanentes y exacerbadas cargas mediáticas contra Venezuela y Bolivia. Pero tengamos claro que este doble tratamiento no es fortuito ni nuevo. Es la moneda de curso para tratar los asuntos políticos según convenga a las elites criollas, a las corporaciones transnacionales con presencia en la región y, por supuesto, al gobierno de Estados Unidos.

Se trata de una de las manipulaciones electorales más bochornosas y flagrantes de las últimas décadas en Latinoamérica y, en Honduras, no se tenía noticia de un fraude así desde la primera mitad del siglo XX. Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición, ganó las elecciones pero el Tribunal Electoral decidió lo contrario desde que Juan Orlando Hernández (JOH) ordenó al responsable de ese organismo interrumpir la transmisión de datos —que con el 70% de las actas escrutadas ya determinaban a Nasralla como ganador con

* Escritor e investigador social hondureño. Doctor en Ciencias Sociales con orientación en Gestión del Desarrollo. Ha dado seguimiento a los sucesos políticos en Honduras con especial interés desde 2009 a la fecha, escribiendo artículos e informes que dan cuenta de la evolución de la crisis política en el país.

una irreversible ventaja de cinco puntos porcentuales¹. Luego de esa orden, el partido de gobierno echó a rodar un protocolo que solo pretendía usar en último caso, confiando en que las acciones fraudulentas previas —con el sistema registral, el censo electoral y la compra de voluntades— fueran suficientes.

Pero el sol salió tras el nubarrón, una masiva votación de ciudadanía joven y urbana frustró las intenciones y el gobierno, en aprietos, tuvo que mostrar las costuras, cerrando una hora antes de lo usual los centros de votación ante la avalancha de voto opositor. Después se desmontaron los protocolos de seguridad del sistema de transmisión y se quebrantó la debida custodia de las maletas electorales.

De nada sirvieron las declaraciones de las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea que, a cuentagotas y entre líneas, expresaron finalmente la poca credibilidad de estas elecciones y la marca de serias irregularidades que no permitían declarar con certeza a un ganador. La OEA, con todas sus vacilaciones y cálculos políticos, sugirió en su informe que se repitieran los comicios². Estas declaraciones apenas incomodaban a la misma casta política que antes había soportado la suspensión de Honduras de la OEA por el golpe de Estado de 2009. Sabían muy bien que la correlación de fuerzas en ese organismo continental es hoy muy distinta a la de aquel año y, por otra parte, la “bendición” que realmente les importaba era la de Washington; y esa sí que llegó oportuna desde la representación diplomática en Honduras y desde el Departamento de Estado³.

1 Véase en *The Economist* (2017) el artículo “Reasons to Disbelieve. What the Data Say about the Integrity of Honduras’s Election. Our Analysis of a Disputed Vote Count”, un análisis sobre la imposibilidad estadística de revertir los resultados que favorecían a Nasralla. También en el artículo de Víctor Aguilar titulado “Marco Ramiro Lobo: ‘David Matamoros ordenó parar el sistema de transmisión y eso fue un error grave’” (2010) pueden leerse las declaraciones del magistrado suplente del Tribunal Electoral hondureño, en el que se refiere a la interrupción de la transmisión de datos en la madrugada del 27 de noviembre. Si en el país existiese un Estado de derecho, estas declaraciones de una autoridad pública cuando menos hubiesen motivado la actuación de oficio de la Fiscalía de Asuntos Electorales.

2 Véase el comunicado de la OEA sobre los resultados de las votaciones en Honduras (OEA, 2017).

3 Véase: a) el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se reconoce al presidente Hernández, inmediatamente después del pronunciamiento del organismo electoral (Nauert, 2017); b) las declaraciones de la representación diplomática de Estados Unidos en Honduras en las que afirma que no se pueden repetir las elecciones porque esa vía no está prescrita en la ley —sin embargo, no dijeron nada sobre la reelección, que tampoco está establecida en la ley (*El Heraldo*, 2017)—, y c) el reportaje en *BBC Mundo* sobre la postura y el interés estratégico de Estados Unidos en Honduras a propósito de la crisis electoral (González, 2017).

La manipulación de las votaciones en favor del partido y del candidato de gobierno puso la cereza al pastel de una reelección inconstitucional. Una reelección que para bien o para mal está prohibida en la legislación nacional, pero la Corte Suprema, sumisa a Hernández, dijo lo contrario y autorizó sin más la postulación del presidente en funciones. Una consulta popular vinculante hubiese sido la única vía legal para modificar el texto constitucional, pero al partido de gobierno ni le importaba la institucionalidad ni tenía intenciones de arriesgarse a un “no” prematuro.

He aquí otra evidencia de la doble moral de las elites hondureñas y continentales. Mientras Manuel Zelaya en 2009 convocó a una consulta no vinculante para preguntar a la población si estaba de acuerdo con que se discutiese sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, los grupos de poder juzgaron por presunción que esa medida escondía la pretensión de Zelaya de reelegirse en la presidencia. Y con ese argumento dieron el golpe. Las autoridades militares, los grandes medios de comunicación, grupos empresariales, flamantes notables de la sociedad civil, pastores y sacerdotes de las cúpulas religiosas y, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, actuaron con saña y promovieron y defendieron el brutal derrocamiento de Zelaya.

Apenas unos años más tarde Hernández, sin mediar siquiera la intención de una consulta popular, impuso no la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente sino, directa y descaradamente, su capricho de reelegirse. Y, esta vez, solo un puñado de aquellos que con vehemencia y odio se opusieron a los supuestos intentos de Zelaya alzó su voz para oponerse a las aspiraciones ilegales de Hernández. Quizás así, frente a acciones tan viles y de doble rasero, podamos los pueblos despertar del letargo al que nos someten los “dueños” de nuestros países.

Si bien es cierto que el guion del fraude aplicado en el último minuto fue el último considerado en la urdimbre de esta reelección ilegal, la estrategia era de cuatro esquinas, con la cooptación de los principales medios de comunicación y el control de las instituciones estatales, aun de aquellas que en teoría deberían gozar de mayor autonomía como el Ministerio Público y el Ombudsman. Pero el pilar capital para sostener esta trama era el control irrestricto de la cúpula militar y el financiamiento sin escatimar a la Policía Militar —creada por Hernández apenas comenzado su periodo de gobierno⁴.

4 Sobre la captura institucional, la militarización del Estado y la corrupción en el gobierno de Hernández véase la publicación del Carnegie Endowment for International Peace (2017).

Quienes estudian la política saben que incluso todo ese poder institucional puede tambalearse sin el respaldo de los principales grupos empresariales. Y este gobierno, a las buenas o a las malas, los tiene de aliados. Entonces, aunque la mayoría estuviese en contra de la reelección inconstitucional y del fraude, estas circunstancias no fueron óbice para imponer las pretensiones de Hernández. Otra cosa es que el presidente que asumió el pasado 27 de enero cuente con la aceptación más baja y el mayor rechazo popular desde la recuperación del orden constitucional en Honduras (1980).

La ambición y el capricho de un político devenido en millonario empresario de la noche a la mañana, incapaz de aceptar la derrota, generó, como era de preverse, un masivo ciclo de protestas en los cuatro puntos cardinales del territorio nacional —y fuera del país en al menos una docena de ciudades donde se concentran los migrantes hondureños. Las movilizaciones en Honduras fueron contestadas de modo desproporcionado por las fuerzas represivas —toque de queda de por medio—, en especial por la Policía Militar. Hasta el 27 de enero la represión había cobrado la vida de aproximadamente 35 personas, en tanto que unas 2.500 fueron detenidas en diferentes momentos por los cuerpos armados del Estado⁵. Sin embargo, no nos asustemos, la prensa juzgó más importante enfocarse en las llantas quemadas en las barricadas populares que en las víctimas que morían por oponerse al fraude.

EL FRAUDE ES SOLO UN ESLABÓN MÁS DE LA CRISIS GATILLADA DESDE EL YA APARENTEMENTE LEJANO GOLPE DE ESTADO DE 2009

Sería un error analizar las anomalías en estas elecciones como un hecho aislado en la reciente historia política del país. En realidad, el fraude y la usurpación del poder de Hernández y su camarilla es la cara actual de la mutación de la crisis política que arrastra Honduras desde 2009.

El afamado bipartidismo hondureño, que permitía el elitismo competitivo y la alternancia entre los centenarios Partido Liberal y Partido Nacional, aseguraba a los grupos de poder cumplir con las apariencias democráticas que escudaban su dictadura económica. Este arreglo institucional de las elites hizo perdurar por décadas una sorpresiva y paradójica estabilidad política en un país donde siete de cada diez personas son pobres, a la vez que exhibe uno de los niveles de inequidad más altos del continente. Pero este esquema mental —el de ese

5 Véase el comunicado de la Mesa Nacional de Derechos Humanos en Honduras sobre la represión postelectoral, de fecha 1 de febrero de 2018, en <<http://ciprodeh.org.hn/comunicados/comunicado-de-las-organizaciones-mesa-nacional-de-derechos-humanos-honduras/>>.

bipartidismo— ya no parece tener cabida en la racionalidad de buena parte de la ciudadanía. Desde 2009 la pinza bipartidista hondureña se fracturó de modo hasta ahora irreparable. La emergencia del Partido Libre bajo el liderazgo de Zelaya, como producto de la escisión del Partido Liberal, colocó a este viejo partido en notable desventaja para competir con su mancuerna: el Partido Nacional. Esta circunstancia se volvió un pequeño dolor de cabeza para las oligarquías, pues implicaba disputar los votos con un partido como Libre, parcialmente ajeno al dominio que ellas ejercen sobre el Partido Liberal y el Partido Nacional.

En las elecciones de noviembre de 2009 todavía no se había creado Libre, por lo que la gran mayoría de la población opuesta al golpe de Estado no acudió a votar. Con una asistencia electoral inferior al 50% del padrón, Porfirio Lobo del Partido Nacional obtuvo una contundente victoria de casi veinte puntos por encima del candidato del fracturado Partido Liberal, a la vez que lograba 71 de las 128 curules del Congreso Nacional. Cuatro años más tarde, en los comicios de 2013, la mayor parte de los opositores al orden político que emergió tras golpe de Estado se articularon en el recién creado Partido Libre; de inmediato, este se convirtió en el rival a vencer por el gobernante Partido Nacional. En medio de múltiples denuncias de fraude y de delitos electorales, el candidato Juan Hernández sucedió a su correligionario y amigo Porfirio Lobo.

Contrario al tibio gobierno de Lobo, Hernández instauró una agresiva maquinaria de concentración de poder en la figura presidencial, mantuvo el saqueo a las principales instituciones públicas, aceleró la privatización de servicios públicos como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y no perdió tiempo en asegurarse un blindaje a través de la Policía Militar y la subordinación irrestricta de las Fuerzas Armadas. Hernández, más conocido como JOH, no era la apuesta más deseada por las elites hondureñas; no obstante, el alicaído Partido Liberal no podía por ninguna vía ganar las elecciones de 2013 y, por otra parte, el temor a que triunfara Libre las orillaba a apoyar a una figura que, desde la presidencia del Congreso que ostentó durante el periodo 2010-2013, dio muestras de una insaciable ambición y falta de escrúpulos para acrecentar su poder.

El gobierno de Hernández hizo de la “lucha contra la inseguridad” su principal bastión y emblema de gobierno, lo cual dio luz verde a cuantiosos aumentos en los presupuestos de defensa, y en menor medida de seguridad, a costa del estancamiento de las partidas para educación, salud e inversión pública en general⁶. Pero también jus-

6 En un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales se señala que en Honduras los gastos sociales en educación y salud “han perdido sistemáticamente

tificaba cambios ultrarrepresivos en la legislación que permitieron arremeter contra quienes en las calles manifestaban su oposición a la gestión del presidente. Entre esas protestas destacan las de 2015 en reacción a las pruebas filtradas sobre el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), perpetrado durante el gobierno de Lobo, de cuyos fondos se financió la campaña electoral de JOH en las elecciones de 2013⁷.

En términos de legitimidad, la antesala de las elecciones generales de 2017 mostraba a un debilitado presidente en funciones, pero con una oposición dividida en tres parcelas: Libre, que seguía siendo la segunda fuerza política, pero no tan robusta ni fresca como en las elecciones de 2013, el Partido Liberal⁸ y el Partido Anticorrupción (PAC) —creado también, al igual que Libre, antes de las elecciones de 2013 por el presentador de televisión Salvador Nasralla. Para asegurarse aún más la ventaja electoral, el gobierno de Hernández logró quitarle a Nasralla mediante artificios legales los sellos del PAC, con lo que este aspirante quedaba sin tienda política. Así las cosas, un año antes de las elecciones todo parecía navegar en beneficio del proyecto reeleccionista de Hernández, pues a pesar de su impopularidad contaba con un voto duro clientelar, proveniente de un segmento considerable de la población indigente del país. Este voto duro, junto a las manipulaciones dolosas del censo electoral y del organismo registral, le auguraba vencer a la fragmentada oposición.

Sin embargo, sustraerle el PAC a Nasralla terminó convirtiéndose en un arma de doble filo. De forma sorpresiva, dadas las divergencias ideológicas entre Libre y el carismático Salvador Nasralla, estos acordaron una alianza centrada en evitar el continuismo y la ilegal postulación de Hernández. Para ello influyó, sin duda, el olfato y la experiencia política de Zelaya quien, pudiendo presentarse como candidato de Libre —la sentencia que habilitaba la reelección de Hernández

espacio presupuestario. En efecto, en el año 2010 el presupuesto aprobado para educación y salud representaba el 32.8 y el 14.7%, respectivamente, mientras que para el año 2016 estos porcentajes se redujeron al 20.1 y el 10.1%. Al contrario de la tendencia registrada en estos rubros de gasto público tan importantes para el bienestar social, los gastos destinados a seguridad y defensa aumentaron su peso en el presupuesto, pasando del 11.7%, en 2010, al 13.6%, en 2016” (ICEFI, 2016).

7 Véase el reportaje del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación sobre el caso del IHSS en *Radio Progreso*, 2015.

8 Se puede afirmar sin ambages que el Partido Liberal no ha cumplido un papel real de oposición. Durante los periodos de gobierno de 2010-2014 y 2014-2018 se plegó y puso precio a su apoyo a las principales iniciativas tomadas por el gobierno. Este hecho explicaría en parte su incapacidad de posicionarse como una alternativa frente al repudio que la mayoría de la población expresa contra el Partido Nacional.

por extensión también lo facultaba—, optó por forjar las condiciones para la Alianza de Oposición. Esta convergencia coyuntural planteó gran incertidumbre sobre si las bases de Libre votarían por Nasralla y sobre si los simpatizantes de este lo seguirían en su nueva aventura política de la mano de un partido tildado de “izquierdista”, en un país donde esa palabra se utiliza para designar a una persona que ha contraído una terrible enfermedad contagiosa.

Al final sucedió algo inesperado para muchos: que la improvisada —y más personalista que estructurada— Alianza opositora logró situarse como la mejor opción para una variopinta franja poblacional urbana y, sobre todo, joven, que deseaba sacarse de encima las tropelías del gobierno de turno. Esto implicaba además que el Partido Liberal, por tercera vez desde 2009, volvía a pintarse de mera comparasa electoral. Y ante los temores de las elites, aunados a las agravadas falencias e irregularidades del proceso electoral —de sobra denunciadas y documentadas desde las elecciones de 2013—, el fraude era una opción viable para evitar que la Alianza llegara a la presidencia.

LA ALIANZA DE OPOSICIÓN: ¿UNA COMPOSICIÓN HETEROGÉNEA PEGADA CON LA SALIVA DE LA COYUNTURA?

La fragmentación del Partido Liberal y la acelerada pérdida de legitimidad del Partido Nacional propiciaron espacios para la emergencia de un partido nominalmente de centro izquierda (Libre), y también para el surgimiento de un partido de centro derecha (PAC), que llenaron los vacíos de identificación política de una capa poblacional equivalente a la mitad del electorado. Si bien las distancias ideológicas entre los partidos políticos en Honduras no son en realidad tan extremas, el solo hecho de enfrentar al bipartidismo desde algunas posiciones consideradas de izquierda perfilaba a Libre como una entidad anómala y peligrosa para la “estabilidad política” a la hondureña, en tanto que el PAC —cuarto lugar en las elecciones de 2013— era bien tolerado por el *statu quo*, pues incluso les había servido como succionador de votos inconformes para que, desde las posiciones de derecha, no se trasladasen hacia las filas de la izquierda que para ellos representaba Libre.

Desde su creación en 2011, ambos partidos se vieron como rivales para aglutinar el creciente desencanto que pesaba sobre las espaldas de los dos partidos mayoritarios. Pero diferentes hechos acaecidos desde entonces, entre los que destacan la postulación de JOH a la reelección y la maniobra gubernamental para quitarle a Nasralla la dirección del PAC, precipitaron el desenlace que llevó a crear la Alianza de Oposición entre Libre, Nasralla (a título personal) y el pequeño partido de orientación social demócrata Partido Innovación y Unidad

Social Demócrata (PINU-SD). La cúpula de Libre desistió prematuramente de la idea de realizar dentro de la Alianza elecciones primarias para elegir la candidatura presidencial y, pese a ser el partido que contaba con mayor base electoral a partir de las fuerzas que lo componían, ofreció la candidatura a Nasralla, calculando que este era el único capaz de obtener votos tanto dentro de las bases de Libre como en los estratos sociales de clase media más identificados con el centroderecha. Era una apuesta riesgosa, ya que nada aseguraba que la ciudadanía de ambas orillas confluiría en un país no acostumbrado a este tipo de alianzas. Finalmente, Zelaya volvió a acertar en su lectura del tablero político electoral hondureño. La Alianza comenzó, maximizando sus escasos recursos, una campaña de recorrido del territorio nacional en contrapunto a la millonaria maquinaria institucional y propagandística de JOH. Incluso a pocas semanas de las elecciones no era fácil pronosticar el nivel de votación que logró obtener la Alianza, pues una parte importante del voto urbano se mostró indeciso o cauto en expresar sus preferencias partidarias.

Frente a esta inopinada convergencia de fuerzas políticas en apariencia tan disímiles, es pertinente preguntarse cuáles eran los principales temores que afloraban en las elites hondureñas, el gobierno de turno y los intereses imperiales de Estados Unidos. Se podrían mencionar al menos tres factores de peso:

1. El temor a que los movimientos sociales que planteaban una agenda fuera de las coordenadas permisibles por los grupos de poder volvieran a empoderarse, como ocurrió en la coyuntura propiciada por el derrocamiento de Zelaya en 2009. Libre puede parecer a la distancia un partido de izquierda, pero quizás ese sea un juicio ligero y prematuro. Es una fuerza política heterogénea que reúne núcleos de pensamiento de izquierda de diferentes tradiciones, mientras que su cúpula y una franja de sus bases de apoyo no se han distanciado del todo de los axiomas del liberalismo tradicional y, por lo tanto, tiende hacia un cierto eclecticismo. Sin embargo, las vertientes de opinión pública hegemónicas no pueden o, mejor dicho, no están interesadas en reconocer esos matices; les conviene tildar y descalificar a ese partido como un partido “antisistema”. Pese a las incoherencias y vacilaciones, Libre es hoy el partido con el que más se pueden sentir identificados decenas de movimientos sociales también tildados de indeseables por el *establishment*.
2. El temor a que Nasralla, nunca señalado por actos de corrupción, cumpliera sus promesas de campaña de ir a fondo contra

el latrocinio en el aparato estatal. Las amenazas de Nasralla incluían enjuiciar a los funcionarios del gobierno de Hernández por el saqueo de varias instituciones públicas y por su involucramiento en redes ligadas al narcotráfico. Al menos había un indicio para temerle: este candidato no había recibido financiamiento de los grandes grupos empresariales y, por lo tanto, en principio llegaba sin compromisos respecto a esos grupos.

3. El temor de Estados Unidos a que Zelaya contase con un nivel de influencia significativo en el nuevo gobierno, al grado de incidir en posturas que afectasen sus intereses geopolíticos. Por supuesto que el gobierno estadounidense sabe muy bien las limitaciones que enfrentaría en Honduras un gobierno en el que Libre fuese una fuerza importante, por lo que su recelo no está fundado en la posibilidad de cambios radicales en el sistema político y económico hondureño —ya la evidencia del tablero en Nicaragua y El Salvador son antecedentes de peso—, pero sí quería evitar, a toda costa, otro miembro con posiciones poco confiables, tanto en las relaciones bilaterales, como en instancias como la OEA y las Naciones Unidas, y en las propias instancias de integración latinoamericana. La continuidad de JOH les garantizaba ese apoyo incondicional⁹.

Los motivos anteriores evidencian que a estos actores les convenía minimizar riesgos. Y así lo hicieron, por eso respaldaron el fraude electoral y, peor aún, guardaron silencio cómplice frente a la escalada de represión.

Conviene subrayar que, de haber asumido el gobierno, Nasralla hubiera sido presionado desde múltiples frentes para romper relaciones con Zelaya y, entonces, aliarse poselectoralmente con fuerzas más dóciles y aceptadas por el *statu quo*. Es muy probable que el mismo Nasralla hubiese, *motu proprio*, tomado distancia de ciertas posiciones que sostenía Libre y que le resultaban incómodas, como por ejemplo la actitud frente a Estados Unidos. Estas consideraciones podrían ser tildadas de meras especulaciones, pero como indicio nos queda el hecho ocurrido el 23 de diciembre de 2017, el día siguiente de su retorno de una corta gira por Estados Unidos, cuando un desanimado Nasralla compareció ante los medios de comunicación para expresar el final de su “contrato” con la Alianza, dado que el fraude le impidió

⁹ Véase como ejemplo: a) el papel de la delegación hondureña en la OEA (*Tiempo hn*, 2017), y b) el reportaje sobre las razones de por qué Honduras fue uno de los ocho países que respaldaron la decisión unilateral de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel (*BBC Mundo*, 2017).

asumir la presidencia. Añadió que, desde ese momento, su lucha pasaba por convocar un frente amplio contra la dictadura en la que tuvieran cabida todas las fuerzas políticas y sociales del país. No era una ruptura total con Libre, pero sí una toma de distancia unilateral en el momento en el que la movilización en las calles alcanzaba puntos altos.

Por diversas razones, en las semanas posteriores Nasralla volvió de alguna manera a atrincherarse en la Alianza. Quizás pronto se dio cuenta de que en las otras orillas nadie estaba dispuesto a defender su proyecto político como lo estaban haciendo las bases de la Alianza. Habrá que esperar a los meses siguientes para ver el replanteamiento de la estrategia de Nasralla. En estos meses ha tenido que soportar la estigmatización y los dardos mediáticos que no recibió en su primera incursión política en 2013. Quizás pueda entender ahora mejor que nunca que las elites lo quieren siempre y cuando siga en su nicho de presentador deportivo y de eventos sociales, jamás como un presidente aliado con las capas sociales más descontentas con el orden de cosas. Vale decir que el mismo Zelaya se despojó de cierta ingenuidad cuando vio el comportamiento hipócrita de las elites hondureñas y del gobierno de Estados Unidos tras su derrocamiento. Veremos entonces si Nasralla logra permanecer firme en su apoyo a los estratos más críticos y golpeados por la opresión o, por el contrario, se muda hacia tiendas políticas que no causen ojeriza a los que se afirman como “dueños” de Honduras.

EL 27 DE ENERO SE IMPUSO EL GOBIERNO PRODUCTO DEL FRAUDE: ¿HACIA DÓNDE SE MOVERÁ LA CRISIS POLÍTICA HONDUREÑA?

JOH volvió a recibir el cintillo presidencial en un acto público poco concurrido. Para la anécdota quedarán, cómo no, las fotos de los simpatizantes del partido de gobierno recibiendo su *lunch* y su paga por haber asistido al acto de investidura, como también quedará en la historia el hecho de que no haya venido ningún mandatario de ningún país, ni siquiera aquellos de los países “aliados” que se apresuraron a reconocerlo como presidente. No es exagerado decir que los asistentes estaban más al tanto de lo que pasaba fuera del Estadio Nacional, pues las calles aledañas estaban acordonadas por fuerzas policiales y militares para contener a los protestantes de la Alianza encabezados por Nasralla y Zelaya. Bombas lacrimógenas, disparos a bala viva, golpes y detenciones fueron suficientes para dispersar a una multitud indefensa, pero el Estadio siguió vacío y la farsa en ningún momento dejó de ser tal.

Es un gobierno con baja aceptación desde su inicio, por mucho que dispendie recursos en el maquillaje que le hacen los medios de

comunicación a su servicio. Lo sostienen importantes poderes institucionales y fácticos, pero le va a ser difícil gobernar con vientos calmos, por muy desanimada que pueda estar hoy la población que luchó infructuosamente contra su reelección. Tampoco la trae todas consigo con la tienda de la derecha continental, porque no parece convenirles defender a alguien que hace todo lo que critican en los “países andinos hostiles”. Cuenta con el apoyo político de Washington, pero de más está decir que ese “vale” dura “24 horas”; sabemos de memoria cómo pueden variar los intereses imperiales según los vientos. La situación económica es la peor a lo largo del siglo XXI porque, pese a que la economía registra niveles de crecimiento moderado, la orientación de este es poco inclusiva, de ahí que los salarios reales se estancan progresivamente, las cargas tributarias aumentan pero con un sesgado carácter regresivo, el empleo informal campea, la deuda crece a ritmos geométricos y la inversión pública real no desputa¹⁰.

Presionado por la inestabilidad, el gobierno en funciones convocó en el último minuto un diálogo de opereta. Los primeros que han aparecido en escena han sido los partidos minoritarios favorecidos por JOH, organizaciones de la sociedad civil descarada o veladamente receptoras de fondos y apoyos gubernamentales, cúpulas religiosas beneficiadas de diferentes maneras por el gobierno y organizaciones sindicales cooptadas por el sistema político, entre otros actores. La Alianza considera esa convocatoria como una farsa y plantea la posibilidad de un diálogo con ciertas condiciones, mediado además por una comisión de figuras internacionales aceptadas por las partes en conflicto.

A juzgar por el desenvolvimiento de los hechos que marcan la cotidianidad en el país, lejos se está de poner fin a la crisis política que viene de 2009. Hasta ahora los caminos recorridos solo han provocado retrocesos institucionales de gravedad, así como desencantamiento de la población con la democracia. Por ello no debe resultar extraño que el régimen hondureño esté más cerca de una dictadura que de un régimen democrático. Si las elites insisten en seguir protegiendo el viejo bipartidismo, en su cálculo de que tarde o temprano las fuerzas de oposición “indeseables” ya no tendrán oportunidades de ganar elecciones, el país avanzará hacia formas dictatoriales más abiertas.

Aunque en este artículo hemos concentrado el análisis en el espectro político electoral, eso no obsta para mencionar la necesidad de acercar la mirada a los cambios en las subjetividades y las orientaciones de sujetos

10 Acerca de la situación económica en Honduras véase: a) el informe del ICEFI (2017), donde se expone un análisis de la política fiscal en el periodo 2013-2016, y b) la publicación sobre los motores del crecimiento y la productividad del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH, 2017).

colectivos no partidarios. En buena medida, la movilización popular en Honduras está dependiendo de los llamados de figuras ligadas a partidos políticos, al tiempo que la organización y la fortaleza de las estructuras de sindicatos, gremios y movimientos sociales en general están, por diferentes razones, disminuidas. Es más, el propio liderazgo de los políticos está siendo superado por una convocatoria más espontánea y horizontal de tejidos sociales informales, en especial en el plano urbano.

Exceptuando en alguna medida la dinámica de resistencia en los territorios rurales presionados por la expansión extractivista, así como las expresiones renovadas del movimiento estudiantil urbano, buena parte de la gente que ha protestado desde 2009 a la fecha no se siente tan identificada con las organizaciones sociales formales. Su tendencia es más hacia el carisma de algún líder político —como ahora Zelaya o Nasralla— o simplemente a aprovechar la oportunidad para manifestar su desencanto hacia un sistema societal que los ha dejado de lado, sobre todo si son jóvenes y mujeres. Pasar de la protesta al fortalecimiento de sujetos colectivos con proyecto y estrategia —y escapar de la “oenegización” de la lucha social— es un desafío de primer orden y, hay que decirlo, trasciende por mucho el análisis del claroscuro político del sistema electoral y partidario en Honduras.

Retomando nuestro ángulo de análisis en este documento, la complejidad de la alternancia política hondureña plantea *a priori* múltiples cursos probables de acción. La mayoría de estos hipotéticos senderos se asientan sobre la constante de la irreparable pérdida de legitimidad del gobierno de Hernández. Pero cualquiera de los escenarios alternativos depende en gran medida de la evolución de ciertas condiciones, tales como:

1. La concreción de un diálogo nacional que satisfaga las expectativas y condiciones mínimas planteadas por los sectores de oposición en Honduras.
2. La presión por reformas al sistema electoral (sobre todo de aquellas orientadas a recuperar la credibilidad del proceso y las que podrían instaurar en el país la figura del balotaje) para asegurar el *establishment* y la reducción de riesgos que ahora plantea el método de mayoría simple.
3. El nivel y la dirección de la intervención del gobierno estadounidense.
4. El nivel y la calidad de la organización de los sujetos no partidarios que conforman el heterogéneo espacio opositor a la dictadura.

5. La actitud y la estrategia de los partidos políticos situados en el espacio de la oposición, tanto nominales como reales.
6. La magnitud de la crisis económica y los instrumentos paliativos que emplee el gobierno.
7. La actitud de los grupos empresariales hacia el gobierno de JOH.
8. El papel de las fuerzas militares.
9. Los nombramientos de órganos contralores y del sistema de justicia que corresponderá hacer al recién elegido Congreso Nacional¹¹.

Según confluyan estas y otras variables, en la perspectiva político-electoral se pueden identificar al menos ocho escenarios, lo que abre un abanico de incertidumbre tal vez nunca visto en la historia nacional. En el Cuadro 1 se esbozan de modo sintético estos escenarios:

Cuadro 1
Perspectiva político-electoral

Escenarios	Algunos rasgos/condiciones esenciales
Continuismo de Hernández	<p>Requiere como condición <i>sine qua non</i> que se agudice la fragmentación de la oposición política.</p> <p>Persistencia y/o agravamiento de los temores de las elites respecto a la organización y la movilización popular.</p> <p>Bloqueo de las reformas político-electorales para devolver la credibilidad del proceso electoral.</p> <p>Manejo contingente de la crisis económica y de legitimidad que permita a JOH una nueva postulación.</p> <p>Visto bueno de Washington al continuismo de JOH.</p>
Triunfo electoral de un candidato distinto a JOH pero del mismo Partido Nacional	<p>Pacto entre las elites y otros poderes extranacionales para negociar la salida de JOH del gobierno.</p> <p>Se mantiene o agudiza la fragmentación de la oposición política.</p> <p>No se logra constituir un partido o alianza sumisa a las elites que pueda convertirse en opción electoral frente al Partido Nacional.</p>

11 En medio de numerosas denuncias de alteración de resultados, el Congreso Nacional (128 escaños) quedó conformado por 61 diputados del Partido Nacional, 34 de la Alianza de oposición, 26 del Partido Liberal y siete diputaciones repartidas entre cuatro partidos afines al gobierno. Con este reparto el partido de gobierno asegura al menos la mayoría simple (65) que le permite aprobar las leyes ordinarias, aunque no le alcanza para las elecciones de órganos contralores que corresponden en este cuatrienio. Cabe hacer notar que la Corte Suprema de Justicia —instrumento clave en favor de JOH— fue electa en 2016, por un periodo de siete años, por lo que su elección no corresponde al actual Congreso Nacional que termina sus funciones en enero de 2022.

<p>Triunfo electoral del Partido Liberal</p>	<p>Las elites logran vencer y disminuir a su mínima expresión a la actual Alianza de Oposición. Las elites pueden ya prescindir del continuismo del Partido Nacional y pueden recurrir de nuevo a la alternancia bipartidista tradicional. Las condiciones del proceso electoral impiden que el Partido Nacional vuelva a cometer los fraudes en los que incurrió en 2013 y 2017.</p>
<p>Triunfo electoral de una alianza encabezada por el Partido Liberal con otras fuerzas o figuras políticas aceptadas por <i>la statu quo</i></p>	<p>La actual Alianza de Oposición se divide, en especial tras la salida de Nasralla, que preferentemente podría unirse con algunos sectores del Partido Liberal. JOH pierde el apoyo internacional y de sus principales soportes oligárquicos actuales. Las elites se sienten seguras de que la nueva alianza representa sus intereses.</p>
<p>Triunfo electoral de la actual Alianza de Oposición (siempre compuesta por Libre y Nasralla)</p>	<p>La presión social sobre el errático gobierno de JOH agudiza la inestabilidad en el país. JOH pierde sus apoyos internacionales y se vuelve cada vez menos deseable para las elites (pese al riesgo de que una oposición incómoda alcance la presidencia). Las presiones nacionales y externas orillan a reformas que garanticen condiciones mínimas de transparencia electoral no observadas en 2013 y 2017. El Partido Liberal no fue capaz de empoderarse en la nueva coyuntura y vuelve a ser comparsa electoral.</p>
<p>Triunfo electoral de una alianza amplia que integre a Libre, Nasralla y el Partido Liberal</p>	<p>JOH rompe los límites que las elites le quieren imponer e insiste en perpetuarse en la presidencia. Los apoyos externos a JOH se han diluido. La crisis económica empeora. La actual Alianza de Oposición logra mantener la unidad y fortalecerse en su papel crítico frente a la dictadura. Vastos sectores del Partido Liberal deciden que esta vez sí se unirán a la Alianza de Oposición, con o sin la autorización de los caudillos que se han apoderado de su partido. Las presiones internas y externas garantizan condiciones básicas de transparencia electoral.</p>
<p><i>Outsider</i> cercano al <i>statu quo</i> que a la vez tome distancia de JOH</p>	<p>Por diferentes razones la oposición política se debilita o fragmenta. Las elites en su cálculo de costo/beneficio asumen que ya no les conviene la presencia de JOH en el gobierno. Ante la deslegitimación del Partido Nacional y del Partido Liberal, las elites promueven o permiten la irrupción de un <i>outsider</i> que pueda opacar electoralmente a la oposición no aceptada por el <i>establishment</i> pero que, a la vez, sea capaz de capturar una buena porción del voto de los simpatizantes desencantados de los dos partidos tradicionales.</p>
<p>Interrupción por hecho de fuerza mayor del gobierno de JOH</p>	<p>Sucesos inesperados de índole interna o externa evitan que JOH pueda terminar el actual periodo de gobierno. Las elites, temerosas ante la incertidumbre, impulsan un gobierno provisional que preferentemente convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para recrear un nuevo pacto institucional en el país.</p>

Como puede deducirse del cuadro anterior, las opciones son múltiples, sin perjuicio del distinto grado de probabilidad de cada una de ellas. Incluso hay otros escenarios alternativos que no son mencionados por su escasa factibilidad de cara a los próximos cuatro años, como puede ser un eventual triunfo electoral de Libre sin la necesidad de aliarse con otras fuerzas políticas, o bien la interrupción del gobierno de JOH por un alzamiento popular que desemboque en una Asamblea Nacional Constituyente no controlada por las elites. Asimismo, conviene indicar que, de los ocho escenarios mencionados en el cuadro, el primero es el que tal vez exhibe menor probabilidad, pero se menciona en tanto hay indicios para pensar que JOH buscará maximizar sus cartas de juego para buscar un tercer periodo de gobierno, con o sin elecciones de por medio.

UN COMENTARIO FINAL

Así como se dijo antes que el robo de las elecciones en 2017 no debe verse como un fenómeno aislado del deterioro sistemático de la institucionalidad hondureña, así tampoco es sensato mirar este zarpazo como un hecho aparte de la estrategia para contener la emergencia y consolidación de gobiernos que, en mayor o menor medida, se perciban como hostiles a las oligarquías latinoamericanas y a los intereses de Estados Unidos.

Hay quienes se preguntan por qué la protesta social en Guatemala en 2015 sí logró incidir en la destitución del presidente Otto Pérez Molina, mientras que en Honduras no se alcanzó ese propósito (ni con el caso del IHSS ni con la reelección inconstitucional). Con ingenuidad algunos arguyen que la movilización social en aquel país fue mayor o más cohesionada. Nada que ver. Tan heroica como el volcamiento del pueblo guatemalteco en las calles, e incluso más permanente y sistemática, fue la protesta social en Honduras en diferentes momentos del primer gobierno de Hernández, como también lo fue la resistencia al golpe de Estado.

Por supuesto que, además de la protesta, otras condiciones influyeron en los hasta hoy distintos derroteros de ambos presidentes —uno en la cárcel, el otro de nuevo sentado en el solio presidencial. Se podría mencionar el hecho de que Pérez Molina nunca llegó a gozar de la concentración de poderes institucionales que detenta Hernández, así como se rescata el papel jugado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)¹². También hay que prestar atención al riesgo político —interno y externo— que representaba el espectro de candidatos que podían aspirar a la presidencia en

12 La CICIG fue creada en 2006 como parte de los Acuerdos de Paz en ese país. Esta entidad, en medio de actuaciones previas intermitentes, adoptó un papel crucial en el proceso de investigación de los casos de fraude fiscal en los que estaba inmiscuido Pérez Molina.

Guatemala luego de la salida de Molina. No había mayores temores a que emergiera un gobierno hostil a las elites tradicionales, más allá de los usuales pleitos intraoligárquicos. Para dar la razón a este comentario, ahí está el desabrido gobierno de Jimmy Morales. En Honduras, por el contrario, la alternativa electoral en caso de que se derrumbase el Partido Nacional no era el Partido Liberal, sino Libre y la Alianza que finalmente constituyó para participar en las elecciones de 2017. Frente a la duda y el riesgo era mejor el viejo conocido, incondicional a las estrategias de dominación de los poderosos.

En América Latina hemos visto, desde el golpe de Estado en Honduras, variadas formas de una estrategia flexible que se adapta a las circunstancias de cada país para minar los gobiernos incómodos a los intereses que han dominado en la región. Aunque no son los únicos incidentes, tienen su podio en esta galería el golpe parlamentario contra Lugo en 2012, el *impeachment* contra Dilma Russeff en 2016 y el apañamiento del fraude electoral hondureño en 2017.

Demos por seguro que esta no será la última artimaña en el afán de clausurar el llamado ciclo progresista latinoamericano; por lo tanto, así como los sectores reaccionarios del continente se han actualizado con rapidez ante las nuevas condiciones políticas, desde los sectores que luchan por una sociedad más justa e incluyente también hay que aprender de los errores y desviaciones —que no son pocos— cometidos en la marcha por los gobiernos que enarbolaron banderas alternativas, como también habrá que aprender a anticipar y neutralizar con mayor éxito los artificios jurídicos, políticos y comunicacionales que los poderosos están desplegando en cada palmo del territorio latinoamericano. Por cierto, no debemos perder de vista lo que pueda ocurrir en las elecciones mexicanas a mediados de 2018.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar, V. 2017 “Marco Ramiro Lobo: ‘David Matamoros ordenó parar el sistema de transmisión y eso fue un error grave’” en *Once Noticias*, 13 de diciembre, en <<http://www.oncenoticias.hn/david-matamoros-ordeno-parar-el-sistema-de-transmision/>>.
- BBC Mundo* 2017 “Las razones de Honduras y Guatemala para ponerse del lado de Trump y oponerse a la resolución de la ONU que condena la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel”, 22 de diciembre, en <<http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42458083>>.
- Carnegie Endowment for International Peace (2017) “Las instituciones del gobierno que han sido corrompidas para servir a los fines de la red”, en <<http://carnegieendowment.org/2017/05/30/es-pub-71526>>.

- El Heraldó* (2017), "El periodismo necesita inversión. Para compartir esta nota utiliza los íconos que aparecen en la página", 22 de diciembre, en <<http://www.elheraldo.hn/eleccioneshonduras2017/1137250-508/heide-fulton-repetir-las-elecciones-en-honduras-no-tienen-base-en-la>>.
- FOSDEH (Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras) 2017 *Seguimiento y monitoreo al gasto público en el proceso electoral 2017* (Tegucigalpa: FOSDEH), en <<http://www.fosdeh.com/wp-content/uploads/2018/01/Alerta-seg-gast-electoral-2017.pdf>>.
- González Díaz, M, 2017 "Por qué la postura de Estados Unidos (o su silencio) es clave en la crisis política de Honduras tras las elecciones" en *BBC Mundo*, 20 diciembre 2017, en <<http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42421546>>.
- ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales) 2016 *¿Hacia dónde va la política fiscal hondureña? Notas para su interpretación* (Honduras: ICEFI), en <http://icefi.org/sites/default/files/hacia_donde_va_la_politica_fiscal_hondurena_0.pdf>.
- ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales) 2017 *La política fiscal reciente en Honduras (2013-2016) y sus efectos económicos y sociales* (Honduras: ICEFI), en <http://www.icefi.org/sites/default/files/la_politica_fiscal_reciente_en_honduras.pdf>.
- Nauert, H. 2017 "On the Presidential Elections in Honduras" en *U.S. Department of State. Press Statement*, 22 de diciembre, en <<https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/12/276752.htm>>.
- OEA 2017 "Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre las elecciones en Honduras" 17 de diciembre, en <http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-092/17>.
- Radio Progreso* 2015 "Caso IHSS: el poder detrás del mayor acto de corrupción en Honduras", 15 de mayo, en <<http://radioprogreso.hn/index.php/comunicaciones/noticias/item/2073-caso-ihss-el-poder-detr%C3%A1s-del-mayor-acto-de-corrupci%C3%B3n-en-honduras>>.
- The Economist* 2017 "Reasons to Disbelieve. What the Data Say about the Integrity of Honduras's Election. Our Analysis of a Disputed Vote Count", 9 de diciembre, en <<https://www.economist.com/the-americas/2017/12/09/what-the-data-say-about-the-integrity-of-hondurass-election>>.
- Tiempo.hn* 2017 "Se acalora debate entre cancilleres de Venezuela y Honduras", 20 de junio, en <<https://tiempo.hn/se-acalora-debate-cancilleres-venezuela-honduras/>>.

TELE-CANDIDATO Y MALESTAR SOCIAL

Esteban De Gori*

I

Salvador Nasralla tiene un recorrido de época. Se convirtió en un conductor de televisión muy popular. Pasó por diversos “rubros” que lo conectaron con heterogéneas audiencias y sectores sociales. Entre otros programas, presentó: *5 Deportivo*, *Miss Honduras* y *Bailando por un sueño*. Llegó a distintos públicos y eso fue clave para su participación en política. Tuvo, además, un hándicap: se consolidó en un momento convulsionado de la política hondureña, y lo hizo a partir de una agenda latinoamericana y mundial de gran impacto. Entró a la política con un “temazo”: la corrupción, punto que fue el gran articulador de su propuesta política, además de ser una marca en los reclamos ciudadanos. En la crisis del momento había algo que promovía un gran malestar hacia la clase política, sobre todo por su incapacidad para solucionar problemas muy relevantes para la sociedad (seguridad, empleo, etcétera).

En marzo de 2011, Nasralla formó el Partido Anticorrupción (PAC). A dos años del derrocamiento de Zelaya surgía una propuesta

* Argentino, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigador adjunto del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICET) y docente de la UBA y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), ambas en Argentina.

de regeneración del orden a través del ataque a la corrupción. Este agrupamiento lleva como símbolo central una flor de lis, emblema que tiene su origen en Mesopotamia (quizá se observa en ello un eco del origen libanés del dirigente del PAC) y que, entre sus muchos significados, remite a la pureza. En el mundo contemporáneo, la corrupción se inscribe en un horizonte que se resiste al “encuadre” ideológico. El PAC hacía de la corrupción un reclamo por fuera de izquierdas y derechas, como otros tantos partidos de la región y de Europa. Retomaba las expectativas del “hombre común”, que busca que los políticos no le roben ni a través de los impuestos ni de la corrupción. La representación o discursividad de esta demanda ciudadana se asociaba a miradas moralistas e individualistas frente a los excesos de los partidos tradicionales que controlaban el Estado. El “honestismo” de Nasralla se convirtió en una clave interpretativa del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) y en una representación de las nuevas demandas ciudadanas. Ambas cuestiones se instalaron a partir de la desestructuración de las identidades y propuestas tradicionales. La televisión y un estilo de periodismo posmoderno acompañaron estos nuevos reclamos, alejados de un “elitismo cada vez más conservador”, presente desde 1982. No solo eso, sino que el partido como institución, al igual que ocurrió en otras regiones, fue perdiendo el lugar aglutinador de la representación y de la integración y quedó vinculado solo a la administración del gobierno.

El combate a la corrupción fue una oferta electoral que permitía posicionarse e incluso sortear dos identidades consolidadas, constitutivas y orientadoras del sistema político como las que ofrecían el Partido Nacional y el Partido Liberal. Una encuesta realizada en marzo de 2018 por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)¹ indica que el 55,7% de la población cree que hay corrupción en el manejo de los recursos del Congreso Nacional.

II

El conductor de televisión se transformó en candidato y dirigente político. Se desenvolvía en dimensiones muy valoradas como la comunicación y el marketing estratégico, partía de un gran conocimiento

1 Ficha técnica: Encuestas válidas en total: 1.540. Muestreo nacional: polietápico por cuotas departamentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la elección de hogares. Se visitaron dieciséis departamentos de la República siguiendo una distribución proporcional al tamaño de la población (PPT), establecida por segmentos geográficos. Error muestral nacional: +/-2,5%. Forma de realización: entrevista personal, mediante visita al hogar. Fecha de realización: del 12 al 22 de febrero de 2018. Equipo coordinador: Alberto McDormoth, Elvin Hernández, Gustavo Cardoza, Orlando Posadas y Víctor Emilio Borjas

mediático, conocía las reglas del *timing* televisivo y sostenía una agenda epocal muy relacionada con el “honestismo”. Espectáculo y política se nutrían, se fortalecían y colaboraban para consolidar la referencia de este candidato, una referencia que presentaba límites por la gravitación de los otros partidos, pero, a pesar de ello, Nasralla logró “construir” un lugar de competencia cuando todo el sistema político anterior a 2009 entró en crisis; en ese año se produjo un cambio de una hegemonía bipartidista y elitista, a un sistema plural en el que los diversos partidos aglutinaron una porción competitiva del voto. El control bipartidista implosionó.

De la gran crisis que desató el golpe de Estado contra Manuel Zelaya y que se instaló en el centro del consenso bipartidista entre liberales y nacionales, surgieron el Partido Libre² y el PAC. Una propuesta progresista y otra “honestista” se alzaron de la convulsión. Ambos eran resultado del malestar democrático y de las insuficiencias que proponían los dos partidos históricos en cuanto a administración política. Ese malestar continúa y se ha agravado por la imposición de JOH como candidato a la (inconstitucional) reelección y por las sospechas de fraude electoral. La investigación del ERIC indicó que el 52,7% de la población creía que la reelección era ilegal y el 62%, que existió fraude. Por tanto, nada nos advierte en lo inmediato de que JOH vaya a cambiar esta situación.

Ahora bien, puede observarse una gran diferencia entre los dos partidos que surgieron del tembladeral de 2009: el Partido Libre se creó como respuesta a la crisis desde una plataforma discursiva con fronteras ideológicas relativamente claras, mientras que el PAC reflejaba más la representación de un malestar o de una expectativa que incluso era más transversal que la mirada de Zelaya. Cuando en la investigación desarrollada por el ERIC se consultó sobre la corrupción, se detectó que es un problema del que opinan los votantes de todos los partidos, quienes reconocen que atraviesa tanto al Congreso Nacional, como a la Presidencia.

III

Las marchas que resistieron el golpe, una onda expansiva crítica sobre los partidos tradicionales y la llegada al poder de Porfirio Lobo y de su Partido Nacional en 2010, no cerraron la crisis política, sino todo lo contrario. El partido histórico del orden, el Partido Nacional, no pudo terminar con la convulsión ni romper la credibilidad en el sistema

2 El Partido Libertad y Refundación (Libre), liderado por Zelaya, nació como brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), articulación de organizaciones sociales antigolpistas.

político y en sus dirigentes. Desde Porfirio Lobo hasta el actual JOH —también del Partido Nacional—, lejos de instalar una gobernabilidad creíble y legítima, se agudizó la ilegitimidad por el intento de continuar en el poder.

La decisión de derrocar al presidente constitucional Manuel Zelaya en 2009 abrió una brecha insalvable cuyo primer impacto se sintió en el sistema político y luego, por ende, en la dinámica de los actores sociales.

El consenso que había caracterizado a la política hondureña durante más de un siglo, y fundamentalmente a partir de la transición democrática iniciada en 1982, se había resquebrajado. Las políticas instauradas desde esos años —muy ligadas a los procesos de ajuste, privatización, precarización del empleo y del Estado, financierización de la economía y explosión de la inseguridad y de la migración— habían sufrido una impugnación severa. Zelaya se iba del poder con algunas políticas para “mostrar”, en el intento de variar rutinas planteadas desde 1982 que fueron volviéndose cada vez más conservadoras y elitistas³. Se iba golpeado, pero con un capital político acumulado en esa “variación”.

El golpe contra Zelaya no solo se debió a su propuesta de realizar una consulta para una futura reforma constitucional, sino a que su gobierno introdujo algunas novedades en la acción política que obligaron a los partidos tradicionales a propiciar su salida. A partir de ello se observaron algunas trayectorias y situaciones específicas: 1) la transformación de un orden elitista controlado por el Partido Nacional y el Partido Liberal en un sistema heterogéneo de partidos con capacidad para alterar o influir en la competencia electoral; 2) el declive del Partido Liberal, del cual provenían Zelaya y muchos de los dirigentes que se fueron al Partido Libertad y Refundación (Libre); 3) la politización de la ciudadanía o de un sector de ella, y 4) la aparición o reforzamiento de los intereses elitistas por parte del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas.

Pese al lugar más o menos establecido en el espectro ideológico en el que se ha colocado a Mel Zelaya, este es considerado por el 30% de la población, según el estudio del ERIC, como el mejor presidente de Honduras, seguido por JOH, con el 18,7%.

3 La desigualdad económica se redujo durante su gobierno por cuatro años consecutivos. El porcentaje del PIB destinado al gasto social —educación y salud inclusive— aumentó durante el periodo 2006-2008. Durante el gobierno de Porfirio Lobo, el gasto social se redujo de forma continua. Las tasas de pobreza y de pobreza extrema tuvieron una caída del 7,7% y del 20,9%, respectivamente, durante el gobierno de Zelaya (Johnston y Lefebvre, 2013).

IV

En el año 2016 la crisis desatada en 2009 se profundizó aún más. JOH logró que el Tribunal Supremo Electoral le permitiera inscribirse como candidato para la reelección. Un sector minoritario de su partido no lo apoyó en esta decisión y presentó otro candidato⁴. Su candidatura recibió el respaldo de los espacios internos del Partido Nacional “Juntos por más cambios” y de “Unidos por la nueva Honduras”.

El rechazo legal y político a la imposición reeleccionista de JOH reconfiguró la dinámica de la oposición política y social. En ese contexto, Nasralla y Mel construyeron la Alianza de Oposición contra la Dictadura, lo cual le costó a Nasralla ser expulsado del PAC y dejó claro que la “filosofía anticorrupción” se encontraba en la Alianza. Esto contribuyó para que se estableciera un acuerdo electoral entre el Partido Libre y Nasralla y se delineara una estrategia en la que el candidato debía representar una opción más moderada y amplia que contara, sobre todo, con apoyos mediáticos e internacionales, objetivos que las figuras de Zelaya o Xiomara Castro no hubieran logrado. En la elección presidencial de 2013, Xiomara Castro había participado como candidata, obteniendo más votos que el propio Nasralla⁵. Leyendo la coyuntura actual, los dirigentes de Libre se “corrieron” del centro de las críticas y posibilitaron el ascenso del tele-candidato. La fórmula presidencial Nasralla-Castro se volvió atractiva.

Las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2017 incorporaron tantas irregularidades, que el proceso quedó deslegitimado. La interrupción del conteo por parte del Tribunal Supremo Electoral cuando JOH estaba por debajo de Nasralla, y el resultado final a favor del primero luego de restablecerse el escrutinio, provocó la impugnación social y de instituciones como la Organización de Estados Americanos, que el 18 de diciembre aconsejó convocar nuevas elecciones. Cuatro días después, el gran apoyo vendría de Estados Unidos, cuyo gobierno intentó, así, legitimar la contienda, asentar “el campo” de sus aliados y restablecer cierta confianza internacional a favor de JOH en momentos en que en Honduras se desarrollaban marchas y protestas contra este.

El mismo día en que la administración norteamericana dio su apoyo a JOH, Nasralla utilizó un término televisivo para explicar el lugar al que lo condenaba dicha decisión: “quedo fuera de escena”, aseguró. Su viaje en septiembre de 2017 a Estados Unidos no había

4 El Movimiento Nacional Rafael Callejas tenía como candidato presidencial a Roberto Ramón Castillo.

5 En 2013, Xiomara Castro, con Libre, obtuvo el 28,78% de los votos y Nasralla, con el PAC, el 13,43%.

logrado convencer de que su gobierno no sería controlado por Mel Zelaya.

Después de algunas idas y venidas, Nasralla se sumó a las protestas callejeras que tuvieron momentos importantes y situaciones dramáticas desde el cierre de las elecciones hasta principios de 2018⁶. Estas no impidieron la asunción de JOH ni lograron que sus aliados cambiaran de opinión. El bloque social de poder que colaboró con la estrategia del presidente se mantuvo. Ni siquiera el reclamo de algunos sectores de las fuerzas de seguridad reticentes a la represión de la protesta social generó un impacto positivo en dicho bloque. La legitimación del sistema político y de la figura presidencial quedó fracturada. Algunos datos interesantes del estudio realizado por el ERIC son los siguientes: el 55,7% de la población reconocía que ganó Nasralla y el 57,9% que se vivía en una dictadura. Ambas percepciones dan cuenta de la deslegitimación del orden democrático y de la dinámica política. Es llamativo que, según dicho estudio, el 27,4% de los simpatizantes del Partido Nacional creía que había habido fraude.

V

A fines de enero de 2018 el Partido Nacional logró imponer, con el apoyo de partidos minoritarios, a Mauricio Oliva en la Presidencia del Congreso⁷. El día de la elección del presidente del parlamento, a Nasralla se le impidió ingresar, lo que generó una fuerte tensión entre los diputados de la Alianza y el oficialismo. El tele-candidato advirtió: “no va a haber gobernanza en Honduras”. En cuanto al control del Ejecutivo y del Congreso Nacional⁸, se percibe el control unilateral

6 Las protestas fueron reprimidas por la policía y el ejército. Se suspendieron garantías fundamentales a través del Decreto No. 084-2017 mediante el cual se impedía la libertad de reunión y de manifestación. Murieron 39 personas civiles, según el Comité de Familiares y Desaparecidos y Detenidos de Honduras (COFADEH), y tres miembros de las Fuerzas de Seguridad; fueron detenidas 1.396 personas y más de cien fueron judicializadas según la Coalición contra la Impunidad (2018).

7 Tras las elecciones, el Congreso quedó conformado por 61 diputados del Partido Nacional, 30 del Partido Libre, 26 del Partido Liberal, cuatro del Partido Innovación y Unidad (aliados de Nasralla, como el Partido Libre) y cuatro de Alianza Patriótica. Tres partidos minoritarios obtuvieron un diputado cada uno.

8 El Congreso Nacional posee un rol central. Es una institución en la que se debaten y aprueban leyes, pero también se ejecutan políticas públicas. Por tanto, controlar la presidencia del Congreso es controlar dinero para inversión pública y ampliación del aparato partidario. Dicha instancia maneja la agenda legislativa y presupuesto, el cual reparte de manera discrecional a los diputados, que lo distribuyen en sus territorios para su acumulación partidaria y personal. El presidente del Congreso Nacional tiene un gran poder y, en muchos casos, es un “trampolín” en la disputa por la Presidencia. El presidente de la nación y el del parlamento deben negociar y acordar la distribución de fondos. El poder del primero en parte se

de los poderes el Estado por parte del Partido Nacional. Si a esto le sumamos la influencia sobre el Poder Judicial y la alianza con las Fuerzas Armadas, puede afirmarse que el Partido Nacional —con una legitimidad resquebrajada— controla los poderes clave del Estado. El “control elitista envolvente” del Partido Nacional, más los problemas de legitimidad, profundizan la desconfianza en los partidos políticos y en muchas de las instituciones más importantes de Honduras, situación que conduce a una profunda desconfianza hacia el Estado por parte de los ciudadanos, que tienden a vincularse con estructuras territoriales y dirigentes locales con capacidad de tramitar o resolver el descontento.

El presidente anterior, Porfirio Lobo, intentó llegar a un acuerdo entre las elites para reconstruir la gobernabilidad (un gobierno de integración), cosa que no logró. JOH, el mandatario que lo sucedió, se alejó mucho más del acuerdo al imponer la legislación que le permitió reelegirse y, posteriormente, con el fraude. Pese al control de todas las instituciones por parte del Partido Nacional, la crisis política no se ha cerrado. A fines de enero de 2018 el gobierno de JOH le solicitó a la ONU apoyo técnico para iniciar un diálogo con la oposición. Se pusieron en marcha mesas técnicas y políticas sin la participación de Manuel Zelaya, quien cree que la solución no pasa por un pacto entre dirigentes. El 10 de abril, Nasralla, que sí había considerado como una salida posible el diálogo, lo abandonó porque no observaba garantías vinculantes para que se llevara a cabo⁹; es decir, no encontró apoyo del Congreso para hacer efectivas las resoluciones de las mesas.

La relación entre Nasralla y Zelaya se tensionó debido a la participación del primero en las mesas en cuestión. Habrá que esperar el impacto de tales tensiones al interior de la Alianza. Ambos dirigentes han apostado por dos cursos de acción diferentes, pero existe un acuerdo común en desconocer la legitimidad del actual presidente. La crisis no va a concluir en lo inmediato si la Alianza y Libre no participan en la administración. El tele-candidato Nasralla puede regresar a la televisión e incluso el Partido Libre puede perder el pulso en la calle, pero no cesarán el malestar ni el resquebrajamiento en la credibilidad de los partidos y del Ejecutivo. Frente a ello, no hay nada que lo detenga, solo la política que, por ahora, no aparece.

resuelve y construye en acuerdo con el segundo. Cuando hay tensiones, el poder del presidente se somete a problemas varios; por ejemplo, en 2008 y 2009 el presidente del Congreso, R. Micheletti, se enfrentó a Mel Zelaya, y ello empujó a este a intentar gobernar sin mantener acuerdos internos del Parlamento.

9 Además de Nasralla, participaron algunos representantes de la Alianza, del Partido Innovación y Unidad (PINU) y del Partido Liberal.

BIBLIOGRAFÍA

Johnston, J. y Lefebvre, S. 2013 *Honduras desde el golpe: Resultados económicos y sociales* (Washington: Center for Economic and Policy Research), en <<http://cepr.net/documents/publications/Honduras-2013-11-ESPAÑOL.pdf>>.

JOH, JOH, JOH, CÓMO HERNÁNDEZ SE ROBÓ LA REELECCIÓN

Bárbara Ester* y Guillermo Javier González**

Juan Orlando Hernández Alvarado (JOH) nació el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, más precisamente en una aldea llamada Río Grande. Hijo de Juan Hernández Villanueva y Elvira Alvarado Castillo, fue el decimoquinto de diecisiete hermanos.

Luego de haber completado sus estudios en el entonces recientemente fundado Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula, de donde egresó con el grado de subteniente de infantería como parte de la primera promoción, se mudó a Tegucigalpa para estudiar Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Allí se alzaría con su “primera presidencia” entre los años 1988 y 1990, puesto que durante ese periodo fungió como presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UNAH.

* Licenciada y profesora de Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cuenta con una diplomatura en Género, Movimiento de Mujeres y Política por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Actualmente se desempeña como investigadora del Observatorio Político en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

** Licenciado en Sociología con orientación en Diagnóstico Social y profesor de Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es docente de Antropología Cultural en escuelas de nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigador en el CELAG.

A la vez que se destacaba en el ámbito académico, comenzó su carrera pública ingresando en la política de un modo más formal en 1990 de la mano de su hermano Marco Augusto Hernández, quien se desempeñaba en ese entonces como diputado (1990-1994) ocupando la Primera Secretaría del Congreso Nacional, y designó a Juan Orlando como su asistente ejecutivo. Desde ese rol aprovechó para conocer el ambiente político partidista y, sobre todo, relacionarse con dirigentes del Partido Nacional.

Finalizó sus estudios de grado, egresó como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, y en 1995 se graduó en la Maestría en Administración Pública con Orientación en Administración Legislativa en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, Estados Unidos. Una vez retornado a Honduras, se dedicó a impartir clases en la universidad. En lo que sería una gran ironía del destino —teniendo en cuenta la serie de irregularidades que le permitirían en el futuro su reelección presidencial— Hernández se desempeñó como profesor de Derecho Constitucional.

JOH CONGRESISTA

En las elecciones del año 1997 JOH se postuló como candidato a diputado por el departamento de Lempira y consiguió vencer a su contrincante del Partido Liberal por diez puntos porcentuales (8.111 votos). A partir de ese momento se desempeñó como diputado nacional por cuatro periodos legislativos consecutivos.

Habiendo llegado a la Cámara Legislativa en 1998, sin siquiera haber cumplido los 30 años y siendo por entonces uno de los congresistas más jóvenes y beligerantes, se ganó el mote de “Cipote Malcriado” por parte del célebre político liberal Rafael Pineda Ponce, por entonces presidente del Congreso (1998-2002). En su segundo periodo legislativo (2002-2006) fue electo como primer secretario de la Junta Directiva y, posteriormente, se erigió como jefe de la bancada del Partido Nacional entre los años 2005 y 2009.

Con una carrera política en ascenso y ocupando progresivamente cargos de mayor jerarquía, consiguió dar un gran salto en el año 2010 —durante el reacomodo que siguió al golpe de Estado en contra del presidente Manuel Zelaya—, catapultándose a la Presidencia del Congreso de la Nación, donde se aprobaron una serie de controvertidas medidas cuando ocupó el cargo, tales como la impopular Ley Temporal de Seguridad Poblacional —más conocida como “Tasa de Seguridad”—, la Ley de Inversiones para Atracción de Capitales y la Ley para la creación de Zonas Especiales de Desarrollo —también denominadas “Ciudades Modelo”.

Desde la Presidencia del Congreso se encargó, además, de crear la Policía Militar de Orden Público (PMOP), la cual en el decreto original de su fundación se preveía que contara con 5.000 efectivos seleccionados de batallones militares. Tiempo más tarde, la PMOP se ha convertido en el ejército personal del ahora mandatario, según denuncian referentes de la oposición. Por otra parte, y en otro acto que muestra a las claras su poder al servicio de la impunidad, JOH promovió desde el Parlamento en 2012 la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional —Rosalinda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Bustillo Palma y Francisco Ruiz Gaekel—, una de las divisiones de la Corte Suprema de Justicia. La razón para la deposición fue que habían votado en contra de sus proyectos de depuración policial y ciudades modelo. No deja de llamar la atención que, posteriormente, los cuatro magistrados nombrados en reemplazo de los destituidos fallaran a su favor, lo que otorgó a Hernández el aval para la reelección presidencial.

Si bien su mandato finalizaba en enero de 2014, el 12 de junio de 2013 el Congreso le extendió a JOH un permiso para ausentarse de sus funciones de modo que pudiera dedicarse enteramente a su campaña como candidato presidencial por el Partido Nacional. Como medida previa a su retirada de la Cámara, JOH introdujo un último proyecto de ley: la controvertida creación de la Unidad de Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad, encargada de realizar actividades de inteligencia y de reacción que permiten implementar operaciones que la Policía Preventiva no puede llevar a cabo.

JOH PRESIDENTE

Luego de haber obtenido el 36,89% de los votos en las elecciones del 24 de noviembre de 2013, superando a Xiomara Castro (28,78%), el primer mandato de Juan Orlando Hernández comenzó el 27 de enero de 2014, el mismo día en que concluirá su estancia en la presidencia de la Cámara, pero del año 2022, gracias a la polémica decisión de la Corte Suprema en 2015 de permitir la reelección presidencial. El actual mandatario hondureño reemplazó a su copartidario, Porfirio Lobo, en lo que fue el primer traspaso de mando en la historia moderna del país entre dos miembros del Partido Nacional.

Su discurso inaugural estuvo signado por esbozos de populismo punitivo. En el mismo, Hernández aseguró que aumentaría el número de efectivos de la Policía Militar y pondría en vigencia una unidad especial de policía denominada Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES). Además, se pronunció sobre la aceleración de la depuración de las instituciones públicas y aludió a los altos índices de violencia en el país, que su gobierno

contrarrestaría aplicando “cero tolerancia”. Durante su primera gestión, los esfuerzos del gobierno se centraron en reducir la tasa de desempleo y el índice delincencial, que ubicaban al país entre los cinco más peligrosos del mundo.

POPULISMO PUNITIVO

La tropa TIGRES contó con el asesoramiento de los cuerpos policiales de Chile y Colombia, ambas fuerzas de seguridad duramente cuestionadas por su funcionamiento, en especial por los hechos represivos que se les imputan en ambos países. En este sentido, se trata de la creación de una fuerza de seguridad híbrida que implica la militarización de las fuerzas policiales, una tendencia que se ha venido reafirmando en Honduras, pero que cuenta con antecedentes en, por ejemplo, México. Es decir, se otorga a los militares un protagonismo en asuntos que no les corresponden, desdibujando el límite entre las funciones de seguridad y de defensa. Desde los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales, la creación de este cuerpo fue vista como un nuevo paso hacia la militarización de esta nación centroamericana.

En consonancia con el ya mencionado carácter punitivista de su gobierno, en septiembre de 2016 se puso en marcha la primera cárcel de máxima seguridad en Honduras, denominada “El Pozo” y ubicada en Ilama, Santa Bárbara, la cual opera bajo los lineamientos de la Asociación Americana de Prisiones (ACA). Posteriormente, comenzó a funcionar la cárcel de máxima seguridad “La Tolva”, también conocida como “El Pozo II”, en Morocelí, El Paraíso.

CORRUPCIÓN Y MARCHA DE LAS ANTORCHAS

En su primer acto público tras la toma de posesión, el presidente Hernández firmó una carta de intenciones con Transparencia Internacional para pactar un convenio entre su gobierno y dicho organismo, por lo que Honduras se convirtió en el primer país del mundo en firmar un convenio de combate a la corrupción de esta magnitud. Paradójicamente, su gobierno sería salpicado por el mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas: el desfalco de doscientos millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El mismo Hernández admitió, en junio de 2015, haber recibido fondos de empresas ligadas al IHSS durante su campaña de 2013, aunque aseguró que desconocía el origen de los recursos.

Debido al escandaloso caso de malversación de los fondos del IHSS a empresas fantasmas, el grupo autodenominado Los Indignados realizó una convocatoria para el viernes 29 de mayo de 2015, en la que cientos de ciudadanos se manifestaron con antorchas en las calles

de Tegucigalpa para exigir el esclarecimiento definitivo de este caso. Una semana más tarde, la Marcha de las Antorchas se replicó en otras ciudades del país y desde entonces se convirtió en una constante de los viernes por la tarde.

Por su parte, y en dicho clima de ebullición social, los líderes de la oposición acusaron al presidente Hernández de ser el autor intelectual de la estafa al IHSS, pero este por su parte declaró que él tenía el deber de devolver esos recursos y recalcó que las investigaciones debían continuar “caiga quien caiga”. Él, hasta el momento, ha conseguido salir ileso.

ASESINATO DE LÍDERES AMBIENTALISTAS

En marzo de 2016 fue asesinada Berta Cáceres, dirigente indígena y activista ambientalista mundialmente conocida, quien se había convertido en una piedra en el zapato para la elite empresarial hondureña mediante la organización de campañas para la protección de los derechos de las comunidades indígenas. En los días posteriores al crimen, Amnistía Internacional criticó la deficiente investigación de las autoridades hondureñas y lamentó la negativa del presidente JOH a reunirse con familiares de Berta Cáceres, con defensores de derechos humanos y con Amnistía Internacional.

En enero de 2017, Global Witness publicó un informe en el que señala a Honduras como el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, con 123 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas. La ONG informó que catorce activistas fueron asesinados en el país en 2016, incluida Cáceres y otros dos miembros de su organización. El informe habla además de “elites poderosas” y políticos detrás de dichos proyectos, mencionando directamente a la entonces presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladis Aurora López Calderón, e implicando al ejército y a la policía en la represión contra los activistas, financiados por medio de la ayuda estadounidense.

REELECCIÓN

En 2009, el entonces presidente por el Partido Liberal, José Manuel Zelaya Rosales, pretendía realizar una consulta popular para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con la intención de conocer si la ciudadanía estaba o no de acuerdo con cambiar el artículo 239 constitucional, el cual impide la reelección presidencial. La Constitución vigente en Honduras fue sancionada en 1982, luego de una sucesión de gobiernos militares, y estableció la imposibilidad de aspirar a la reelección presidencial con el fin de mantener el clima de Estado de derecho y evitar caer nuevamente en dictaduras republicanas como las que la nación sufrió en los siglos XIX y XX.

Se trataba de una convocatoria democrática que, si bien no llegó a hacerse efectiva, terminó siendo el principal argumento de los militares, la elite empresarial y políticos opositores para sustentar el golpe militar que destituyó a Zelaya. La Corte Suprema de Justicia, junto al Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y el Congreso Nacional, se opusieron a la consulta. Siguiendo la orden de la Corte Suprema, el ejército arrestó, expulsó del país y trasladó a Costa Rica al entonces mandatario.

La Constitución señala explícitamente en su artículo 239 que aquel que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública. Sin embargo, el 22 de abril de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló unánimemente a favor del recurso de inaplicabilidad del artículo 239, gracias a lo cual Juan Orlando Hernández pudo participar en las elecciones internas de 2016. JOH se convertiría, una vez superadas estas elecciones, en el primer presidente en buscar la reelección desde el regreso de la democracia a Honduras en 1982.

FRAUDE

Después de haber reinterpretado la legislación para reelegirse y de dirigir un recuento sumamente sospechoso —cuestionado tanto por opositores como por observadores internacionales, quienes exigieron una nueva elección—, el presidente JOH fue finalmente declarado ganador por el desacreditado Tribunal Supremo Electoral de Honduras.

Desde el ámbito internacional, la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que durante los comicios hubo tantas irregularidades, que era imposible validar el resultado de las elecciones. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó al gobierno una nueva elección, advirtiendo que ignorar el informe de los observadores electorales establecería un “precedente peligroso” antes de las elecciones programadas en toda la región en 2018.

La comisión electoral informó que, en la noche del 26 de noviembre, el principal candidato de la oposición, Salvador Nasralla, aventajaba a JOH por cinco puntos porcentuales con casi el 60% de las boletas escrutadas antes de que el recuento electrónico se detuviera durante un día y medio, hecho que levantó aún más suspicacias. Sin embargo, cuando el mismo se reanudó, la tendencia cambió sorpresivamente para favorecer a Hernández y finalmente declararlo ganador de manera oficial, por aproximadamente 50.000 votos, el 17 de diciembre.

Ante este clima de incertidumbre que se prolongaría durante semanas, comenzaron espontáneamente las protestas por parte de miles de hondureños que consideraron que había habido fraude. Frente a ello, la respuesta oficial fue decretar la ley marcial, lo que dio origen a una escalada represiva. Mediante un comunicado, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvieron que al menos doce personas habían sido asesinadas, mientras que cientos de manifestantes fueron detenidos y sometidos a apremios ilegales en instalaciones militares.

Días más tarde, el gobierno de Estados Unidos reconoció a Juan Orlando Hernández como el vencedor de las controversiales elecciones. La indiferencia de la Casa Blanca ante los hechos de violencia debe interpretarse a la luz de que Donald Trump, como antes lo hiciera Obama, evalúa como positiva para sus propios intereses la continuidad de Hernández. Enmarcado en la lucha contra el narcotráfico, este país centroamericano posee una base militar que acoge a cientos de militares de Estados Unidos.

La lista es larga: corrupción ampliamente documentada, reformas inconstitucionales para aferrarse al poder, criminalización de protestas pacíficas, repetidas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, una de las tasas de criminalidad más altas del mundo y una actitud laxa ante el asesinato político, entre otros factores, convierten a JOH en uno de los mandatarios más cuestionados de la región. Sin duda, una de las claves para explicar su meteórico ascenso es el hecho de que los grandes empresarios hondureños lo aceptan “como uno de ellos”.

VIOLENCIA Y REPRESIÓN CONTRA DEFENSORES DE TIERRA Y TERRITORIO EN HONDURAS, DESDE EL GOLPE DE ESTADO HASTA LA ACTUALIDAD

Nick Middeldorp*

INTRODUCCIÓN

Recientemente, los modelos de gobernanza ambiental y de recursos hacen énfasis en la participación pública para lograr objetivos de equidad social y sostenibilidad ambiental (Ribot, 2002; Bryan, 2011); no obstante, en regímenes políticos autoritarios estos principios están siendo socavados a través de procesos de consulta ineficaces, la criminalización de la oposición y la represión violenta (Perreault, 2015). Este texto se enfoca en la conexión entre autoritarismo y represión contra defensores de la tierra y el territorio en Honduras, el país más letal del mundo para quienes trabajan por la defensa de la tierra y el medio ambiente, según datos de Global Witness (2017a).

Honduras, país marcado por graves conflictos por el acceso y el dominio de la tierra y los recursos naturales, combina varias características que explican la represión violenta contra las luchas socioambientales. Por un lado, existen varios movimientos campesinos, ambientalistas e indígenas, aquí conceptualizados como “ecopopulistas” (Leonard, 2007), o grupos que se oponen a proyectos ambientalmente destructivos, que reafirman sus subjetividades sobre el ambiente y que hacen un frente común con movimientos de justicia

* Neerlandés, magíster en Estudios de Desarrollo Internacional por la Wageningen Universidad, Países Bajos. Actualmente vive en Costa Rica y trabaja en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en un proyecto sobre justicia ambiental en Honduras y Guatemala.

social opuestos a los sistemas de dominación. Por otro lado se encuentran el sector empresarial y un Estado totalmente cooptado por sus intereses, que promueven una “gobernanza ambiental autoritaria” caracterizada por la intimidación y la criminalización de los defensores de la tierra y el territorio, el afianzamiento del modelo de desarrollo basado en la extracción de materias primas o extractivismo y formas coactivas de conservación (Peluso y Lund, 2011; Roa-García, 2017).

LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS LUCHAS SOCIOAMBIENTALES Y EL AUTORITARISMO EN HONDURAS

Después de la transición de una dictadura militar hacia un gobierno de carácter civil a inicios de la década de 1980, el país quedó bajo la influencia de los oficiales militares entrenados y financiados por Estados Unidos y contempló de cerca las guerras contrainsurgentes en los países vecinos. Internamente, personas de las cuales se sospechaba que pertenecían a la insurgencia comunista fueron encarceladas o desaparecidas bajo la Doctrina de Seguridad Nacional y la Ley Antiterrorista (Barahona, 2005). No obstante, las décadas de 1980 y 1990 mostraron visos de democratización y permitieron la formación de movimientos campesinos e indígenas (Barahona, 2005).

El escenario empezó a cambiar con la elección de Manuel Zelaya como presidente en 2005. Un liberal que giró hacia la izquierda, Zelaya se unió a la iniciativa ALBA¹, lo cual sacó a Honduras del patrón histórico de alineación con Estados Unidos. Su plan para organizar un referéndum sobre una reforma constitucional, que según sus oponentes permitiría la reelección (prohibida en la constitución hondureña), fue “la última gota” que las elites tradicionales estaban dispuestas a tolerar, lo que culminó en el golpe de Estado que expulsó a Zelaya del país.

El golpe de Estado de 2009 revirtió todo progreso democrático y convirtió a Honduras en un país letal para los defensores de los derechos humanos, particularmente para los defensores de la tierra y el territorio. El golpe, que dejó el poder político en manos del conservador Partido Nacional, fue acompañado por 58 asesinatos políticos y por el asesinato de 14 periodistas en el año 2009 (Yoder et al., 2013), mientras la impunidad incrementó y la tasa de homicidios aumentó de un 44,5 por cien mil en 2005, a 93,2 por cien mil en 2011 (UNODC, 2017). El aumento de homicidios se enfrentó con una política represiva de “cero tolerancia”, lo que provocó encarcelaciones masivas, militarización del trabajo policial (Gutiérrez, 2013) y un cierre del espacio cívico para las organizaciones de la sociedad civil (Van der Borgh, 2016).

1 ALBA: Alianza Bolivariana para las Américas.

El golpe de Estado generó una ruptura abrupta de los lazos que los movimientos indígenas, campesinos y ambientalistas estaban forjando con el Estado bajo la presidencia de Zelaya: las políticas que se pusieron en marcha después del golpe fueron profundamente contrarias a los objetivos perseguidos por estos movimientos. Acuerdos que se habían suscrito durante la administración de Zelaya para implementar una reforma agraria a favor de las cooperativas campesinas fueron anulados para favorecer a la elite terrateniente y sus plantaciones de palma africana. Se canceló una moratoria para nuevos proyectos mineros, se privatizó el mercado de energía eléctrica y se comenzaron a otorgar nuevas concesiones y licencias mineras e hidroeléctricas. Ingresos del sector minero se usaron específicamente para financiar el aparato represivo del Estado, incluyendo la Policía Militar, fundada en 2013 (Middeldorp et al., 2016). Esta política de comercialización de los recursos naturales del país tuvo como consecuencia una fuerte politización de las luchas ecopopulistas.

Lo que los movimientos sociales nombraron “la venta de Honduras” llegó acompañado por un aumento drástico en los asesinatos de defensores de la tierra y el territorio entre los años 2010 y 2016. Las dos olas de asesinatos a raíz del golpe tienen características e implicaciones diferentes.

Las primeras víctimas, en total 96 confirmadas, fueron campesinos que demandaban una reforma agraria y el reconocimiento de las tierras que poseían en cooperativa, especialmente en la región conocida como el Bajo Aguán (análisis de datos de Global Witness, 2017b). Para reclamar tierras, el movimiento campesino atrajo familias campesinas de todo el país (León, 2016), a lo que las elites terratenientes y el Estado hondureño respondieron con una operación militar-policial y un incremento en el uso de fuerzas de seguridad privadas y paramilitares. El conflicto dejó como víctimas a numerosos campesinos, dos presidentes del Movimiento Unido de Campesinos del Aguán (MUCA), un periodista, un abogado defensor de derechos humanos y un juez, así como cuatro guardias y un empleado de la Corporación Dinant, una empresa financiada por el Banco Mundial a la que popularmente se le ha responsabilizado de muchos asesinatos (Malkin, 2011; Human Rights Watch, 2014; Global Witness, 2017a). En el año 2013, la tasa de asesinatos disminuyó al parecer porque el movimiento campesino fue “sofocado”. No obstante, con catorce desalojos y cuatro asesinatos en 2017, la violencia continúa y los movimientos campesinos siguen reclamando tierras.

El segundo conjunto de víctimas, en total veinticinco confirmadas, lo componen activistas ambientalistas y comunitarios que se resistieron ante proyectos mineros e hidroeléctricos, entre ellos Berta

Cáceres, fundadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). El caso del conflicto por la represa Agua Zarca es emblemático en este contexto. El proyecto pertenece a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyo dueño es David Castillo, un exoficial de la inteligencia del ejército hondureño con enlaces con familias poderosas (De Jonghe y Willemsen, 2016; Lakhani, 2013). Construida la represa en territorio del pueblo indígena lenca, DESA intentó “socializar” el proyecto, pero no logró obtener el consentimiento de las comunidades afectadas. Sostenido a través de inversiones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Holandés de Desarrollo (FMO por sus siglas en inglés) y Finnfund, el proyecto tiene una historia de abusos, incluido el asesinato de un líder local por un soldado en 2013 durante una protesta. Los inversionistas minimizaron estos abusos durante años, hasta que el asesinato de Berta Cáceres generó una presión internacional que no pudieron ignorar. Los inversionistas intentaron legitimar y defender el proyecto a través de campañas mediáticas, entre otros recursos, pero el asesinato concitó apoyo para el COPINH: una alianza internacional de organizaciones no gubernamentales envió a miembros del Consejo, entre ellos a las hijas de Cáceres, a Europa. Se convocaron discursos, entrevistas, encuentros con parlamentarios y protestas fuera de las oficinas de los bancos y, finalmente, los inversionistas tuvieron que retirarse del proyecto (Lakhani, 2013).

La primera ola de asesinatos en los años posteriores al golpe de Estado tuvo una proyección limitada a nivel internacional. La segunda, que involucraba a activistas antiminería y antihidroeléctricas, se caracterizó por una movilización trans-escalar e internacional. En particular, el asesinato de Berta Cáceres tuvo un impacto duradero. Por un lado, los activistas comentaban: “si pueden matar a la activista más reconocida del país, ya nadie está seguro” y, por otro lado, el asesinato fue contraproducente: tuvo eco en los niveles nacional e internacional, reafirmó las subjetividades de las comunidades rurales sobre el ambiente, unificó a la oposición política antes de las elecciones de 2017, aumentó la presión internacional en favor de una ley de consulta previa y dejó los proyectos hidroeléctricos a nivel nacional sin financiamiento. En palabras de un abogado que representa al sector hidroeléctrico: “el problema más grande con la muerte de Berta es que los proyectos están sin financiamiento”.

Las elecciones de 2017 revelaron aún más el carácter autoritario del régimen, que perdió toda legitimidad para una gran parte de la población. Según mencionó un ciudadano: “el 26 de noviembre acentuó la crisis que estamos viviendo en el país. La gente se enojó aún más por el fraude electoral y ahora la única manera que tiene JOH para

mantener el poder es reprimir”. En efecto, la criminalización, facilitada por reformas recientes en la ley penal, ha elegido como blanco personas con un “doble perfil”, como opositores políticos y defensores de la tierra y el territorio, frecuentemente pertenecientes a comunidades indígenas y campesinas que ya tienen una historia de “defensa del territorio” frente a los proyectos de extractivismo fomentados por el Estado desde el golpe de 2009.

Estas personas enfrentan acusaciones de usurpación de tierras o aguas o de “asociación ilícita” (cargo que se usaba en el pasado solamente para combatir pandillas). La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), una federación que defiende los derechos del pueblo garífuna, está enfrentando casi quinientos juicios, mientras se están otorgando tierras garífunas a proyectos hidroeléctricos, mineros, de palma y turísticos, a pesar de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2015 en contra del Estado hondureño por no proteger las tierras garífunas (Corte IDH, 2015). Se están reportando desalojos para impulsar los proyectos de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) e incursiones militares en territorios indígenas, y algunas poblaciones han sido despojadas por la violencia que acompaña la comercialización de tierras y recursos naturales.

CONCLUSIONES

El caso de Berta Cáceres demuestra que el asesinato de activistas prominentes puede ser contraproducente para los intereses extractivos. Los campesinos del Aguán no tenían un testaferrero reconocido y carismático y su lucha no era atractiva para las organizaciones internacionales. El silencio internacional frente a un conflicto extremadamente violento en el cual perdieron la vida decenas de personas —asesinatos que permanecen en la impunidad—, y uno de cuyos actores cuenta con financiamiento de instancias internacionales, requiere de reflexión y más investigación. La situación apunta hacia una falta de *accountability* por parte de los actores más grandes de la economía global contemporánea.

La “gobernanza de recursos” violenta y letal de Honduras se ha visto agravada por la debilidad de instituciones judiciales internacionales como la Corte IDH y por la imposibilidad de responsabilizar legalmente a las corporaciones transnacionales por abusos a derechos humanos, una situación que sostiene la impunidad en torno a los asesinatos de defensores de la tierra y el territorio. Terminar con estos patrones de violencia e impunidad requiere de transformaciones políticas y jurídicas a todos los niveles.

BIBLIOGRAFÍA

- Barahona, M. 2005 *Honduras en el siglo XX: una síntesis histórica* (Tegucigalpa: Guaymuras).
- Bryan, J. 2011 “Walking the Line: Participatory Mapping, Indigenous Rights, and Neoliberalism” en *Geoforum* (Oxford: Elsevier) Vol. 42, N° 1.
- Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) 2015 *Caso comunidad garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras. Sentencia de 8 de octubre de 2015*, en <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf > acceso 27 de marzo de 2018.
- De Jonghe, A. y Willemsen, J. 2016 *Protest and Violence over the Agua Zarca Dam. Report on the Agua Zarca Dam, Rio Blanco, Honduras February 2016*, en <https://www.banktrack.org/download/report_agua_zarca_february_2016_pdf/report_agua_zarca_february_2016.pdf > acceso 27 de octubre de 2017.
- Global Witness 2017a. *Defenders of the Earth: Global Killings of Land and Environmental Defenders in 2016* (Londres: Global Witness).
- Global Witness 2017b *Honduras: The Deadliest Place to Defend the Planet* (Londres: Global Witness).
- Gutiérrez Rivera, L. 2013 *Territories of Violence: State, Marginal Youth, and Public Security in Honduras* (Nueva York: Palgrave Macmillan).
- Human Rights Watch 2014 “*There Are No Investigations Here*”. *Impunity for Killings and Other Abuses in Bajo Aguán, Honduras* (Nueva York: Human Rights Watch).
- Lakhani, N. 2013 “Honduras Dam Project Shadowed by Violence” en *Al Jazeera*, 24 de diciembre, en <<https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/honduras-dam-project-shadowed-violence-201312211490337166.html>> acceso 27 de abril de 2018
- Leonard, L. 2011 “Eco-populism” en Wehr, K. (ed.). *Green Culture: An A-to-Z Guide*. (Thousand Oaks, California: Sage).
- Malkin, E. 2011 “In Honduras, Land Struggles Highlight Post-Coup Polarization” en *The New York Times*, 15 de septiembre.
- Middeldorp, N., Morales, C., y Van Der Haar, G. 2016 “Social Mobilisation and Violence at the Mining Frontier: The Case of Honduras” en *Journal of Extractive Industries and Society* Vol. 3, N° 4.
- Peluso, N.L., y Lund, C. 2011 “New Frontiers of Land Control: Introduction” en *Journal of Peasant Studies* Vol. 38, N° 4.
- Perreault, T. 2015 “Performing Participation: Mining, Power, and the Limits of Public Consultation in Bolivia” en *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology* Vol. 20, N° 3.

- Ribot, J.C. 2002 *Democratic Decentralization of Natural Resources: Institutionalizing Popular Participation* (Washington: World Resources Institute).
- Roa-García, M.C. 2017 “Environmental Democratization and Water Justice in Extractive Frontiers of Colombia” en *Geoforum* (Oxford: Elsevier) N° 85.
- UNODC (UN Office on Drugs and Crimes) 2017 “Intentional Homicides (per 100,000 people)”, en *Intentional Homicides Statistics Dataset*, en <<https://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5?locations=HN>> acceso 27 de octubre de 2017.
- Van der Borgh, G.J.C. 2016 “EU Support for Justice and Security Sector Reform in Honduras and Guatemala”. *Working paper*, Centre for Conflict Studies, Utrecht University, en <<https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/345698>> acceso 31 de marzo de 2018.
- Yoder, E.M., Nieto García, L.C., Perla Jiménez, M.A., Pérez Esquivel, A., Cortiñas, N., Scott, C., Houtart, F., Aguilar, F.J., Umaña, H., y Milla, F. 2013 *Report of the Commission of Truth . The Voice of Greatest Authority Is That of the Victims* (Tegucigalpa: Commission of Truth), en <https://ccrjustice.org/sites/default/files/attach/2015/01/TrueCommission_Report_English_04_13.pdf> acceso 27 de octubre de 2017.

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE HONDURAS?

EL CASO DEL MOVIMIENTO ANTIEXTRACTIVISTA DESDE SUS ACTORES

Camila Ponce Lara*

INTRODUCCIÓN: MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL CASO DE HONDURAS

América Latina ha sido el escenario de importantes movilizaciones a partir del ciclo sociopolítico que se inauguró en 2011 con las ocupaciones de Acampa Sampa en Brasil, las movilizaciones estudiantiles en Chile, las protestas de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) en Colombia, el movimiento #YoSoy132 y más tarde los acontecimientos de Ayotzina-pa en México, por nombrar algunos ejemplos. En el caso particular de Centroamérica, las movilizaciones han emergido desde distintos lugares y organizaciones políticas, a través de movimientos de estudiantes, feministas y de género, ecologistas o movimientos indígenas.¹

Sin embargo, desde 2017 a la fecha en Honduras las movilizaciones han respondido a la crisis de legitimidad de la democracia, en

* Doctora en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (EHESS) e investigadora en el Centro de Estudios en Juventud (CEJU) de la Universidad Católica Silva Henríquez de Chile. Sus principales áreas de investigación son los movimientos sociales, las juventudes, la sociología política e internet. Correo electrónico: camila.poncelara@gmail.com

1 Esta investigación fue realizada en el marco de la estancia postdoctoral “Pueblos en Movimiento” de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y la Universidad de Costa Rica. También se enmarca en el proyecto Fondecyt Iniciación 11170930, Santiago de Chile.

especial a la crisis del proceso electoral que llevó a la presidencia a Juan Orlando Hernández. A partir de entonces, los hondureños y hondureñas han salido a las calles para protestar contra el fraude electoral y para defender la democracia en su país. Lamentablemente, la respuesta del gobierno fue la represión y la violencia hacia los manifestantes, lo que ocasionó varios asesinatos durante las movilizaciones.

Honduras representa un caso paradigmático en la región por distintos factores. Uno de ellos es la inestabilidad de su sistema político, que no es un componente nuevo, dado que en 2009 el presidente José Manuel Zelaya fue destituido de su cargo y expulsado del país. Además, las configuraciones de Honduras permiten entender la articulación de distintos movimientos sociales y de diferentes demandas de líderes juveniles no solo en el marco de los movimientos estudiantiles, sino también de los movimientos contra el modelo extractivista, del feminista y del indigenista. Este es el tema del que trata este artículo, donde se plantea la hipótesis de que el movimiento antiextractivista en Honduras está más allá de otros movimientos sociales que emergen a nivel global.

En relación con la literatura referente al tema, en la fase en que nos encontramos actualmente, más allá de nuevos y viejos movimientos sociales (Touraine, 1987), distintos autores como Castells (2012) dan cuenta de las particularidades de los movimientos de plaza, como las manifestaciones para salvar el Parque Taksim Gezi en Turquía, el movimiento del 15M en España, las movilizaciones en la plaza Syntagma en Grecia o el movimiento de NuitDebout en Francia, por ejemplo. Estos movimientos presentan elementos comunes como la horizontalidad, la ausencia de organizaciones políticas o partidos políticos y la inexistencia o invisibilidad de líderes (Castells, 2012; Pleyers, 2017). A pesar de esto, en varios movimientos emergen importantes dirigentes que han contribuido a hacer eco de las demandas, a generar mayor visibilidad de un determinado movimiento o a convocar un mayor número de activistas gracias a las redes sociales (Ponce, 2017).

Estos líderes no necesariamente encauzan un proceso político en particular ni son la cara más visible de un movimiento, pero sí movilizan a otros sujetos para que participen en espacios de experiencia importantes para comprometerse y devenir activistas. Se trata de una concepción del liderazgo distinta a la de Weber (1993), para quien el liderazgo carismático debiera atraer a las masas, como lo hicieran Fidel Castro, el Che Guevara o Hugo Chávez en sus determinados contextos y países.

En este artículo se busca analizar las particularidades del movimiento antiextractivista a través de la voz de sus líderes jóvenes

utilizando el caso particular de Bertha Zúñiga Cáceres², quien además de actriz es una activista lenca del movimiento antiextractivista de Honduras contra la privatización de los ríos y de los proyectos hidroeléctricos. También es coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización fundada y liderada por su madre, la activista Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016 luego de haber recibido continuas amenazas contra su vida. Berta Cáceres, además, fue galardonada con el premio Medioambiental Goldman, denominado el Nobel Verde, y con el premio Shalom de Alemania.

LIDERAZGO, SUBJETIVIDADES Y LA MADRE TIERRA

El caso de Bertha (hija) es paradigmático porque su trayectoria se ha vinculado políticamente con la de su madre, en primera medida, y también con la de su abuela. Además, se crió cerca del COPINH, por lo que comenzó su formación política durante su infancia. Tal como señaló en la entrevista realizada en septiembre de 2017:

Así que esa fue nuestra mayor escuela de formación, donde conocimos la situación de las comunidades del pueblo Lenca, donde vimos toda la experiencia de un movimiento de carácter indígena. Se cuestionaban fuertemente las raíces del capitalismo, el patriarcado, el racismo, y además llegó a constituirse como un espacio organizativo importante también para Mesoamérica. Las luchas de base, del pensamiento, la construcción de otra forma de vivir, eso ha sido muy importante. Además, la cercanía, tener la oportunidad de conocer a una lideresa, de ver sobre todo la coherencia, de poder caminar no con el anhelo de convertirse en una gran personalidad, sino con el anhelo de poder caminar coherentemente en todos esos principios ha sido bien valioso e importante para nosotros (Bertha Zúñiga, en Ponce, 2018: 254).

Este relato permite entender la profundidad del vínculo entre las comunidades del pueblo lenca y esta líder. El movimiento antiextractivista está fuertemente politizado y es crítico hacia el modelo neoliberal, el patriarcado y el racismo, lo que se revela como características muy presentes en la sociedad hondureña. Asimismo, el modelo de liderazgo de su madre fue un ejemplo que Bertha Zúñiga enunció de manera constante en su relato. Ella se ha posicionado como una líder distinta, una líder que sigue los pasos de su madre, pero que además incorpora elementos nuevos desde su propia experiencia como sujeto y desde su

2 La entrevista a Bertha Zúñiga se realizó en septiembre de 2017 en San Pedro, Costa Rica, en el marco del Foro de Reflexión sobre los Hechos de Violencia en Centroamérica organizado por el Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM) y la Universidad de Costa Rica.

propio proceso de construcción, como sus estudios en Cuba y México. Este relato da cuenta de algunos elementos relacionados con su construcción de subjetividades:

Yo creo que la ventaja que yo tengo es [que] esa apertura a un liderazgo de mujer lo construyó mi mami [...] Aparte por ser una mujer joven, ellos dicen “esta niña”, es normal también, nosotros reconocemos que no somos ella y que no vamos a suplantar esa figura, pero qué bueno. Eso siempre suscita, sobre todo al enfrentar a los gobiernos, a las empresas, eso cambia la perspectiva de los ataques, las difamaciones, de todo lo que está alrededor para sembrar el odio, para aclimatar la ejecución de los crímenes (Bertha Zúñiga, en Ponce, 2018: 257).

A pesar del importante papel que desempeña esta joven líder, es posible deducir de sus palabras cómo se normaliza la invisibilización de otros actores en relación con su rol de liderazgo dentro del movimiento, y en especial destaca la referencia a su madre como una líder carismática a quien invoca constantemente. A pesar de ello, para las organizaciones internacionales Bertha es una importante figura del movimiento antiextractivista en Honduras, en el que, llevando el legado de su madre, trabaja por la búsqueda de justicia y aportando otras dimensiones a la lucha.

Si bien el trabajo destinado a lograr justicia y al esclarecimiento de la muerte de Berta Cáceres marcan un antes y un después en el COPINH, los territorios representan el eje central de las demandas del movimiento y de Bertha Zúñiga. Así es como ella lo señaló en la entrevista:

La primera lucha y la más importante es la defensa de los territorios. Investigando dónde están los proyectos extractivos, organizando comunidades para enfrentarlos, haciendo formación, denunciando a las empresas, manteniendo las escuelitas de formación política y las radios comunitarias, organizando los consejos indígenas que son como la célula de la figura organizativa del COPINH, los consejos indígenas comunitarios, es movilizándose permanentemente, articulándose con los espacios. Por ejemplo, ahorita hay una denuncia fuerte contra la reelección y contra la dictadura porque se ha impuesto una reelección ilegal en nuestro país, entonces nosotros estamos ahí presentes. También con la lucha de los y las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma, que tienen muchos meses en huelga y nosotros los hemos respaldado. Apoyando y acompañando otros procesos de luchas territoriales que ya no son del pueblo lenca, sino de otros pueblos como los tolupanes y otras luchas así. También proponiendo la transformación de Honduras desde un plano distinto al de las elecciones. Ahorita nosotros vamos a elecciones presidenciales, también hay un clima de bastante violencia, pero es plantear eso, que el COPINH ya trae un proceso anterior, de la refundación de Honduras. Se dice que es transformar no solo desde un presidente, sino también cambiar la Constitución, que es

promover un montón de cambios en el país. Ahí estamos acompañando también esos procesos (Bertha Zúñiga, en Ponce, 2018: 257).

Estas declaraciones permiten dar cuenta de distintos elementos. En primer lugar, el movimiento ya no solo se centra en la lucha por el territorio, sino que también es un agente que investiga y está atento a cualquier tipo de negociación, venta o realización de megaproyectos extractivos en el país con capitales extranjeros. En segundo lugar, se trata de un movimiento que no está aislado, puesto que participan muchos actores diversos, como indígenas y estudiantes. En tercer lugar, las palabras de Bertha permiten visualizar el clima de Honduras antes de las elecciones presidenciales que reconfiguraron el escenario político, de las cuales hablamos al principio del artículo y que articulan este libro. Por lo tanto, se observa que la organización del COPINH busca desempeñar un papel de mayor incidencia dentro de la política nacional y disputar espacios a los partidos.

Se evidencia, pues, que también puede hacerse política desde otros espacios y no únicamente desde la política institucionalizada, los partidos políticos y las urnas. Bertha lo clarifica muy bien:

Bueno, yo creo que caminar coherentemente con esos principios en todos los momentos de nuestra vida es lo que intentamos hacer de manera permanente. Uno de los espacios de gran importancia son nuestras radios comunitarias, donde participamos diariamente [...] en un programa que se escucha en muchas comunidades. También el fortalecer la participación interna de las mujeres dentro del COPINH, que todavía es un desafío, pero es algo que se lucha permanentemente en las comunidades y es una apuesta. Está bien presente en el día a día, también las voces de las mujeres de la espiritualidad. No olvidar estos elementos que están bien presentes cotidianamente (Bertha Zúñiga, en Ponce, 2018: 258).

A partir de estas palabras es posible interpretar que la subjetividad política de esta activista y líder se construye cotidianamente en la interacción con los distintos sujetos que integran la organización y las comunidades. Ella se identifica como indígena del pueblo lenca, como feminista y como activista. Las mujeres constituyen un grupo clave, que es parte del movimiento y que busca luchar contra el patriarcado y contra la violencia en un país con altos indicadores de violencia contra las mujeres.

Es importante destacar la relevancia de la comunicación a través de distintos medios, como la radio o las redes sociales, por los que se difunden las demandas y acciones que llevan a cabo, además de que estos recursos han permitido que los activistas se posicionen como voces relevantes en Honduras.

Por otra parte, este movimiento busca conectarse fuertemente con las raíces, con los pueblos originarios y con la espiritualidad indígena. Así lo señaló esta líder:

Nosotros decimos que sostener la vida de las comunidades ya es un desafío y es una alternativa de vida. Pero, bueno, entre los encuentros de los campesinos se intercambia sobre las distintas espiritualidades, las distintas formas que los pueblos indígenas caminan y se piensan. Se hacen intercambios de gente que visita nuestros territorios. Está el tema del asesinato, pero nosotros también visitamos mucho otros territorios para aprender en el tema de pensar la seguridad, en las defensas comunitarias que hay y que se han construido en otros territorios. Eso también lo estamos pensando para implementarlo en el contexto (Bertha Zúñiga, en Ponce, 2018: 258).

En su relato, Bertha revela que este movimiento trae consigo elementos especiales en relación con los movimientos sociales tradicionales que se observan en el resto del globo, enmarcados en ciertas demandas específicas. De sus palabras se desprende que se produce un retorno a la espiritualidad ligada a la tierra y a las raíces. Es un movimiento que busca que los hondureños y hondureñas se conecten con su identidad originaria y se resignifiquen como sujetos, además de que persigue la interacción de distintos actores con distintas demandas, como se describió a lo largo del artículo.

CONCLUSIONES

A modo de conclusión, esta investigación permite entender que los movimientos sociales en Honduras presentan dimensiones particulares por el contexto específico y que en general van más allá de los que se desarrollan en otros países por tres elementos fundamentales: la vinculación entre diversos actores, la conexión con los orígenes y la visibilidad de sus liderazgos. De esta manera respondemos a la hipótesis planteada en el comienzo del artículo.

En primer lugar, la vinculación con otros actores está presente a lo largo del texto cuando Bertha señala cómo se articulan mujeres, estudiantes y lencas para luchar contra el modelo neoliberal y el extractivismo; en este sentido, el movimiento permite generar diálogo entre distintos actores y disputar espacios. En segundo lugar, la conexión con los orígenes lencas y con la tierra posibilita que en el país, donde los indígenas han sido históricamente discriminados y marginados, se promueva un entendimiento distinto. La afirmación de ambas Berthas —madre e hija— como lencas, lo que contribuye a dignificar a los pueblos originarios, permite que otros ciudadanos se identifiquen con el movimiento.

Por último, la visibilidad de los liderazgos está enmarcada en el caso de Berta Cáceres, quien es reconocida en el mundo entero y se

vinculó con temas como la tierra, las raíces y los indígenas, características que difícilmente se encuentran en otros líderes jóvenes latinoamericanos de su talla. Desde otra perspectiva, en Bertha Zúñiga convergen elementos que la constituyen como sujeto y que la asemejan a líderes alter-activistas —o que realizan un activismo otro, distinto— que pueden verse en otros espacios y movimientos del mundo. Estas semejanzas refieren a la necesidad de generar un cambio de conciencia para producir transformaciones a nivel social. Estos nuevos activistas y líderes se encuentran mucho más conectados con la espiritualidad y con sus orígenes que otros que parecen más unidimensionales, tal como puede leerse en investigaciones precedentes sobre líderes (Vásquez, 2012). Estos actores ahora están presentes en distintos movimientos, no solo en aquellos que los hacen más visibles como el movimiento indigenista, el feminista o el estudiantil. Son líderes que parecen tener mayores herramientas y capacidades para enfrentar contextos críticos y difíciles, como es el caso de Honduras.

BIBLIOGRAFÍA

- Castells, Manuel 2012 *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age* (Cambridge: Polity Press).
- Pleyers, Geoffrey 2017 “Los movimientos de las plazas en el decenio 2010. Más allá de los ‘nuevos movimientos sociales’” en *Movimientos. Revista Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales* (Ciudad de México: Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales) N° 1.
- Ponce, Camila 2017 “Internet, nuevas formas de acción colectiva y subjetividades políticas: movilizaciones estudiantiles del 2011” en *Persona y Sociedad* (Chile) Vol. XXXI, N° 2.
- Ponce, Camila 2018 “Redefiniendo las luchas en Centroamérica contra el neoliberalismo. Entrevista a Bertha Zúñiga Cáceres a propósito del movimiento anti extractivista en Honduras” en *Revista Izquierdas* (Chile) N° 40.
- Touraine, Alain 1987 *El regreso del actor* (Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires).
- Vásquez, Melina 2012 “Liderazgo y compromiso político desde una mirada diacrónica: una aproximación a tres generaciones de jóvenes militantes en movimientos de desocupados” en *Utopía y Praxis Latinoamericana* (Venezuela) Año 17, N° 57.
- Weber, Max 1993 *Economía y sociedad* (Madrid: Fondo de Cultura Económica).

ESTADOS UNIDOS Y LAS ELECCIONES EN HONDURAS: **ESPIRAL DE DEPENDENCIA Y SUBORDINACIÓN**

Silvina M. Romano*

El fraude declarado en las elecciones presidenciales de 2017 y la impunidad con la que el gobierno estadounidense bajo la administración de Donald Trump resolvió otorgar legalidad al reelegido Juan Orlando Hernández (JOH) generó un gran rechazo no solo en Honduras, sino en organismos regionales y en la prensa hegemónica internacional. Desde una perspectiva crítica, entre los diversos factores que podrían explicar esta postura destacan: el lugar estratégico de Honduras en la geopolítica estadounidense y el rol de las fuerzas de seguridad en el país del norte, así como el papel decisivo del gobierno y del sector privado estadounidense en la política hondureña, lo que muestra la reproducción y consolidación de relaciones asimétricas y dependientes.

* Investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Argentina. Doctora en Ciencia Política por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. Es miembro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) y forma parte del Grupo de Trabajo de Estudios sobre Estados Unidos y del Grupo de Trabajo de Estudios sobre Centroamérica, ambos de CLACSO. Se especializa en relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante la Guerra Fría y en la actualidad.

HONDURAS Y LA MILITARIZACIÓN PERMANENTE

Centroamérica y el Caribe fueron declarados tempranamente como espacios geopolíticos clave para el gobierno estadounidense de cara al control de las vías de comunicación, los recursos estratégicos, los mercados, etc. Entre los antecedentes que denotan las relaciones asimétricas y dependientes entre Honduras y Estados Unidos destacan: la condición de “república bananera” en el siglo XX, como lugar de negocios para la United Fruit Company (McCann, 1976); el país fue considerado hogar de los mercenarios que invadieron Guatemala para derrocar al gobierno democrático de Jacobo Árbenz en los años cincuenta, con apoyo expreso del Departamento de Estado y la CIA (Cullather, 2002); y por ser el territorio que albergó a la Contra financiada por Estados Unidos y sus escuadrones de la muerte a inicios de los años ochenta para acabar con el sandinismo y la insurgencia en Centroamérica (Marcetic, 2016).

Esta enumeración superficial e incompleta pone de manifiesto de inmediato la importancia geopolítica y geoeconómica de Honduras, y en particular la enérgica presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el país. No es un dato menor que entre los factores que confluyeron para que se llevara a cabo el golpe a Manuel Zelaya se encuentre la propuesta de transformar la base militar estadounidense situada en Palmerola en un aeropuerto comercial. A esto se suma una creciente inclinación de Zelaya hacia una alianza con Petrocaribe y con la Alianza Bolivariana de las Américas y al impulso de ciertas medidas que lo acercaban a los gobiernos progresistas en auge, alejándolo de proyectos como el Plan Puebla Panamá (luego refundado en Proyecto Mesoamérica y hoy en Alianza para la Prosperidad), pautados desde el gobierno estadounidense (Flax, Romano y Vollenweider, 2016).

A partir del derrocamiento de Zelaya aumentó exponencialmente la militarización del país en el marco de la guerra antinarcóticos extendida como un Plan Colombia para Honduras y Centroamérica (Kruijt, 2011: 34). Esto se materializó en el marco de la Iniciativa para la Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI por sus siglas en inglés), como programa derivado de la Iniciativa Mérida. Los programas de seguridad se articularon a partir de 2015 con la Alianza para la Prosperidad, orientada a reforzar la cooperación en seguridad, infraestructura y desarrollo —destacando el objetivo de detener la migración hacia Estados Unidos (Olson, 2015).

Entre los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras es uno de los que ha planteado una solución al crimen organizado mediante la “mano dura” desde dentro, acompañada por un aumento en presupuestos de asistencia militar provista desde Estados Unidos en entrenamiento, armas, etc. para las fuerzas armadas y la

policía (Meyer y Ribando, 2014). Esta asistencia aumentó de 7,8 millones de dólares en 2009, a once millones en 2011, para alcanzar los casi catorce millones de dólares en 2014 (Romano, 2017).

Un ejemplo es la conformación de la Tropa de Inteligencia de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), como parte del programa de seguridad del gobierno de JOH, para luchar contra la violencia urbana y el crimen organizado —fuerza entrenada por y en permanente contacto con agencias y personal de seguridad de Estados Unidos. Los TIGRES fueron utilizados por el gobierno para acosar a grupos y miembros de la oposición, además de haberse comprobado que “roban” a los cárteles a los que supuestamente están combatiendo (Fang y Mackey, 2017). Asimismo, en 2015 y 2016, diferentes agencias y fuerzas de seguridad de Estados Unidos (la DEA, el FBI, el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs del Departamento de Estado e incluso la policía de Chicago) impartieron cursos de entrenamiento para las fuerzas de seguridad de Honduras, incluidos grupos de operaciones especiales (Fang y Mackey, 2017).

El escenario resultante es una “réplica” del proceso de militarización, violencia y quiebre del tejido social generado por el Plan Colombia. En la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad de Centroamérica celebrada en junio de 2017, los representantes del gobierno de Trump ratificaron la pertinencia de un “Plan Colombia” para Centroamérica (Semana, 2017), lo que desatiende los análisis y las recomendaciones realizadas por organismos internacionales y expertos, que advierten sobre los resultados negativos de ese programa antinarcóticos (Isacson, 2013; Loveman, 2006).

A lo anterior se suman las denuncias que ligan a las fuerzas de seguridad “antinarcóticos” con actos de violación a las libertades políticas y los derechos humanos, entre los que destaca el asesinato de Berta Cáceres. Pero este no fue un caso aislado. Diversos informes de los últimos años dan cuenta de la persecución política perpetrada por el Estado, de asesinatos selectivos y de una creciente represión contra los derechos de expresión, reunión y asociación (Weisbrot, 2013). Las críticas han sido replicadas también en el Congreso estadounidense, donde se ha señalado el impacto negativo de esta política y se ha sugerido que se recorte la asistencia militar a Honduras (Cave y Thompson, 2012).

ESTADOS UNIDOS EN LA POLÍTICA HONDUREÑA: LA CORRUPCIÓN

La lucha contra la corrupción forma parte de los objetivos de la Alianza para la Prosperidad, como proyecto impulsado y financiado por Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y para promover la integración regional y políticas de desarrollo que detengan el flujo migratorio. En 2016, el secretario general de la OEA

y JOH firmaron un convenio mediante el que se creó la misión para combatir la corrupción y la impunidad en el país centroamericano: la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) (Lakhani, 2016).

Sin embargo, en los últimos años trascendió información que da cuenta de que el partido de JOH, el Partido Nacional, se caracteriza por prácticas corruptas. Un ejemplo es el robo de millones de dólares al sistema de seguridad social hondureño para financiar la campaña presidencial, que incluye a lobistas estadounidenses: desde abogados cercanos al actual gobierno, hasta grupos vinculados a la prensa para fomentar una imagen positiva de JOH en Estados Unidos (Fang y Mackey, 2017).

A pesar de este tipo de evidencias, especialistas del Fondo Monetario Internacional señalan los “avances” en el control de la corrupción en Honduras en los últimos años gracias a “acciones en la policía nacional, la administración de la seguridad y en materia impositiva” (Lipton, Werner y Gonçalves, 2017). En esta misma línea, inmediatamente después de las elecciones presidenciales de 2017, el gobierno de Estados Unidos señaló que Honduras estaba demostrando avances en derechos humanos —legitimando así a Hernández en su cargo y justificando los vínculos comerciales, financieros, políticos y de seguridad (Kinosian, 2017).

La decisión debe comprenderse como apoyo a una derecha hondureña y a un gobierno que ha tendido a favorecer determinados intereses del sector público-privado estadounidense asociados a los negocios de las elites locales. Durante el gobierno de JOH, Honduras se fue consolidando como plataforma de exportación de materias primas y de fuerza de trabajo barata, y como ensanchamiento del sector de servicios, con amplia presencia del sector privado estadounidense. Un ejemplo es la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) como parte del impulso al turismo, que permiten, entre otras cuestiones, la expropiación de tierras. Estos “esfuerzos” se cruzan con (y conducen a) un incremento de la violencia que no favorece al turismo, pero existen consultoras como la estadounidense Mckense que manufacturan propaganda en la que destacan los “grandes logros” en el combate a la violencia (Romano y Calderón, 2017).

REFLEXIONES FINALES

Tanto los programas antinarcóticos como los proyectos económicos del gobierno de JOH muestran intereses compartidos con una fracción del gobierno y con el sector privado estadounidense en una dinámica de creciente subordinación respecto a lineamientos para la

acción y el financiamiento. Esta relación penetra en el quehacer de la oposición, que se ve interpelada también a buscar “aprobación” en Estados Unidos: Salvador Nasralla tuvo que viajar a Washington para denunciar el fraude. Esto demuestra que solo desde Estados Unidos podía revertirse (o no) el resultado de los comicios, lo que demuestra unas relaciones dependientes y asimétricas que permean incluso a los sectores que cuestionan esta dinámica.

BIBLIOGRAFÍA

- Cave, D., y Thompson, G. 2012 “U.S. Rethinks a Drug War After Deaths in Honduras” en *The New York Times* (Nueva York) N° 13, noviembre, en <http://www.nytimes.com/2012/10/13/world/americas/in-honduras-deaths-make-us-rethink-drug-war.html?ref=global-home&_r=0> acceso 20 de febrero de 2018.
- Cullather, N. 2002 *PBSUCCESS. La operación encubierta de la CIA en Guatemala, 1952-1954*. Serie de Autores Invitados N° 6 (Guatemala: AVANCSO).
- Fang, L., y Mackey, D. 2017 “The President of Honduras is Deploying US Trained Forces against Election Protesters” en *The Intercept*, 3 de diciembre, en <<https://theintercept.com/2017/12/03/the-president-of-honduras-is-deploying-u-s-trained-forces-against-election-protesters/>> acceso 10 de enero de 2018.
- Flax, S., Romano, S., y Vollenweider, C. 2016 Golpes siglo XXI: nuevas estrategias para viejos propósitos. Los casos de Honduras, Paraguay Brasil” en *CELAG* (Ecuador) N° 3, julio, en <<http://www.celag.org/golpes-siglo-xxi-nuevas-estrategias-para-viejos-propositos-los-casos-de-honduras-paraguay-brasil-por-sabrina-flax-silvina-romano-y-camila-vollenweider/>> acceso 15 de enero de 2018.
- Isacson, A. 2013 “Hora de escuchar: tendencias en Asistencia de Seguridad de los EEUU hacia América Latina y el Caribe” (Washington: WOLA, Center for International Policy, Latin America Working Group Education Fund).
- Kinosian, S. 2017 “US Recognizes Re-election of Honduras President Despite Fraud Allegations” en *The Guardian* (Londres), 22 de diciembre, en <<https://www.theguardian.com/world/2017/dec/22/us-recognizes-re-election-of-honduras-president-despite-calls-for-a-new-vote>> acceso 4 de enero de 2018.
- Kruijt, D. 2011 *Drogas, democracia y seguridad. El impacto del crimen organizado en el sistema político en América Latina* (La Haya: Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria).

- Lakhani, N. 2016 “Honduras President Announces International Body to Tackle Corruption” en *The Guardian* (Londres), 19 de enero, en <http://www.theguardian.com/world/2016/jan/19/honduras-juan-orlando-hernandez-oas-international-corruption-maccih?CMP=share_btn_tw> acceso 15 de enero de 2018.
- Lipton, D., Werner, A., y Gonçalves, C. 2017 “Corruption in Latin America: Taking Stock” en *IMF Blog*, 21 de septiembre, en <<https://blogs.imf.org/2017/09/21/corruption-in-latin-america-taking-stock/>> acceso 20 de noviembre de 2017.
- Loveman, B. (ed.) 2006 *Addicted to Failure. US Security Polices in Latin America and the Andean Region* (Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield).
- Marcetic, B. 2016 “Negroponte’s Crimes” en *The Jacobin*, 19 de agosto, en <<https://www.jacobinmag.com/2016/08/negroponte-honduras-nicaragua-contras-reagan-clinton/>> acceso 19 de enero de 2018.
- McCann, T. 1976 *An American Company. The Tragedy of the United Fruit* (Nueva York: Random House).
- Meyer, P., y Ribando Seelke, C. 2014 *Central America Regional Security Initiative: Background and policy issues for Congress* (Washington: Congressional Research Service).
- Olson, E. (comp.) 2015 *Crime and Violence in Central America Northern Triangle*, (Washington: Woodrow Wilson Center Reports on the Americas, Woodrow Wilson Center).
- Romano, S. 2017 “La ‘Nueva Alianza’ de Obama para América Latina: poder blando y poder duro en acción” en *Revista Universidad de La Habana* (La Habana) N° 283, enero-junio.
- Romano, S., y Calderón, J. 2017 “EE.UU. y elecciones en Honduras: silencios e impunidad de ayer y hoy” en CELAG, 10 de diciembre, en <<http://www.celag.org/ee-uu-elecciones-honduras-silencios-e-impunidad-ayer-hoy/>> acceso 20 de enero de 2018.
- Semana* 2017 “Estados Unidos quiere replicar el ‘Plan Colombia’ en Centroamérica”, 15 de junio, en <<http://www.semana.com/mundo/articulo/estados-unidos-quiere-replicar-el-plan-colombia-en-centroamerica/528720>> acceso 20 de enero de 2018.
- Weisbrot, M. 2013 “Will Congress Act to Stop US Support for Honduras’ Death Squad Regime?” en *The Guardian* (Londres) N° 30, marzo, en <<https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/mar/30/congress-us-support-honduras-death-squad-regime>> acceso 5 de febrero de 2018.

HONDURAS: DEL GOLPE DE ESTADO DE 2009 AL GOLPE ELECTORAL DE 2017

Eugenio Sosa*

Entre el 26 y el 27 de noviembre de 2017, durante las elecciones generales para elegir al presidente de la República, diputados del Congreso Nacional y alcaldes municipales, se produjo un golpe electoral, a ocho años del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 mediante el cual se derrocó al presidente José Manuel Zelaya Rosales. Con el golpe electoral de noviembre de 2017 se impuso la reelección inconstitucional del presidente Juan Orlando Hernández (JOH), quien se promovió como candidato a través de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una institución controlada políticamente por él. La reelección se impuso sin pasar por ningún proceso político en el Congreso Nacional y sin ningún tipo de consulta popular, como el plebiscito.

Durante las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral, otra institución también controlada por el presidente Hernández, retrasó la

* Licenciado en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), maestro en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO-Guatemala) y con estudios de doctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB-Ecuador). Actualmente es profesor del departamento de Sociología y coordinador de la Maestría en Sociología de la UNAH, investigador asociado al Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) y al Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), y miembro del Consejo de Redacción de la revista Envío-Honduras.

primera entrega de resultados hasta las 2:00 am del 27 de noviembre, el día siguiente de las elecciones y a diez horas de haberse cerrado las urnas, porque la tendencia no estaba favoreciendo al candidato oficialista. La tendencia en ese momento, con el 57% (10.367 mesas electorales receptoras) de las actas digitalizadas, favorecía al candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, conformada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Salvador Nasralla, con 855.847 votos, que representaban el 45,17% mientras Juan Orlando Hernández contaba con 761.872 votos, que representaban el 40,21%, por lo que Nasralla tenía un 4,77% de votos a su favor por encima de Hernández¹. Este comportamiento del Tribunal Supremo Electoral reflejó la parcialidad del organismo electoral, ya que en otros procesos se reportan resultados preliminares cada dos o tres horas.

Se trató de un golpe electoral y no únicamente de un fraude electoral, aunque también lo implica, por las razones siguientes: en primer lugar porque existen evidencias, como las declaraciones de Marco Ramiro Lobo, magistrado del Tribunal, de que el presidente Juan Orlando Hernández llamó directamente al magistrado presidente de esa instancia, David Matamoros Batson, para que retrasara los resultados que favorecían a Salvador Nasralla. Este hecho demuestra una intervención directa del Poder Ejecutivo en el proceso electoral.

En segundo lugar, la tendencia favorable a Salvador Nasralla ya era irreversible, por tanto, se evitó que llegara a la presidencia de la República un presidente electo. En un análisis realizado para la Organización de Estados Americanos (OEA) por Irfan Nooruddin, profesor de la Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown, se concluye que:

Las elecciones nacionales hondureñas de 2017 experimentaron un cambio dramático en el voto lejos de la Alianza de la Oposición y hacia el Partido Nacional en el poder. Este análisis plantea dudas sobre la verosimilitud de tal reversión [...] Si uno cree que los votos coinciden para ser exactos, es plausible tener tal oscilación. Pero el patrón de votos, particularmente en las tasas de participación, es sospechoso. Como se documentó anteriormente, hay una interrupción marcada en los datos que es difícil de explicar como pura casualidad (Nooruddin, 2017: 7).

En la parte final de la conclusión el informe es contundente: “sobre la base de este análisis, rechazaría la proposición de que el Partido Nacional ganó las elecciones legítimamente” (Nooruddin, 2017: 7).

1 *La Tribuna* 27 de noviembre de 2017.

En tercer lugar, la experiencia histórica ha demostrado que ningún golpe político se produce si no se cuenta con la participación, o al menos tolerancia, de los militares. Los militares hondureños primero toleraron el golpe electoral de noviembre de 2017, y luego reprimieron brutalmente al pueblo hondureño que se había movilizad para que el golpe electoral se revirtiera. Según el Centro de Estudios para la Democracia, las movilizaciones ciudadanas contra el fraude evidenciaron dos situaciones: “por un lado, la enorme y diversa fuerza social que demanda cambios democráticos y, por otro lado, un régimen debilitado que tiene como único recurso la represión, siendo su principal soporte las Fuerzas Armadas y la Policía Militar de Orden Público, PMOP” (CESPAD, 2018: 3).

En cuarto lugar, en Honduras, donde las élites políticas, económicas, militares y religiosas tienen una larga historia de sometimiento y subordinación a la geopolítica de Estados Unidos, ningún golpe político se produce sin su aquiescencia. En este sentido, el reconocimiento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dado al régimen de Juan Orlando Hernández es uno de los factores determinantes para que éste se impusiera en un segundo periodo gubernamental mediante un golpe electoral.

Pero, ¿qué es lo que hizo posible que el presidente Juan Orlando Hernández impusiera una reelección anticonstitucional mediante un golpe electoral y que contara con el apoyo de los principales grupos de poder y de Estados Unidos? La respuesta a esta pregunta se sustenta en los argumentos y hechos siguientes:

En primer término, los actores principales del fraude electoral son los mismos del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. En aquel año, la oligarquía hondureña mostró su cara más conservadora y evidenció que no estaba dispuesta a tolerar los más mínimos cambios populistas que estaba impulsando el presidente José Manuel Zelaya Rosales. Esta oligarquía también exhibió su carácter demofóbico porque le tenía pánico a la participación popular, como lo demostró con la oposición férrea a la realización del proyecto de la “cuarta urna” que propuso el presidente Zelaya Rosales.

En segundo lugar, el impacto más significativo del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 fue la masiva e intensa movilización ciudadana en rechazo al golpe y, posteriormente, la ruptura del viejo, tradicional e histórico bipartidismo, así como la emergencia de nuevas fuerzas con capacidad de competencia política efectiva real. Este no fue un cambio menor porque significó un golpe duro al instrumento de dominación política y de control del Estado de la oligarquía y de los grupos económicos más relevantes del país. Las nuevas fuerzas políticas que emergieron después del golpe de Estado,

sobre todo el Partido Libertad y Refundación (Libre), son más cercanas a los sectores populares. Así que a la oligarquía le quedó como único instrumento político el Partido Nacional, ante la implosión que produjo el golpe de Estado en el Partido Liberal y su incapacidad de recuperarse en el posgolpe.

En tercer lugar, a partir de 2009, los grupos económicos, políticos, religiosos y mediáticos más conservadores se han alineado en torno al Partido Nacional, como el único instrumento que les garantiza la continuidad de los privilegios y les da *status quo*. Este alineamiento le ha permitido al Partido Nacional ejercer el control del Estado, sobrevivir a grandes escándalos de corrupción e impunidad, imponer una reelección ilegal y anticonstitucional y llevar a cabo el fraude electoral más visible, el de las elecciones generales de 2017.

En cuarto lugar, no se puede olvidar que a partir de 2009 se desarrolló un intervencionismo renovado de Estados Unidos en los asuntos internos del país. Honduras sigue siendo un país de mucha importancia geopolítica para el país del norte, que sigue tratándolo como su “patio trasero”. La embajada y el Departamento de Estado de los Estados Unidos manejan de manera directa y abierta temas como las políticas de seguridad y migración, entre otros. Hernández ha sido un fiel representante de la política estadounidense y es una garantía de los intereses de ese país en Honduras, de ahí que no sea casual la permisividad de Estados Unidos con la reelección inconstitucional y que haya avalado el golpe electoral a favor de Hernández en las elecciones del 26 de noviembre de 2017 (Sosa, 2018: 21-22).

El pueblo hondureño se tomó las calles nuevamente. Al igual que el golpe de Estado de 2009, el golpe electoral de noviembre de 2017 no se impuso sin la resistencia del pueblo hondureño. Las movilizaciones que se desarrollaron entre el 29 de noviembre de 2017 y el 27 de enero de 2018 adquirieron, en varios momentos, un carácter cuasi insurreccional, pero el régimen oligárquico proimperialista se impuso mediante la represión brutal. En su informe sobre las violaciones a los derechos humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) concluyó que veintitrés personas (veintidós civiles y un agente de policía) resultaron muertas en el contexto de las protestas poselectorales, que se produjeron detenciones masivas y que al menos 1.531 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre por violar el toque de queda. El informe también documenta el aumento de las amenazas e intimidaciones contra periodistas, colaboradores de los medios de comunicación y activistas sociales y políticos (OACNUDH, 2018).

¿Qué régimen político surgió en Honduras tras el golpe de Estado de 2009 y el golpe electoral de 2017? Es una pregunta abierta al debate,

pero lo que sí se puede afirmar es que el régimen político hondureño está muy lejos de ser una democracia, aún de carácter procedimental liberal. El régimen de Juan Orlando Hernández se caracteriza por el radicalismo neoliberal, el autoritarismo, los pactos de corrupción e impunidad, la represión y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, además de por un vacío de consenso en la ciudadanía.

BIBLIOGRAFÍA

- CESPAD (Centro de Estudios para Democracia) 2018 *Monitoreo y cronología de la crisis política hondureña. La Policía Militar de Orden Público: principal baluarte del régimen de JOH. Del 17 de diciembre de 2017 al 12 de enero de 2018* (Tegucigalpa: CESPAD).
- Nooruddin, I. 2017 *Analysis for the Organization of American States (OAS)* (Walsh School of Foreign Service-Georgetown University), 17 de diciembre, en <<https://www.oas.org/fpdb/press/nooruddin-analysis-for-oas-honduras-2017.pdf>>.
- OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) 2018 *Las violaciones de los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras* (Tegucigalpa: OACNUDH).
- Sosa, Eugenio 2018 “El alzamiento popular contra el fraude en Honduras” en *Envío* (Tegucigalpa) Año 16, No 54, febrero.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL TRASLAPE DE LA CRISIS POSELECTORAL HONDUREÑA

Mauricio Valladares Gómez*

Mucho se habla sobre los actores involucrados de forma directa en la crisis política hondureña, identificados plenamente: desde el presidente de la República, su partido político (Partido Nacional), las instituciones públicas y los poderes del Estado (denunciados por estar controlados por el presidente), hasta las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Policía Militar, que han desempeñado un papel significativo en el control y represión de las protestas originadas por una cantidad cada vez mayor de ciudadanos inconformes con los resultados de los comicios electorales, lo que generó la mayor crisis política en la historia de esta pequeña nación centroamericana.

En el desarrollo de la crisis pre y poselectoral no resulta menos importante el papel que han jugado los medios de comunicación, lo que, en el caso hondureño, no supone un accionar novedoso en las dinámicas de poder articuladas al interior del país; sin embargo, se

* Hondureño. Magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional General San Martín (UNSAM), Argentina. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Administrativo. Actualmente dirige la ONG Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH) y es docente en Derechos Humanos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

convierten en un actor fundamental necesario para la consumación del proyecto político del presidente, funcionando desde un segundo plano y complementando la labor que ejecutan los cuerpos de seguridad del Estado, ya que su rol implica la responsabilidad de contener y disipar toda información para producir una mayor crispación y convulsión social, o bien la de difundir distractores que eliminen del escenario toda acción que pueda debilitar aún más al gobierno, así como la figura y continuidad del mandatario reelecto.

“EN HONDURAS TODO SE OLVIDA”¹. LA OPINIÓN NACIONAL MANIPULADA SISTEMÁTICAMENTE

Para comprender un poco la dimensión del papel que juegan los medios en las crisis políticas históricas hondureñas, y particularmente en la actual, basta con comparar los posicionamientos y enfoques que una buena parte de la prensa radial, televisada y escrita poseía en 2009 (durante el golpe de Estado) y la que mantienen en la crisis poselectoral gestada por la reelección de Juan Orlando Hernández (JOH)².

En aquel entonces (2009), un Manuel Zelaya³ debilitado institucionalmente recibió una crítica y un señalamiento frontales al ser acusado de instigar la ruptura del orden constitucional por su ambición continuista. Los medios fueron señalados como parte del grupo conspirador que configuró la caída de Zelaya. Posteriormente asumieron roles de promotores de paz y reconciliación a través de la apertura de espacios, flexibilizando sus críticas, sugiriendo la necesidad de aplicar reformas políticas y estructurales al país, y denunciando con énfasis casos emblemáticos de corrupción y narcotráfico.

Consumada la reelección y el proyecto continuista del presidente surgen las siguientes interrogantes: ¿qué produjo la pasividad y el simplismo con el que la mayoría de los medios han asumido la crisis poselectoral en Honduras?, ¿por qué el cambio de criterio y la suavidad en las críticas periodísticas con respecto a 2009? Basta con leer los diarios de mayor circulación y sintonizar canales de televisión y programas radiales, los cuales, desde tempranas horas y hasta el cierre de sus programaciones, saturan a la población con opiniones, artículos y noticias tendientes a dejar en un segundo plano las muertes violentas producidas en el contexto del conflicto, a minimizar —y en muchos

1 Frase del argot popular hondureño que hace alusión a la corta memoria histórica y crítica que posee la sociedad.

2 Declarado presidente reelecto por el Tribunal Supremo Electoral para el período 2018-2022.

3 Presidente constitucional 2006-2010, derrocado por golpe de Estado el 28 de junio de 2009.

casos criminalizar— la movilización y protesta social, a desestimar las denuncias de fraude por parte de la oposición, a desatender la relevancia del informe final sobre las elecciones de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) (en donde se concluye que es muy difícil identificar un claro ganador debido a las fallas del sistema y al débil proceso electoral) y a dejar de poner el dedo sobre el renglón en los casos que señalan a funcionarios del actual gobierno, e incluso al presidente de la República, de nexos con el narcotráfico y la corrupción.

No era raro encontrar notas periodísticas como “Hondureños se olvidan de la política para vivir la Navidad” (*Proceso Digital*, 2017), publicada en el punto más álgido de la crisis (seis días después de haberse declarado ganador a JOH), por lo que se pretendía teñir de estabilidad el ambiente de crisis político-social en el contexto prenavideño, pero, contradictoriamente, se contribuía a la polarización al enfatizarse declaraciones como: “nos tenían fregados con esa gente revoltosa, pero empiezan a mejorar las ventas”, en franca oposición a las protestas. De esa manera, que es una de muchas, y con estrategias que escapan a la percepción de la ciudadanía, se van tejiendo esquemas que buscan controlar la opinión pública de manera sistemática modificando conductas individuales en detrimento de las necesidades colectivas, introduciendo en la subjetividad de la sociedad la conclusión de que en Honduras no va a pasar nada o que no sirve de nada protestar porque el resultado es el mismo, y alejando de a poco el panorama de una posible revolución o “primavera” hondureña⁴.

LA COOPTACIÓN DEL PERIODISMO Y LOS INTERESES EN JUEGO

Tampoco significa que los medios de comunicación ostenten el poder. No son el cuarto poder sino mucho más importantes: son el espacio donde se crea el poder (Castells, 2009: 262).

El control que ejerce el Estado es tal que el gremio periodístico permitió la reforma al artículo 335-B del Código Penal, que se denominó Ley Mordaza y en la cual se limita la capacidad de análisis, investigación y críticas que puedan expresar los periodistas, ya que el Estado puede estimar que constituyen acciones de apología al odio o de justificación del “terrorismo”. En ese sentido, la pretensión del actual Congreso de controlar y penalizar el contenido que difundan los usuarios de los medios digitales y redes sociales no ha recibido mayor oposición por parte de los periodistas y medios de comunicación pese a que, bajo toda lógica, constituye una violación

4 En referencia a las protestas civiles en el mundo árabe entre 2010 y 2013 que provocaron la caída de diversos gobiernos.

a la libertad de expresión.

Esto podría deberse a que en el año 2013 los medios de comunicación pasaron de ser poderes facticos que disputaban parcelas de poder al sistema político, a ser miembros permanentes y activos en la mesa para la toma de decisiones del país, por causa fundamentalmente del Decreto Legislativo No. 86-2013, que contempla la Ley del Programa Voluntariado de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones, en la cual los medios de comunicación pueden canjear con el Estado sus deudas derivadas del impago de impuestos y servicios públicos, así como sus obligaciones presentes y futuras generadas por dichos conceptos.

Sumas desconocidas de pagos por pautas publicitarias del Estado a los diferentes medios de comunicación y noticieros, la contratación de periodistas en diversas secretarías de Estado en plazas intermedias y de dirección, así como su inclusión en planillas a cargos de elección popular y de toma de decisiones por parte del oficialismo, son prácticas que se han implementado progresivamente. Es probable que sea ahí donde haya que buscar respuestas a las interrogantes que hemos planteado.

BIBLIOGRAFÍA

Castells, M. 2009 “Comunicación y poder” (Madrid: Alianza Editorial).

Proceso Digital 2017 “Hondureños se olvidan de la política para vivir la Navidad”, 23 de diciembre, en <<http://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/hondurenos-digieren-trago-amargo-de-crisis-politica-para-vivir-la-navidad.html>>.

